



CARLOS RAIMUNDI



DEBATES PARA UN TIEMPO ARGENTINO



Debates para un Tiempo Argentino

CARLOS RAIMUNDI

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina

Ninguna parte de esta publicación, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

INDICE

| | |
|---|----|
| Índice | 5 |
| Prólogo | 7 |
| Palabras de Hebe de Bonafini | 11 |
| Introducción | 13 |
| | |
| Capítulo I | |
| Argentina, situación política y consolidación del modelo | 21 |
| La disputa por la política | 23 |
| Mucho más que un texto aprobado | 26 |
| Un paso fundamental en la disputa de hegemonía | 28 |
| Medios y “clima de negocios” | 29 |
| ¿Es independiente el poder judicial? | 32 |
| Dos reflexiones sobre el futuro inmediato | 35 |
| Por qué 2011 será un año crucial | 38 |
| La batalla es contra los jefes | 41 |
| Profundizar para consolidar | 45 |
| Miguel del Sel y el vaciamiento de la política | 48 |
| Para el nuevo manual de zonceras | 51 |
| Tomar medidas populares es lo más responsable | 53 |
| Distribución y re-distribución de la riqueza, y del ingreso | 56 |
| El monopolio oprime, el Estado libera | 60 |
| Los caminos posibles de una reforma | 64 |
| ¿Para quién es prioridad la brecha cambiaria? | 68 |
| Ley de Medios: un fallo para ‘las partes’. ¿Qué partes? | 70 |

| | |
|---|----|
| La disputa por la hegemonía está vigente y es nuestra | 75 |
| En el camino de la ampliación de derechos | 79 |
| Per Saltum | 81 |
| El discurso del amo, recitado por el esclavo | 83 |
| “Si no les gusta una ley, no la cumplen” | 89 |
| Los hábitos del poder | 92 |
| Sin fraudes ni proscripciones | 95 |
| La cuestión del Poder en el lenguaje democrático | 98 |

Capítulo II

| | |
|--|------------|
| La región, el contexto, y el camino de la integración | 103 |
| Unidad y autonomía para encauzar el conflicto | 105 |
| Es necesario repensar nuestras instituciones | 109 |
| Medios, gobierno y el poder en la región | 113 |
| La incorporación de nuevos sujetos | 116 |
| Descolonización de América Latina | 119 |
| La batalla por la autonomía política | 122 |
| Con los Estados Unidos, lo cortés no quita lo valiente | 127 |
| Malvinas: el derecho y el poder | 131 |
| Diplomacia y soberanía integral | 135 |
| Plebiscito isleño, otro acto de debilidad | 138 |
| Para impedir que en Paraguay gane el grupo “A” | 140 |
| América latina debe decidir su futuro | 141 |
| La emancipación como un proceso histórico | 143 |
| El poder popular y la economía solidaria | 145 |
| La reforma constitucional y el contexto sudamericano | 149 |
| Afianzar la patria grande | 154 |

Capítulo III

| | |
|---|------------|
| Reportaje radial de Hebe de Bonafini a Carlos Raimundi | 157 |
|---|------------|

PROLOGO

El libro de Raimundi posee una cierta particularidad.

Al contrario de la mayoría de los trabajos de recopilación de este tipo (o, por lo menos, de la generalidad de los que a uno le llegan, vio y en algunos casos leyó), está presentado en capítulos con un criterio de unidad conceptual. No lo digo con un sentido de crítica necesariamente desfavorable contra los textos que sólo suman ideas o relatos. Hay labores de acumulación entre buenas y magníficas, inclusive en el campo periodístico, porque el valor de cada artículo *per se* es suficiente para sentirse a gusto. Para ratificar opiniones propias. Para cuestionárselas. Para dudar. Para lo que fuere. Pero si de preferencias se trata, la mía se inclina hacia la “organización” del ideario que se pretende volcar. Y en cualquier caso, más allá de predilecciones personales, la interpreto como una mecánica que nunca resta. Siempre suma. Tal vez, lo que impulsó a Carlos a ofrecer su libro testimonial de esta manera sea el hecho de que es un dirigente político. No lo sé. No lo hablé con él. Simplemente, me remitió los capítulos y me enorgulleció con el pedido de que le escribiera un prólogo. Ojalá sea lo que imagino. Que, en tanto hombre que viene de la política, quiso presentar sus ideas organizadamente. Hay el hartazgo frente a (muchos de) sus colegas de la actividad política que, en lugar de ensamblar lo ideológico con un criterio de razonamiento totalizador, se remiten a bartolear reflexiones sueltas con el único objeto del impacto mediático. Esa gente le hace daño a la política. Por carácter transitivo, este libro le hace bien al exhibir, desde allí, un relato con fuste ideológico. Y para el cual, además, hay una espalda de coherencia, de trayectoria, que lo sostiene. Una coherencia que es tal por lo que habitualmente se denuesta: cambiar de carné partidario. Sobre esto se volverá dentro de unos párrafos.

El capítulo 2, “*La región, el contexto y el camino de la integración*”, es quizá la mejor demostración de lo señalado, en cuanto a lo articulación de las ideas. Las notas reproducidas son fieles a su título y van desgranando por área, en una línea tematizadora que no permite la dispersión del lector: instituciones, medios de comunicación, liderazgos, etcétera, sin perder de vista el marco mundial y el papel sempiterno de los Estados Unidos. Raimundi deja claro, en forma constante y precisa, la necesidad de pensar global y actuar local. El primer capítulo tiene lo suyo, y destaco en específico la nota acerca de la disputa hegemónica. Solamente digo: si es por lo que sobresale más redondo en lo profesional, el que más me gusta es el segundo. Y aunque pueda parecer una obviedad, un decoro elemental, también me parece que corresponde resaltar el lenguaje simple, pero nunca simplote, que portan todos los artículos. No soy amigo personal de Raimundi. Sí lo entrevisté muchas veces, desde hace rato, y puedo dar fe de que en la oralidad tiene igualmente esa preocupación por hacerse entender fácil sin perder estatura expresiva. De algún tiempo a esta parte o jamás fue distinto, en múltiples áreas del pensamiento y de la ejecución creativos, se siente el pulular de gentes rendidas ante la imagen de que escribir o exponerse difícil, enroscado, críptico, hace a ganar prestigio. Allá ellos.

En los prólogos de libros, como en sus presentaciones públicas, suelen ocurrir dos cosas casi sin excepción: en vez de hablar del libro se parlorea exclusivamente sobre el autor, que por lo general es indicativo de no haber leído el libro. Y se ahorran críticas por razones diplomáticas, llamémosles. Sobre esto último, deseo transgredir y hago una. No por la transgresión en sí, aclaro y espero que me crean. Es bueno que también rompamos reglas para seguir sirviendo al pensamiento crítico de leche positiva. Transcribir la entrevista de Hebe ilustra el arco de admiración, o respeto, o atención, que genera Carlos entre quienes abrevamos en un mismo y abarcativo palo ideológico. Yo le hubiera quitado la literalidad (en el argot periodístico se denomina justamente transcripción literal, o en seco) y me habría jugado a readaptar el reportaje sin alterar su espíritu, pero sí la letra. La nota es rica, pero su sintaxis gráfica va en desmedro de lo que habrá podido percibirse en la escucha radiofónica.

En el cierre, sí quiero referirme al autor taxativamente. Carlos es un tipo de la política que, aunque joven por edad y energía, carga ya la mochila de esos cambios que hace unas líneas definimos como de documento pertenencial. Su origen en el radicalismo al igual que sus avatares, producto de un partido que estalló gracias a las tremendas contradicciones de clase que cualquier sujeto politizado recita de memoria, lo llevaron de acá para allá. Pero “allá” jamás significó apartarse de la dirección correcta, por más que quiera encontrarse y hallar algún muerto en el placard del que nadie, absolutamente nadie, está exento. Carlos siempre terminó bien. Y sigue bien. Su ubicación en Nuevo Encuentro vendría a ser lo que corona -es un decir- esa tensión entre orígenes y desarrollo, con rumbo a no confundir al enemigo antes que nada. Me privo de dar la lista de quienes sí lo hicieron. Y lo hacen. Y seguirán haciéndolo.

Por lo tanto, aquí está el libro de un tipo que, en lo esencial, no se extra-
vía. Vale citarlo como ejemplo. No el único, por cierto. Si encima el libro está bien organizado, con capacidad de síntesis profunda y arranque de buena escritura, agrego mi modesta recomendación a ese orgullo de que me haya pedido el prólogo.

Eduardo Aliverti



No me atrevería nunca a hacer un prólogo del un libro sobre análisis político hecho por un hombre como Carlos Raimundi, solo lo hago a modo de saludo ¡Salud! Carlos por tu forma de sentir y ver la política ¡Salud! Por ser tan certero en tus explicaciones y gracias por cederme este espacio, para poder abrazarte fuerte y decirlo, gracias por dejarme ser tu compañera

Hebe

INTRODUCCIÓN

Si bien siento vocación política desde que tengo recuerdos de mí mismo, las primeras incursiones públicas datan de mi etapa secundaria, en el Colegio Nacional. El “Nació” pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, reproduciendo, en menor escala en términos cuantitativos, la relación entre el Nacional de Buenos Aires y la UBA.

El clima de época de los últimos sesenta y los primeros setenta, marcó a fuego a aquellos estudiantes. Las larguísimas colas para entrar al Comedor Universitario, no sólo albergaban diariamente a miles de alumnos, sino que brindaban el espacio ideal para los debates y las discusiones sobre el país, el continente y el mundo. Discusiones signadas por una gran diversidad de ideas, que, en su inmensa mayoría, abrevaban en el tronco común de la izquierda. Izquierda ideológica, trotskista, liberal, nacional y popular, en fin, distintas variantes, pero izquierda al fin.

Mis cinco años de estudiante secundario, 1970–1974, atravesaron siete presidentes -Onganía, Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel-, señal de la convulsión política de la época. Y todo eso, en el marco del clima de romanticismo revolucionario que envolvía la militancia y la vida de los jóvenes prácticamente en todo el mundo. Yo contemplaba a los militantes universitarios, como si perteneciera a las divisiones inferiores de un equipo de primera, con la admiración que corresponde hacia todos aquellos y aquellas que habían asumido un compromiso con lo social, fuertemente impregnado por esa matriz de izquierda que nunca más me abandonaría. Hasta que, en 1972, el retorno de Perón cruza la incipiente formación teórica, con la vibración propia de las grandes masas populares.

Sobrevienen los acontecimientos que van de 1973 a 1976, y yo todavía sin partido... En 1974, la izquierda del peronismo asume el dictado de los Cursos de Realidad Nacional en los secundarios de la Universidad, pero, en 1975 –el año en que ingresé a la Facultad de Derecho–, la conducción del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales había sido ganada por el giro a la derecha del gobierno nacional. Eso derivó en grandes disputas, enfrentamientos, persecuciones, que antecedieron al golpe del 24 de marzo de 1976.

En el marco del terrorismo de Estado, la dictadura cerró todos los Centros de Estudiantes del país, salvo una media docena que sólo operaban como meras bolsas de intercambio de material de estudio, y por lo tanto no implicaban un peligro serio a los intereses del gobierno militar. En ese contexto, el primer Centro que se reabre en el país, como fruto de la reunión de miles de firmas de estudiantes, fue, precisamente, el Centro de Estudiantes de Derecho de La Plata. Sólo nos permitían llamarlo “Cooperativa”, y no Centro, pero eso nos bastaba para mantener la sigla C.E.D., que remitía a una tradición de militancia política.

Mi primera función en aquella conducción provisoria del Centro recuperado, fue encargarme de la “Comisión de Deportes y Fiestas”. Ante la represión del debate político-ideológico abierto, eso nos permitía ir rearmando el tejido social interno de la Facultad a través de la organización de campeonatos de fútbol y la venta de entradas para reunirnos en los locales de algún Centro Regional, de los que albergaban a los estudiantes del interior de la Provincia de Buenos Aires, y del país. Así fueron trascurriendo los años de la dictadura, y se fue haciendo fuerte entre los jóvenes la figura del Dr. Raúl Alfonsín, cofundador –entre otras cosas– de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Franja Morada había protagonizado la lucha por la reapertura del Centro. Clandestinamente, distribuíamos el periódico “La República”, que Hipólito Solari Yrigoyen coordinaba desde su exilio en París.

Mis ideas estuvieron siempre a la izquierda de aquella estructura. Pero la posibilidad de abrazar una ideología pura de toda pureza cedía, claramente, ante la decisión y la necesidad de representar a grupos más amplios: debía inclinarme por alguna de las dos estructuras mayoritarias. Y, frente a una juven-

tud peronista diezmada en todos sus aspectos por el pasado reciente, terminé adhiriendo a las expectativas esperanzadoras que el alfonsinismo y la Junta Coordinadora despertaban entre los jóvenes. El hecho de que la fórmula del PJ para los comicios de 1983, Luder-Bittel, anunciara que iba a respetar el decreto de autoamnistía a los represores que había sancionado el gobierno de Reynaldo Bignone, fue decisivo para que me enrolara en la muy movilizada Juventud Radical, cuya organización nacional presidí entre 1985 y 1987.

Un primer hito marca esta historia de militancia. Aquel domingo de mayo de 1987, por la mañana, el presidente Alfonsín cita a la dirigencia juvenil a Olivos, luego de las infructuosas explicaciones que varios funcionarios intentaron darnos para justificar la ley de obediencia debida. Él arrancó con una sentencia: “Hay nada más que un 25% de posibilidades de salvar la democracia”, lo que era lo mismo que decir que había un 75% de probabilidad de golpe de estado. Aquel razonamiento concluía con un mensaje implícito, que luego Alfonsín escribiría en sus memorias: “había que limitar la justicia para salvar la democracia”.

Estoy seguro de que lo hacía de buena fe. Pero la respuesta de boca de quien está escribiendo estas líneas, fue: “el problema es qué tipo de democracia se construye de aquí en más; seguramente no será una democracia con todos los riesgos que implica el pueblo en las calles, sino una democracia condicionada a tener que negociar siempre con el poder”. Si bien en los hechos ya venía ocurriendo, fue a partir de aquel momento simbólico, y hasta 2003, que tuvimos presidentes que, en lugar de interpelar al poder en nombre del mandato popular que habían recibido, terminaron justificándose ante el pueblo, en nombre de las exigencias que el poder les imponía.

En 1989 fui electo diputado nacional por la UCR, en reconocimiento de toda aquella militancia, pero durante los cuatro años de mandato debí presenciar acuerdos, que, además de ser una claudicación ideológica, pondrían a ese partido ante la irreversible situación de convertirse en una fuerza minoritaria. No había ningún eco interno para que mis planteos se escucharan. Es más, a quienes de manera abstracta sostienen que “hay que pelearla desde adentro”,

les respondo con una sensación física que yo cargaba en aquellos tiempos, y que pude explicarme tiempo después, a raíz de un hecho fortuito. La anécdota es la siguiente: yo debía tomar un avión en Roma, aeropuerto de Fiumicino, llevaba mucho peso y estaba con el tiempo justo. Al bajar del tren que conecta la ciudad con el aeropuerto, tenía que subir de nivel por unas escaleras mecánicas que estaban detenidas, esas que se activan no bien uno se para sobre la plataforma. Intuí que la que subía era la de la derecha. Apenas pisarla, me di cuenta de que intentaba subir los escalones, con mucha carga de equipaje, por una escalera mecánica que descendía. Si un día pueden, traten de experimentar esa sensación: intentar ascender luchando contra toda una maquinaria que hace todo lo posible para ir para abajo. Esa era mi sensación cuando formaba parte del bloque de la UCR. Mientras tanto, firmaba mis proyectos con lo que en aquel momento era el “Grupo de los Ocho”, integrado por Carlos Chacho Álvarez, Germán Abdala, Darío Alessandro padre, Juan Pablo Cafiero, el “conde” Ramos, Moisés Fontela, Franco Caviglia y Luis Brunatti. Mi primer proyecto convertido en Ley fue el de Paritarias para Trabajadores Estatales, que presentamos en conjunto con el querido Germán Abdala.

De mi producción junto a algún legislador de la UCR, sólo recuerdo, llamativamente, haber acompañado nada menos que un proyecto de Ley de Medios elaborado con mucho coraje por Osvaldo Álvarez Guerrero, que contenía los postulados que sosteníamos desde el Comité Nacional de la Juventud Radical. La revista “El Periodista” no me deja mentir. En su edición del 14 de enero de 1988 publicó unas declaraciones mías sobre la posibilidad de debatir una nueva Ley Nacional de Telecomunicaciones, que decían: “Una ley de Radiodifusión debe estar inscrita en el marco de una cultura nacional, entendiendo a este concepto como la conciencia de la sociedad. Esa ley deberá obstaculizar los monopolios y comprender a la libertad de expresión no como la libertad empresarial de expresar lo que se les antoje, sino como el derecho del pueblo a ser informado con objetividad. A los medios de comunicación social hay que entenderlos como un servicio público, y hay que eliminar conceptualmente el rating como espina dorsal de la comunicación.” Trascricción literal.

Mi participación en el partido radical provino de una elección estrictamente intelectual, despojada de toda influencia de la tradición familiar o de cuestiones afectivas. Jamás me sentí –porque jamás lo fui– un radical de entraña. Y jamás recordé a esa época con nostalgia. Sí, con la bronca de cómo, a través de la desmovilización y la defección paulatina de la agenda original del 83, se desperdició una gran oportunidad.

Por eso el Frepaso, en 1994, y la confluencia y la cotidianidad con entrañables compañeros que provenían del peronismo. Creíamos en la necesidad de construir una nueva fuerza política ante el agotamiento del bipartidismo tradicional. Al poco tiempo, mi derrota en la discusión interna, y la decisión de aliarse con uno de los dos partidos a los que tanto se había criticado. Y la defección y traición de la Alianza. La implosión del Frepaso, los casi tres millones de votos del FRENAPO en un comicio voluntario, desaprovechados más adelante. Y el surgimiento de Elisa Carrió como emergente de aquella crisis de representación, hasta su intempestivo giro a la derecha unos años más tarde. Como respuesta a ello, la formación del bloque parlamentario del SÍ, Solidaridad e Igualdad, y la construcción de ese Partido para integrarlo al Frente Nuevo Encuentro. Siempre en una misma línea, y en pos de un mismo anhelo.

Si algo me siento es un militante, y si alguna facilidad creo tener, es tratar de pensar cómo llega la realidad política a un no-militante. En ese sentido, estoy convencido de que, cuando un político ha tenido poder y ha defecionado, el llamado ‘ciudadano común’ se indigna si, pasado un tiempo, lo escucha dar indicaciones sobre cómo resolver el futuro. Y a mí también me indigna eso. No es que ese o esa dirigente deban estar necesariamente inhabilitados. Lo que sí deben hacer previo a todo, es una fuerte autocrítica; expresar, en sus palabras y en sus hechos, la voluntad de reparar sus errores. Hacerse responsables. Y esa situación, seguramente, les deparará el costo de retroceder en su ascendiente sobre la sociedad.

Esa autocrítica es lo que trataré de hacer en este párrafo. No es la primera vez que lo hago, pero lo considero necesario, porque fue un error importante en mi historia política. Es el hecho de no haber enfrentado a tiempo la clau-

dicación de la Alianza, y su traición al mandato de sus electores. Hay algo peor que reproducir los peores vicios de la política tradicional. Y es hacerlo en nombre de lo nuevo. Si bien es cierto que salir de la convertibilidad no era sencillo, había medidas que sí se podrían haber tomado. Y si no se lo hizo fue porque se había pactado la continuidad con los núcleos más sensibles del menemismo. Si una administración no saca a Carlos Silvani de la conducción de la AFIP, a Pedro Pou del Banco Central, a Julio Nazareno de la Corte Suprema y a Rodolfo Barra de la Auditoría General, es porque pactó la continuidad. Y yo debí haberlo enfrentado antes, como lo hicieron algunos otros compañeros y compañeras.

Apoyé algunas medidas, no tanto por su texto, sino por creer en un contexto de cambio. Cambio al que quienes conducían habían renunciado. Jamás apoyé los ajustes a los más débiles. Pero sí lo que se llamó la reforma laboral, que trasponía algunos umbrales de derechos a cambio de un supuesto shock de inversiones para salir de la recesión. Creí en eso que nunca llegó. Y voté también algunas facultades para el ministro Cavallo. Las votamos, pero también es cierto que a partir de la actitud de algunos diputados, conseguimos recortar drásticamente el proyecto original que se había enviado al Congreso.

Desde luego que no se me escapa la crítica que se me formula por haber formado parte de diferentes espacios políticos. Pero quienes deben dar explicaciones son aquellos referentes que llevaron los proyectos originales, a lugares opuestos a los que nos habían propuesto a la hora de su formación. No se puede escindir mi derrotero, ni el de tantos miles y miles de argentinas y argentinos, de la profunda crisis de representación política, que pasó de concentrar el 95 % de los votos en los dos partidos mayoritarios, a su división al infinito, como si fuera la cariocinesis de la célula. Siempre busqué sostener mi consistencia ideológica. Para quienes condenan eso: ¿a qué llaman ser coherente? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Quedarme en una organización que preconizaba el ideal antiimperialista en la Universidad y terminó priorizando los cargos rentados que garantizaran el statu quo? ¿Quedarme en un espacio que sostuvo toda la vida la importancia del Estado, pero cuando se re-estatiza

Aerolíneas o los fondos previsionales vota en contra? ¿Seguir junto a una mujer que se fue desquiciando y perdiendo racionalidad, y que pasó de expresar la protesta social de 2001 a aliarse con los ministros del gobierno represor? ¿Eso tendría que haber hecho? ¿Eso hubiera sido ser coherente? Categóricamente: no. Eso hubiera sido convalidar la claudicación.

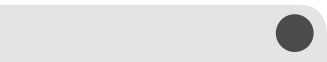
Nunca traté de especular con la cercanía del poder. Al contrario, si algo caracteriza a estos más de treinta años de militancia, es, justamente, que ante las sucesivas defraudaciones intenté fundar espacios que consideré más puros. Por lo tanto más pequeños, y, por lo tanto, también, con cada vez menor capacidad para incidir y transformar.

Eso me llevó, a medida que se iba profundizando la etapa kirchnerista, a asumirla como propia, pese a sus contradicciones. A comprender que el desafío de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social implica poner el cuerpo y aceptar las imperfecciones.

La categoría de partido político le cabe al justicialismo. Pero el peronismo es infinitamente más que eso. Es una dimensión cultural, una memoria histórica, un capital simbólico, que trasciende una estructura, para dar continencia a ese único sujeto efectivamente transformador que es la masa de trabajadoras y trabajadores, sectores humildes, mayorías populares, aún –repito– con todas sus (nuestras) contradicciones. Y cuando un liderazgo conecta con ese sujeto, y pone proa hacia el cuestionamiento a los poderes históricamente dominantes, la historia no deja lugar para dudar de qué lado ponerme. El mismo lugar, el campo nacional y popular, del cual, con aciertos y errores, intenté ser un militante durante toda mi vida.

Capítulo I

**ARGENTINA, SITUACIÓN POLÍTICA Y
CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO .**



LA DISPUTA POR LA POLÍTICA

(*Diario Tiempo Argentino*, 27.06.10)

La distinción central entre ese vasto arco llamado campo nacional y popular (sectores progresistas, izquierda nacional y democrática, humanismo cristiano con sentido social, etc.) y los sectores reaccionarios, es la disputa por la política. No ya por un contenido u otro de la política en términos de ideas, sino por la propia existencia de la política, porque ella tenga algún contenido.

La paradoja de los grupos más reaccionarios es que su política es precisamente la anulación de la política.

Y muchos que no se sienten de derecha terminan por caer en esa trampa. Si por la derecha fuera, dirimiría sus intereses prescindiendo de los dispositivos políticos formales. Como no puede llegar a tal extremo, es que se interesa por promover figuras políticas de pobre o nulo contenido ideológico y coraje, a quienes, incluso, sus voceros llegan a retar y dar instrucciones durante las mismísimas notas periodísticas. De aquí que reaccionen tan brutalmente cuando se topan con dirigentes dispuestos a interpelarla.

Es porque hay masas desprotegidas y sin voz, que la política se torna necesaria, como factor equilibrador de tal desbalance en la ecuación de poder. Es justamente la política quien debe dar cauce institucional a una movilización masiva como la del último 15 de abril a Tribunales por la ley de medios, y compensar así el poder de los monopolios, que no tienen más que hacer un ring de teléfono para acceder al despacho del presidente de la Corte Suprema.

Los poderes permanentes han sido tan férreos en controlar que los ejes del debate público no se fueran de madre, que la mera puesta en evidencia de esa situación los lleva al terreno del antagonismo absoluto. Aceptan, aunque a regañadientes, el debate sobre algunos derechos de las minorías, la diversidad sexual o las políticas de género. Pero no toleran, y reaccionan con la agresividad que lo hacen, cuando el debate pasa a centrarse en la apropiación del excedente económico, y menos aún, en la formación de sentido. Llevado a un tema específico, pueden llegar a consentir la protección de algunas enfermedades,

pero jamás estarían dispuestos a permitir la igualación de todos los ciudadanos ante una política de salud absolutamente pública.

Es por esta misma razón que aparece en escena el denominado “progresismo liberal”, un progresismo de superficie, benévolo con los pobres, comprensivo de las minorías, pero remiso a atacar a fondo las causas políticas de la desigualdad, por el nivel de insolencia ante el sistema establecido que esa lucha demanda, por los riesgos de cierto “desalineo institucional”. Sectores que, creyendo estar a la izquierda de la izquierda, se limitan a ser la izquierda de la derecha.

En nuestro tiempo, la diferencia entre ambos campos es su actitud frente al poder. El primero, aún con todas sus imperfecciones y claroscuros, pone en discurso público temas centrales sobre los que no estábamos habituados a discutir, como la autonomía del Estado, los monopolios, la seguridad alimentaria, la propiedad de la tierra y los recursos naturales, la diversidad cultural y las organizaciones sociales como sujetos de derecho y vectores de más democracia. Una dinámica que se instala en algunos sectores de nuestra sociedad, e incluso se independiza de la voluntad del gobierno vigente. El segundo, en cambio, aguarda los titulares de los grandes medios sobre corrupción estatal y formados delegaciones: una para presentar una denuncia en Comodoro Py, y la otra para confeccionar un pedido de informes.

Lo que, en resumidas cuentas, podríamos llamar progresismo, interpela al poder.

La derecha sólo le pregunta dónde tiene que firmar, coordenadas también presentes en el marco regional. Algunos gobiernos, como el de Bolivia, ponen mucho más énfasis que el de Argentina en la apropiación de la riqueza. El nuestro, en cambio, es más fuerte en la disputa por la formación de sentido. Pero la mayoría de los gobiernos de la región están tratando de dar un contenido a la política frente a quienes procuran imponer dirigentes sin volumen propio, vacíos de discurso, a no ser su mera apelación al “consenso”. Son –en mayor o menor medida– irreverentes con los poderes permanentes, por eso

éstos intentan desvalorizar el proceso latinoamericano, buscando abrir grietas artificiales –por ahora infructuosamente- entre “presidentes institucionalistas” y “populismos anacrónicos”.

Hasta no hace mucho, este rasgo propio del subdesarrollo difería de la situación europea. ¿Por qué? Porque donde existían mayores niveles de desarrollo humano y de cohesión social, mejores canales de información pública, estructuras no tan monopólicas sino más diversificadas, mejores niveles de competencia, las categorías de izquierda y derecha se permitían estar más connotadas por lo ideológico. Es decir, al estar más distribuido el poder y el desarrollo, las categorías políticas solían encontrar más espacio en el terreno de las ideas. Pero los ajustes que se están aplicando a diversos países europeos -que parecían más resistentes al proceso de financierización- los ponen en una situación parecida a la nuestra: así como las sucesivas crisis de los años 90 provocaron el empobrecimiento estructural de las zonas periféricas del mundo, hoy el precio del descontrol financiero lo paga la periferia de Europa. Y aquí se manifiesta eso de la formación de sentido: para la interpretación oficial emanada del poder, es más importante salvar el sistema -que es, precisamente, el responsable de la crisis- que la merma de derechos ciudadanos. Aún cuando nadie puede negar que en Europa existen parlamentos que funcionan y democracias estables, algunas de ellas, incluso, gobernadas por la socialdemocracia.

¿Es necesario o no, entonces, replantearse el sentido de la institucionalidad tradicional que termina alejando al pueblo de las decisiones, aún cuando le permite votar? ¿Es necesario o no llenar a la política de mucho más contenido social del que le conceden las formaciones políticas tradicionales? ¿Es necesario o no reformular la Democracia en términos de mayor acceso popular a las decisiones de gobierno? ¿Es tiempo o no de rediseñar las formas de mediación institucional de la democracia liberal? ¿Es necesario o no dar una disputa por el espacio público, por la ocupación de la calle, por la formación de un nuevo sentido de la política? ¿Es tiempo o no de pensar que los poderes permanentes se escandalizan interesadamente por la duración de algunos mandatos presidenciales, cuya rotación permanente

-en la medida que representen intereses populares- no hace otra cosa que debilitarlos frente a la perpetuidad de esos mismos poderes menos visibles, pero mucho más influyentes? ¿Es que el riesgo para nuestros pueblos reside en que, como temen las derechas, los gobiernos populares disciplinen a los mercados? ¿No será que el verdadero riesgo que corremos es seguir colonizados por ese sustrato cultural que nos sume en la creencia de legitimidad de un conjunto de paradigmas que no han hecho otra cosa que empobrecernos, en muchos casos con nuestro propio consentimiento? Esa es la batalla del campo nacional y popular.

MUCHO MÁS QUE UN TEXTO APROBADO

(*Diario Tiempo Argentino*, 29.07.10)

El Senado aprobó una modificación del Código Civil que establece plenitud de derechos y garantías a los contrayentes del matrimonio, sin distinción de su orientación sexual.

Mirado a la distancia, esto no sería más que una demostración democrática de igualdad, que, como da cuenta de una nueva realidad en términos de los roles de los sexos, del reconocimiento de la diversidad sexual, etcétera, escandaliza a los sectores más conservadores de la sociedad, así como otras conquistas arrancadas en otras épocas también escandalizaron a los pilares del statu quo de aquellos tiempos en todos los órdenes: desde la jornada laboral de ocho horas al matrimonio civil (en aquellos tiempos, heterosexual), pasando por la ley de enseñanza laica.

Siempre hubo y seguirá habiendo expresiones de nuevas formas de relacionamiento social que motorizan cambios a los que los grupos más acomodados no están habituados ni quieren estarlo. En este marco se inscribe la última batalla.

Pero lo que además deseo resaltar es la altísima importancia de que no se hayan salido con la suya algunos grupos de poder. No porque no se deban respetar sus creencias, de las cuales son dueños y nadie puede invadirlas ni cercenarlas. Sino, más bien, por los componentes profundamente antidemocráticos que han demostrado con sus posturas y metodologías.

De haber triunfado los representantes de la jerarquía eclesiástica que amenazaron a los senadores con la difamación desde el púlpito si votaban contra la posición oficial de la Iglesia, hubiéramos acudido a una nueva muestra de dirigentes convertidos en dirigidos. Esto es, una jefatura política ejercida desde fuera de la política. Afortunadamente, muchos de los senadores amedrentados hicieron prevalecer sus propias convicciones, o en última instancia su percepción de cómo representar mejor a sus mandantes.

En segundo lugar, quienes más ostensiblemente venían denunciando la supuesta crispación de la sociedad apelando al diálogo y el consenso fueron precisamente quienes recurrieron a la figura de la “guerra de Dios” para encarar este último proceso. Es muy bueno, para una sociedad cuya evolución se encamina a mayores niveles de independencia de las instituciones civiles respecto de las religiosas, que no haya prevalecido la postura de un cardenal que aspira al papado, es decir, a convertirse en la autoridad mundial de la Iglesia, y que planteó que este proceso constituía una conspiración diabólica, una maniobra del “maligno”. ¿Cómo podría jactarse una sociedad como la nuestra de mirar al futuro si ese hubiese sido el voto mayoritario de sus legisladores?

Para lograrlo, intentaron hacer alarde de una marcha multitudinaria al Congreso, cayendo en una flagrante contradicción. Los derechos de las minorías se consagran, pero no se plebiscitan, precisamente por su condición minoritaria, aunque igualmente digna al de los derechos de las mayorías.

Por último, la extorsión de incentivar a los alumnos y familias de las escuelas católicas que manejan con no contar inasistencia a quienes concurrieran a esa marcha: una presión insostenible para aquellos niños y familias que hubieran decidido no asistir a ella. Ese sector de la Iglesia utilizando extorsivamente la herramienta de la educación para obligar a los alumnos a tomar partido en una coyuntura política.

En definitiva, más allá del texto aprobado, al que adhiero y hubiera votado si fuera legislador, también es sumamente importante ponderar cómo queda el mapa político luego de esa votación, y cuánto hubiéramos tenido que padecer de haber triunfado la posición contraria, en términos de calidad democrática y plenitud de derechos ciudadanos.

UN PASO FUNDAMENTAL EN LA DISPUTA DE HEGEMONÍA

(*Diario Tiempo Argentino*, 27.08.10)

El planteo de la presidenta es un paso fundamental en la disputa de hegemonía que atraviesa el país en esta etapa. Más allá del episodio jurídico, ayuda a desenmascarar a quienes han pretendido formar históricamente el sentido común de los argentinos, para que interpretemos los golpes, la crisis, los ajustes, las devaluaciones y los delitos de lesa humanidad de acuerdo con sus intereses.

A nadie puede pasar inadvertido que si se trataba de una dictadura que llegó al grado de desaparecer adolescentes, jamás podría haber celebrado un contrato con las grandes empresas de prensa, de no haber mediado un acuerdo de fidelidad política, un pacto de silencio tanto en materia económica como de Derechos Humanos.

Quitar el pedestal a quienes adormecieron la conciencia nacional a cambio de negocios es un avance del campo popular y les reduce, definitivamente, la credibilidad de aquí para adelante.

Con respecto a las versiones que indican que las denuncias de torturas no fueron hechas a la CONADEP, como las que realizó el doctor Gil Lavedra, opino que, pese a lo valorable de aquella comisión, se trató de un hito que no cerró las denuncias de modo definitivo, sino que a ella siguieron infinidad de alegatos que ampliaron el camino hacia nuevos juicios, muchos de los cuales se están sustanciando actualmente.

En definitiva, tengo una discrepancia conceptual con quienes criticaron la actitud de la presidenta, y es que lo que ellos llaman “libertad de prensa”, rindiendo pleitesía a los grandes medios: para mí es renunciar a poner en tensión el largo proceso de control del pensamiento argentino que llevaron adelante, y lograron parcialmente. La aceptación tácita que nuestra sociedad hizo de episodios trágicos como las dictaduras y otras crisis institucionales, la atenuación de la rebeldía frente a los ajustes de 2001, tuvieron que ver, en el primer caso, con el acuerdo entre esos grandes medios y los dictadores, y en el segundo, con el éxito de la pesificación asimétrica y la ley de bienes culturales, lo que les permitió licuar sus pasivos con los dólares que la convertibilidad les facilitó girar al exterior. Es decir, tienen mucho que ver con la interpretación promedio que buena parte de la sociedad hizo de aquellos sucesos, por su capacidad de alentar y desalentar los climas sociales de rebeldía, según la marcha de sus negocios e intereses.

Es justamente en ese punto que, al procurar la desmonopolización y el ingreso de organizaciones sociales a la formación del mensaje público, el Estado desempeña un rol liberador, y no es opresor, como piensan los voceros del poder mediático, que encabeza la oposición y escribe los libretos de muchos políticos.

MEDIOS Y “CLIMA DE NEGOCIOS”

(Diario Tiempo Argentino, 01.10.10)

En las últimas semanas, diversos medios se expresaron sobre el *ránking* de competitividad 2010 del *World Economic Forum* y, en general, ponderaron negativamente el desempeño argentino, conforme su ubicación en el puesto 87°, debajo de otros países de la región como Chile y Brasil. Estos últimos están administrados, según ellos, por gobiernos previsibles, menos plebiscitarios, no “castristas” y “chavistas” como el nuestro.

En general, se trata de la prensa del poder, la que pide seguridad jurídica pero no soporta que se haga justicia con los genocidas, la que exige “clima de

negocios” pero desdeña el alto crecimiento de nuestra economía, la que critica la inflación al tiempo que la propaga instando así a remarcar los precios. Aquella prensa que es instrumento de quienes sólo han buscado históricamente maximizar sus ganancias, y ahora ponen el grito en el cielo cuando se propone que los trabajadores participen de una parte de ellas. La que, en lugar de defender nuestra industria, titula en nombre de los grupos importadores que se quejan de que nuestro país pone “trabas” al ingreso de productos importados, como voceros de las capas sociales que están en condiciones de acceder a ellos. En definitiva, se trata de esa prensa ligada a las consultoras de riesgo, a los grupos financieros e inversores externos, que son, precisamente, los encuestados, de modo que el *World Economic Forum* arroje dichos resultados.

Sin embargo, una lectura seria de dicho informe nos llevaría a una conclusión muy distinta, o, cuanto menos, pondría en cuestión su supuesta “objetividad”. Para ello, no sólo debe tenerse en cuenta lo que el informe dice, sino lo que “no” dice, y, acto seguido, lo que los medios del poder de nuestro país traslucen, y lo que no; lo que enfatizan y lo que no.

En primer lugar, el posicionamiento de los países resulta de combinar dos tipos de relevamiento: uno cuantitativo, proveniente de datos y estadísticas que reflejan contablemente la realidad, y el otro cualitativo, esto es, mediante encuestas hechas a los ejecutivos (*executive survey*). En este sentido, digamos que, entre 139 países, la Argentina ocupa el número 132 en el ranking en cuanto a instituciones. Pero, curiosamente, en ese ítem, todos los subíndices corresponden a opiniones cualitativas, es decir, emitidas por los empresarios encuestados, lo que sesga significativamente la mirada. Se trata, precisamente, de aquellos empresarios para quienes la desmonopolización de la comunicación es un atentado contra la libertad de prensa, y, por ejemplo, el proyecto de distribuir entre los trabajadores un porcentaje de las ganancias no reinvertidas constituye una amenaza de un régimen estatista-dirigista, presto a devenir en castrista, por sus constantes amenazas a la propiedad privada. Aunque, la verdad sea dicha, su transitorio apego “institucional” al Parlamento duraría lo que la llama de un fósforo, si lograran que un Poder Ejecutivo decisionista les redujera las retenciones a cero, convirtiéndolos automáticamente –si eso

sucediera– en defensores de “una administración ágil, decidida a no paralizar su dinámica por culpa de los dilatados y perezosos tiempos parlamentarios”.

Además, ¿a qué instituciones se refiere la encuesta, para descalificar de tal manera a nuestro país? En este sentido, mi respuesta es: ¿no son acaso el régimen de paritarias, la Asignación Universal por Hijo, la movilidad jubilatoria, o la curva ascendente del presupuesto educativo, instituciones que gravitan de modo directo sobre la condición de ciudadanía democrática?

Otro indicador que no es difundido por nuestros medios tradicionales y analistas más reconocidos dentro del *establishment*, es la relación Deuda/PBI, que es del 45% y se ubica entre las mejores del mundo. Otra cosa que no dicen es que la Argentina ocupa el primer lugar en todo el continente en cuanto a la participación de la mujer en el mercado laboral, pese a todo lo que hay para mejorar al respecto. Nada dicen de que nuestras escuelas de *management* son muy bien valoradas (lugar 16° en el mundo), así como la disponibilidad de servicios de investigación y capacitación, ambas dentro del ítem Educación Universitaria, calidad de las instituciones científicas y de investigación.

En cambio, sí enfatizan la caída de la inversión extranjera directa (IED) entre 2008 y 2009, sin advertir que no sólo se trata de un dato normal para una etapa de crisis como la vivida, sino que se asemeja a los de otros países latinoamericanos que el pensamiento pacato califica como ejemplos para seguir. Además, que la IED represente un porcentaje menor del PBI en la Argentina y Brasil no debe ser leído como un disvalor, sino como la virtud de una política que tiende a proteger la inversión nacional y poner reglas al capital extranjero, ausentes durante décadas.

Respecto a la denominada “rigidez del mercado laboral”, tan atacada por los encuestados, ¿no tendrá que ver con que nuestro país ha ido readecuando paulatinamente su legislación a las disposiciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y recuperando los umbrales de la Ley de Contrato de Trabajo, aunque aún queda pendiente, por ejemplo, la eliminación del despido sin causa y una mayor des precarización del empleo?

En definitiva, nada de lo dicho significa que la economía argentina sea una panacea, ni que no haya cosas muy importantes para mejorar, como la tras-

parencia, el control y la rendición de cuentas, y el dominio de las cadenas de precios por parte de unos pocos grupos oligopólicos, entre otras. Y, básicamente, una mayor diversificación del patrón productivo, una nueva matriz de inversiones y políticas distributivas como la reforma tributaria pendiente.

Pero, a diferencia de la filosofía que orienta este tipo de encuestas, la inclusión social y un mercado interno cada vez más pujante –que sólo pueden estar asegurados por una mayor y más transparente capacidad de regulación estatal y por la provisión de bienes públicos de alta calidad– son los indicadores fundamentales para favorecer un clima de negocios sustentable en el tiempo.

¿ES INDEPENDIENTE EL PODER JUDICIAL?

(Diario Tiempo Argentino, 08.10.10)

¿Existen intereses corporativos en el ámbito judicial? ¿Cuáles son los alcances del concepto de ‘independencia’ del Poder Judicial? Se trata de un debate muy saludable que hay que dar honestamente, sin caer en el intencionado simplismo de rotularlo como que el gobierno persigue a la justicia. Un debate que se ensambla con otros, como el poder de las corporaciones, la Ley de Medios, por ejemplo, en el marco de una fuerte y también saludable disputa de sentido en el seno de nuestra sociedad.

Un debate que lleva a una primera definición inicial: hay una distancia sideral entre justicia y Poder Judicial.

Segunda definición inicial: cuando un Poder Ejecutivo, surgido del voto popular, ejerce su autoridad, mal que le pese a la oposición argentina más salvaje, está realizando un acto clara y contundentemente democrático, en el cual el Estado de Derecho se expresa en plenitud. Identificar sistemáticamente al

Poder Ejecutivo con el abuso de autoridad –como suele hacerse– no es otra cosa que la reacción de aquellos factores de poder, con menos votos que aquel, que ven afectados sus intereses.

Poder judicial y democracia. Mucho más allá de ser un mecanismo procesal de toma de decisiones, el sentido profundo de la democracia está orientado a equilibrar las capacidades de cada persona, devenida en sujeto, para confeccionar su propio plan de vida, a partir de niveles crecientes de autonomía de su voluntad. Se trata de un fundamento profundamente igualitarista.

Desde esta perspectiva, la república democrática –como superación del absolutismo monárquico– edificó el principio de la división de poderes, con dos poderes “mayoritarios”, esto es, decididos por el voto popular (el Ejecutivo y el Legislativo) y un poder “contra-mayoritario” (el Judicial) con el fin de evitar lo que los padres fundadores del sistema estadounidense llamaban el “riesgo de la tiranía de las mayorías”. El famoso concepto de “frenos y contrapesos”.

Esto dio muchos años de estabilidad a los EE.UU., en la actualidad, pero 39 de sus 52 Estados eligen por voto popular –aunque no partidario– las autoridades de sus tribunales superiores de justicia. Equivocación por equivocación, es preferible que se equivoquen las mayorías y no una minoría ilustrada.

Los alcances de la pretendida “independencia”. Es necesario poner en debate el concepto de independencia del poder judicial, lo que no implica que un gran número de magistrados no lo sea. Su autonomía, no sólo debe medirse respecto de la presión o el control que pudiera ejercer alguno de los poderes públicos, sino también de la presión ejercida por los grandes intereses privados. E inclusive, respecto de una presión combinada entre ambos, como sucediera, por ejemplo, con los atentados contra la Embajada de Israel y la sede de la AMIA, de cuyos procesos judiciales no resultó ninguna sanción penal. Esto implica un enorme riesgo institucional: así como un grupo de negocios estudia el entorno antes de invertir, un grupo terrorista también lo hace antes de atentar, y no

sería ilógico pensar como incentivo para un potencial nuevo atentado, que los anteriores no hayan acarreado sanción.

Si no fuera real la presión del poder, no precisamente del Ejecutivo, sobre algunos magistrados, ¿por qué el cura Grassi se encuentra libre tras dos condenas firmes a 15 años de reclusión, mientras el 82% de los detenidos en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires aún no tiene condena? Planteo que pone en evidencia la vasta corrupción de un régimen del cual hay nichos judiciales que no son ajenos. ¿Hay o no una “justicia” para los poderosos, y otra que mide con vara muy distinta para los ciudadanos de a pie? ¿Es tal esa “independencia” que esgrimen las élites más pulcras y tradicionales de estudios jurídicos y magistrados, poniendo el grito en el cielo cada vez que estas cuestiones ven la superficie?

¿Igualdad de acceso a la justicia? Volvamos a la esencia igualitarista de la democracia, entendida como el sistema por el cual cada persona vale por sí misma con prescindencia de cuál sea su ubicación en la pirámide económica. Si esto es así, ¿por qué el presidente de la Corte Suprema recibe a solas y de manera privada al jefe de una corporación empresaria o al gerente ejecutivo de una corporación mediática, y no hace lo mismo, una por una, con cada una de las miles de personas que concurrimos a las marchas multitudinarias hasta las puertas de la Corte, pero que no tenemos poder económico para atravesar sus estrados? ¿No refleja eso que el Poder Judicial no trata a cada uno de manera igualitaria con independencia de su ubicación en la escala económico-financiera?

Si no fuera porque existen presiones de los poderes económicos que tienen cómo demorar y condicionar las decisiones judiciales, ¿hay explicación razonable a que el accidente de LAPA no haya arrojado ningún sujeto penalmente responsable?

En definitiva, una cosa es que la condición contra-mayoritaria del Poder Judicial implique un freno o contrapeso a la “tiranía de las mayorías”, y otra es que un empresario y un juez se pongan de acuerdo para suspender los efectos de una ley democráticamente sancionada.

¿Existe la corporación judicial? Por último, y como abogado de la matrícula, me siento obligado a reconocer algunos vicios corporativos. ¿Cómo cuáles? Como que en la medida que los peritos no tengan sueldo fijo, pueden inflar su dictamen sobre una incapacidad laboral o la magnitud del daño en un siniestro, para cobrar una suma mayor. Como que desde la magistratura se convalidan honorarios demasiado elevados a los abogados de parte, porque anida la convicción de que los abogados de parte algún día serán jueces, y viceversa, y que una mano debe lavar la otra, para que las dos laven la cara.

Cuando ingresamos a la Facultad de Derecho, muchos lo hacemos pensando más en la justicia que en el Poder Judicial, bajo el dogma de que aquella tiene por fin desentrañar la verdad. En cambio, a medida que nos vamos acercando a Tribunales, nos vamos dando cuenta de que para que en un caso se determine que un automóvil iba a 40 km, una de las partes debe decir que iba a 80 km y la otra que estaba detenido, con lo que arribamos al absurdo de que para llegar a la verdad, muchas veces hay que promediar entre mentiras.

En síntesis: ¿Es bueno o no, para la sociedad argentina, que se discuta si existe o no una corporación judicial, y si el Poder Judicial es o no independiente?

DOS REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO INMEDIATO

(Diario Tiempo Argentino, 12.11.10)

Dado que no cuento con información preferencial, la única guía de estas expresiones es mi ya no corta experiencia como testigo, por momentos calificado, de la política argentina. Testigo que, paradójicamente, nunca compartió una conversación mano a mano con el ex presidente.

Por la prudencia que hay que tener en estas horas, me limitaré a hacer un par de reflexiones. La primera: el actual proceso se apoya en dos grandes soportes. Por un lado, la ejecución de las políticas públicas y el discurso organizador de las mismas en cabeza de la presidenta de la República. Por otro, el armado político-partidario y la contención a la ancestral arrogancia de los

poderes fácticos, que estaba en cabeza del ex presidente fallecido. Si convenimos en que esto es –en líneas generales– así, la carencia se ha producido en uno solo de esos pilares, el último de los mencionados. La acción de gobierno propiamente dicha está intacta, incluso fortalecida por el reconocimiento popular, y no hay motivos reales que justifiquen los grandes cambios de rumbo que ampulosamente anuncian los escribas del poder.

En consecuencia, la preocupación debería centrarse en el segundo de los aspectos. En este sentido, tanto la teoría social como la propia experiencia, indican que los liderazgos no se sustituyen por decreto, y menos aun por el voluntarismo de los posibles aspirantes. El liderazgo al que me estoy refiriendo, entendido como habilidad y autoridad para el disciplinamiento partidario, es fruto del reconocimiento público, y es muy probable que ese reconocimiento tarde mucho en centrarse en otra persona. ¿Cómo hacer, entonces, para “contener” a dirigentes con peso territorial y ascendiente sobre determinados núcleos militantes, de modo de alinearlos en una estrategia común y evitar así desbandes o actitudes narcisistas que debilitarían el proceso?

Profundizando las políticas concretas que tanto identificaron al pueblo que despidió a Néstor Kirchner, y gracias a las cuales su figura desató tantas, tan variadas y sinceras muestras de gratitud. Esto es, mientras tanto, o –más bien– en lugar de poner toda la energía en mantener el pegamento superestructural del “aparato”, plantearse la ampliación y consolidación de los logros en todos los niveles como una manera de sostener e incrementar la adhesión popular: blanqueando los empleos que persistan en negro, mejorando miles de jubilaciones mínimas, continuando con la escolarización de los más humildes. Y, por qué no, con políticas de desarrollo industrial de alto impacto, que afianzarían el amor de los propios y enamorarían a un grupo importante de los que no lo son, ensanchando la base social y política del modelo.

En definitiva, si falta el disciplinador político del peronismo, el desafío es redoblar el peronismo de contenido, para pasar definitivamente, irrevocablemente, de la práctica todavía corriente de los aparatos “donde hay una necesidad hay un puntero”, a la máxima de Evita “donde hay una necesidad hay un derecho”. Irreversible, inalienable.

La segunda reflexión es la siguiente. Después de muchas horas compartidas en la Plaza, en sus inmediaciones, en el interior de la Casa de Gobierno –vigilada hoy por semblantes como los de Tupaj Katari, Manuel Belgrano, San Martín, Simón Bolívar, José Martí, Eva Perón, el Che Guevara, Salvador Allende o el padre Romero– en distintos momentos del día y la noche, pude corroborar claramente la vigencia del país real, profundo, que era el que le trasmitía fuerzas a la presidenta, pero tal vez más aun le expresaba su agradecimiento al ex presidente.

Simultáneamente, los escribas del poder teorizan sobre el país virtual. Anticipan grandes cambios de rumbo, le forman a la presidenta el nuevo gabinete, le dicen con quienes le conviene juntarse y con quienes no, le aconsejan los próximos pasos que debe dar y las políticas a seguir. Es entendible. Están tan habituados, luego de décadas de buenos resultados, a que lo que ellos escriben es lo que acto seguido hace obedientemente la política, que creen, o simulan creer, que eso va a volver a ser así. Que con la muerte de Kirchner se ha caído el muro que contenía sus avances y prerrogativas históricas, y que a partir de ahora todo “volverá a la normalidad”.

Nada debe hacernos pensar eso ni por un instante. No hay tregua posible en la disputa de hegemonía entre la política y las corporaciones, y menos aun cuando la política está revalorizada y revitalizada con el testimonio, el compromiso, la militancia y la ocupación del espacio público por parte de tantos millones de argentinos.

El desafío político de esta hora es, pues, más que cómo remplazar a Kirchner, cómo honrar su legado. Y esto sólo pueden hacerlo millones de ciudadanos activa y pacíficamente defensores de lo que consideran haber conquistado.

Y por una conducción política ejercida desde la presidencia de la Nación, que tenga la sabiduría de plasmar esas voluntades y conquistar muchas más, en torno a un horizonte que nos mantenga enamorados de esta etapa tan importante de la Argentina, de la cual la muerte es también una de sus circunstancias.

POR QUÉ 2011 SERÁ UN AÑO CRUCIAL

(*Diario Tiempo Argentino*, 10.01.11)

El año 2011 puede ser, para la Argentina, el de la consolidación de un avance del campo nacional y popular, o de su retroceso. No es cuestión, como sucediera con otros gobiernos, de decir “yo o el caos”, entendido esto como una amenaza a la democracia procesal. Esta está consolidada en nuestro país. Baste ver cómo la crisis de 2001, que arrojó 39 muertos y una devaluación de un 400%, fue saldada, desde lo institucional, en el más estricto –aunque caótico e injusto– marco legal.

No se trata de eso. Sino de consolidar un proceso, en nuestro país y en la región, de conducción política de la economía, autonomía regional de las decisiones, inclusión de sujetos que hasta hace poco permanecían ignorados, disputa de sentido de tantas palabras y conceptos, fin de la hegemonía cultural de los medios monopólicos, compuertas abiertas a la verdad, la memoria y la justicia, y recuperación de una línea popular de interpretación de nuestra historia, como valores de época que marcan el lugar donde tenemos que estar.

Se trata, en definitiva, de afianzar otro sentido del concepto de democracia. De afianzar otro sentido de la idea de “calidad institucional”. De disputar el sentido de la palabra “orden” (no le temo a la palabra en sí: la desnutrición es desorden, la escolarización por la asignación universal es orden; el retiro voluntario de los '90 era desorden, la paritaria es orden. De no santificar la consigna del “consenso”, ni aferrarse linealmente a poner todo en conflicto, sino de poner en tensión los intereses que haya que poner, y discutir socialmente qué puntos de la agenda se deben poner en conflicto y en cuáles se debe construir consenso, una democracia enriquecida por la incorporación de nuevos protagonistas.

Esta disputa de sentido es lo que no toleran quienes han visto afectados sus intereses, aunque muchas veces de manera confusa e incompleta. En particular, uno de sus intereses: precisamente su capacidad casi exclusiva, ejercida

durante décadas, para formar el sentido, para moldear a su medida el promedio social de interpretación de la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a quienes hicieron posible que nuestra sociedad le prestara consenso a una aventura como la ocupación militar de Malvinas, a quienes hicieron posible que los despidos masivos de los '90 fueran tolerados como un mal necesario para la “modernización del Estado”, mientras compraban a los dirigentes políticos y sindicales para que legitimaran el ajuste; a quienes presentaron periódicamente la rebaja de salarios de la Alianza como un acto de coraje. Y, mientras tanto, concentraban medios y capitales, giraban utilidades al exterior y forzaban leyes que protegieran sus maniobras. Esto, hoy, no está resuelto, pero sí se está discutiendo en las calles, las aulas y los talleres. Estamos en una etapa compleja, pero rica y apasionante, y no ya diseñada con exclusividad por los habitués de la “city”.

Y, como es precisamente “eso” lo que no toleran, es que van a seguir recurriendo –como lo están haciendo– a todos los medios a su alcance para interrumpir el curso del proceso. Fracasado el “gobierno republicano paralelo” prometido desde una remozada mayoría parlamentaria vencedora en los comicios de 2009, y frustrados los golpes de mercado que intentaron desfinanciar una economía basada en algunos números contundentes, ellos decidieron intensificar la desestabilización por la vía de la agitación y el clima de enrarecimiento de la atmósfera social, no sin el costo de muertes irreparables. Así, un pequeño grupo pago que tira piedras en Constitución gana las pantallas de todo el país durante horas y horas. Así, el bloqueo extorsivo de camiones de caudales por parte del aparato de un dirigente bancario preso deja los cajeros sin efectivo en las fiestas para enojo de la gente. Así, la profecía autocumplida de la escasez de combustibles y las tomas de predios, tienen el objetivo de enturbiar un presente signado por el crecimiento económico, el turismo interno y el consumo popular.

Pero, aunque creo firmemente que esto es así, no quiere decir que la política oficial no deje flancos para que ocurra. Por eso, 2011 también debe ser el año en que se ponga fin a ciertos pragmatismos. No puede ser que para contar con los votos de San Juan haya que tolerar los estragos de la minería a cielo abierto,

o para contar con los votos de Formosa haya que ser indiferentes a la muerte de indígenas, o que para no molestar a ciertos sindicalistas haya que otorgarles espacios en la Secretaría de Ferrocarriles. Por cierto, la presidente ha tomado nota de alguna de estas demoras y ha puesto la política de seguridad en manos de una ministra ajena a todo pacto corporativo como Nilda Garré. Y así deberá tomar nota de la demora en una política de tierra y vivienda, y diseñar políticas de alto impacto en la generación de empleos industriales que intensifique el apoyo de sectores populares y la consideración de sectores medios, a la vez que solidifique la economía. La tan nombrada incorporación de jóvenes a la política, no sólo impedirá que se retroceda sobre lo logrado, sino que será vital para empujar por lo que falta.

El otro interrogante, igualmente estratégico, que presenta 2011 es si, en términos de sistema político, estamos con la administración Kirchner en presencia de un fenómeno coyuntural, o si se trata de una etapa fundadora de una nueva fuerza política.

En el primer caso, en el momento en que termine el ciclo Kirchner, quien obtenga la conducción del PJ será el encargado de dirigir al partido con más posibilidades de gobierno de la Argentina. Pero eso no garantiza por sí solo la profundización del rumbo descripto. Bien podría significar el regreso a una ortodoxia marcada por los caudillos territoriales de corte más tradicional. Si se tratara, en cambio, de un momento fundante, el campo popular expresado por la recuperación del Estado, la preponderancia del mercado interno, el sentido de inclusión, entre otros valores, será el encargado de erigirse en el sujeto político emergente, y consolidar ideológicamente la dimensión histórica del presente. Mucho tendrá que ver en este aspecto –aunque no sea determinante– la ingeniería electoral que se diseñe para las próximas elecciones. Esto es, la posibilidad de que el rumbo pueda ser apoyado desde una estructura mucho más amplia, que trascienda al aparato formal del PJ y la CGT.

En el final, una expresión casi visceral: qué pena para el país (y, cuando me pongo más estricto, siento, “qué pereza intelectual y qué torpeza política”) que aquellos dirigentes opositores que no están fuera del campo popular tengan una lectura tan lineal del gobierno y se opongan obstinadamente a todo, en lugar de respaldar lo bueno y discutir las grandes estrategias que necesita la Argentina. Y qué pena, qué pobreza de análisis y qué indignación me dan otros dirigentes, autotitulados de izquierda, que siguen diciendo que nuestro presente político es una continuidad del Menemato.

LA BATALLA ES CONTRA LOS JEFES

(Diario Tiempo Argentino, 10.02.11)

Hace poco, una niña de 13 años, bastante prevenida –para su edad- sobre cómo formarse un criterio propio de interpretación de la información, me relató un listado de titulares negativos de los canales de noticias. Asaltos, asesinatos, episodios de violencia callejera, agresiones, corrupción, en fin, un catálogo de figuras cuasi-delictivas en algunos casos, y lisa y llanamente criminales en el resto. Estaban, eso sí, tímidamente matizados con alguna imagen deportiva o con escenas de playa.

Mi respuesta fue: no son “varios” títulos, sino uno solo, que podría sintetizarse: “en la Argentina reina un clima insostenible, es prácticamente imposible vivir en este país”. Sin embargo,

Cuando uno coteja lo que se pretende instalar desde los zócalos silenciosos de las pantallas de los bares, salas de espera, estaciones de servicio y hasta oficinas públicas, con la vida cotidiana de miles de personas, no encuentra correlato.

La mujer y el hombre común, cualquiera de nosotros, tenemos problemas, como es lógico, pero no un desasociado tal, como el que pretenden instalar aque-

llos mensajes, políticamente interesados. No quiero decir que lo narrado y mostrado no exista, sino que no es lo que imprime el clima general del país. Un país que consume, se moviliza, discute, veranea, encuentra trabajo con menos dificultad que hace unos años, tiene ofertas variadas de cine y teatro, cambia el auto...

Cuando un puñado de personas quema una cubierta o apedrea una estación, constituye un foco, que por cierto no procuramos como modelo de vida. Pero si ese hecho es reiterado decenas de veces durante horas y horas en numerosas pantallas “informativas” de todo el país, exagera un estado anímico de zozobra que no se compadece con las condiciones reales en que se desenvuelve nuestra vida, problemática por cierto, pero no al borde del abismo como se pretende mostrar.

¿Es desinteresado dicho manejo de la información? ¿O responde a un interés político que favorece determinado discurso, generando una sensación de “desorden” para beneficiar a aquel candidato que propone el “orden” como valor supremo? ¿Es ingenua la formación de ese clima, o está planificada? ¿Se puede llamar a eso, prensa independiente? ¿Ayuda esto a construir un país mejor?

¿Cuánta responsabilidad le cabe a los medios que reproducen hasta el infinito los hechos de inseguridad y como si fuera lo único que sucede, en la reproducción del clima de inseguridad que ellos mismos denuncian? La mera repetición hasta el infinito exime de analizar con profundidad. Despoja a algo tan importante como la inseguridad, de la integralidad desde la cual debe abordarse. Al no haber análisis multidimensional, la superficializa y reduce exclusivamente a la dimensión pánico. Desde el pánico, ninguna persona o sociedad reacciona como debería.

Qué distinta sería la predisposición social a abordar la inseguridad, si desde los medios de mayor llegada se procurara un análisis más completo, abarcativo de los déficit que todavía arrastra la justicia, de la falta de equipamiento, capacitación profesional y dejerarquización salarial de la policía, de la corrupción del sistema penitenciario, de la complicidad de ciertas instituciones.

Abarcativo, además, de todo lo que implicó, durante el neoliberalismo, la pérdida de cultura del esfuerzo en los jóvenes de entre 15 y 25 años que no sólo no trabajan ni estudian, sino que no registran en su universo simbólico el mérito que representaría trabajar y estudiar. Abarcativo de lo imposible que es construir seguridad ciudadana en cuanto a la libertad de circulación y la defensa de la propiedad privada (sea de un bolso de mano o de una 4x4), cuando todavía está en proceso la trabajosa reconstrucción de una cultura de la seguridad ciudadana en materia educativa, nutricional, ambiental, laboral, económica o vial. Qué distinta sería la predisposición social a abordar este tema con mayor responsabilidad e involucramiento, si los medios hegemónicos lo enfocaran desde esta complejidad, y no desde el mero reportaje a un familiar directo de la víctima cinco minutos después de producido el hecho. Y cuando digo involucramiento no me refiero a que la gente deba resolverlo en remplazo de la indelegable responsabilidad estatal. Me refiero a cómo situarnos frente al reclamo de derechos esenciales como el agua potable, el plato de comida, el mantel, el guardapolvo, el foco de luz, la calle asfaltada y desmalezada, el trabajo digno, como las primordiales políticas de seguridad. Probablemente, saldríamos del facilismo de sólo acusar al victimario, pedir mano dura para él y bajarle la edad de imputabilidad, sin preguntarnos qué hicimos como sociedad en las últimas décadas, para que jóvenes con todo el potencial al alcance de su mano, no elijan un camino mejor...

Algo similar ocurre con los aumentos de precios. Si el medio sólo enuncia el aumento, sin ir más allá en cuanto al análisis de la cadena de formación de ese precio, de la ganancia de cada uno de sus eslabones, de la condición monopólica de sus formadores, ese medio termina, intencionalmente o no (yo creo que intencionalmente), convirtiéndose en un agente inflacionario. Un actor cualquiera de la economía real, sea comerciante, profesional, administrador de cualquier servicio, al no ver reflejada ninguna noticia positiva referida al crecimiento de la actividad, a la mayor independencia respecto de los organismos internacionales que históricamente nos extorsionaron, a que la deuda del país ya no tiene el alcance paralizador que supo tener, y lo único

que ve ese actor común de la economía cotidiana en un minuto de titulares es que todo aumenta, lo primero que hace es aumentar él también, porque de lo contrario siente en sí mismo la zonzera de quedarse solitariamente rezagado con sus propios precios.

En una economía sólida en sus grandes números, con menor incidencia del endeudamiento, crecimiento, tipo de cambio competitivo, superávit fiscal y comercial, y acumulación de reservas, aparece como flanco débil el aumento de precios. Los medios hegemónicos, jefes de la oposición por default de los dirigentes partidarios, en lugar de tratarlo constructivamente, lo hacen para desgastar al gobierno que condujo la economía hacia esos logros. Todo por el sólo hecho de que es el primer gobierno en décadas que se propone cierta desobediencia respecto del disciplinamiento social histórico que aquellos ejercieron, y merced al cual -entre otras causas- nos sometimos, como sociedad, a todo lo que nos sometimos.

Es a esta altura que planteo utilizar en toda su plenitud la dimensión pedagógica de la política, porque la batalla electoral de 2011 es contra los jefes, contra los autores intelectuales, contra los que construyeron el “sentido” de la Argentina de las últimas décadas, y recién después contra sus mediocres intérpretes, aunque sean éstos los que figuren en las boletas opositoras.

Y en este sentido, ¿no le pasa a Ud., que está leyendo, tener personas muy cercanas, con quienes nos identifica una manera de mirar aspectos centrales de la vida, como la educación de nuestros hijos, personas que actúan o reaccionan como “nosotros” en la calle, en cuestiones laborales, etc., y, sin embargo, al momento de analizar la coyuntura política, piensan como “ellos”. Indagar sobre las causas y darse una política ante esto, es un desafío importante en los tiempos que corren.

PROFUNDIZAR PARA CONSOLIDAR

(*Diario Tiempo Argentino*, 19.05.11)

Imbuidos de un intenso entusiasmo por el futuro, algunos dirigentes políticos acreditamos ya alguna historia –en la que están presentes aciertos y errores– en el intento de construir y consolidar un espacio político que conecte las ideas de izquierda democrática (no demoliberal, sino cabal, sustancialmente democrática) con el sujeto histórico que le dé vida, anclaje y protagonismo político. Un sujeto en cuyo núcleo está el hombre y la mujer, las y los jóvenes que forman, aun sin saberlo, los grandes movimientos populares, de los cuales el peronismo ha sido históricamente central.

El entusiasmo por la intensidad de esta etapa está dado por la centralidad de temas en debate, por la disputa del sentido y la hegemonía sobre los conceptos, por el desenmascaramiento de los jefes de las corporaciones que decidieron históricamente por nosotros, haciéndonos creer que quienes nos gobernaban eran los políticos.

Está dado por esa necesidad vital de nuestra sociedad de hacer que el ‘discurso del amo’ –en términos de Hegel– lo siga haciendo el amo, pero que el esclavo tome conciencia de que no puede ser el suyo.

Está dado, además, porque en esta etapa se están abriendo los caminos de lo que históricamente creímos que debía hacerse, como, por ejemplo, recuperar la dimensión latinoamericana de nuestro país. El valor histórico del bicentenario no fue solamente su masividad –de por sí valiosa– y el mentís a los agoreros que instaban a no ir al centro porteño, sino la conexión de esas multitudes con una línea nacional y popular de interpretación de nuestra historia, encarnada en Tupac Amaru, Moreno, San Martín, Bolívar, José Martí, Evita, el Che, Salvador Allende, Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche...

Está dado por haberse retomado el control político de la economía (lo que no quiere decir que la economía no tenga problemas), independizarnos de

la extorsión de los organismos financieros, resituar la centralidad de valores como el Estado y el mercado interno.

Está dado por la incorporación de sujetos –históricamente invisibilizados– a una masa crítica democrática creciente, como es el caso de las personas que ayudan en las casas de familia, las amas de casa, los pueblos originarios, los hermanos de países limítrofes hasta hace poco indocumentados, las adolescentes que ahora tienen obligación de hacerse los controles de embarazo, las y los que tienen diferentes orientaciones sexuales...

Está dado por la posibilidad de los genocidas y apropiadores de hacer sus alegatos en juicios públicos rodeados de las más absolutas garantías procesales y sin que haya corrido en el país una gota de venganza de parte de sus víctimas. ¿Qué mayor calidad institucional podría pedirse a un país que regresa del infierno como el nuestro?

Para aquellos que dicen ser los candidatos de la ‘socialdemocracia’, ¿qué otra cosa dice la doctrina socialdemócrata si no es más Estado, más unidad latinoamericana, más independencia financiera, más mercado interno? Me dirán: ‘es eso, pero con más calidad institucional’. ¿Es que no son instituciones las paritarias, la Asignación Universal o la desmonopolización de los medios? Salvo que sigamos reduciendo –sin aprender la lección– el concepto de instituciones, a lo que –por ejemplo– lleva adelante el gobierno socialista español, baluarte universal de la socialdemocracia, cuyo “envidiable” parlamento acaba de aprobar los más feroces –y ya conocidos por nosotros– ajustes sociales.

¿Qué confiabilidad nos podría dar para gobernar el futuro próximo del país –no ya en términos de probidad de un dirigente, sino de consistencia en la intensidad y solidez del movimiento político que lo acompañe– un candidato que ‘se toma unos días para pensar’ si va a gobernar un país o una ciudad. O un partido que cavila entre aliarse con Pino Solanas o con De Narváez.

¿Cómo pueden tildar algunos ex compañeros de lucha, de ‘continuidad del menemato’ a una gestión que pasó de las relaciones carnales

a la Unasur, de la privatización de los aportes jubilatorios a su reestatización, del indulto a los genocidas a su juicio y condena, de la reforma educativa de los '90 al regreso de la primaria y secundaria?

No obstante esta debilidad de la oposición, el proceso no está consolidado. Uno de los desafíos de quienes estamos convencidos de acompañarlo es prevenir que los grupos afectados apelarán a todos los recursos arteros a su alcance, para sembrar un clima de desorden y asfixia en la población. El otro desafío es plantear ejes de profundización del modelo.

Jamás se hubieran logrado los incentivos fiscales que mantuvieron vivo el mercado interno en plena crisis internacional, sin la apropiación estatal de una parte importante de la renta sojera. Pero quienes apostamos a la llamada 'profundización' del modelo, no podemos renunciar a la construcción de una interface hacia la diversificación del modelo productivo.

No le regalaría a otros dirigentes la bandera del rediseño ferroviario...

... no su mera recuperación, porque eso supondría volver a una estructura pensada para un modelo depredador de recursos naturales propio de una economía extractiva y concentrada en el puerto. Me refiero a su reingeniería,

... para la integración territorial, la optimización de nuestra condición bioceánica, el empleo estable de cientos de miles de argentinos y la recuperación de la mística productiva en jóvenes trabajadores y profesionales.

Y no se me escapa que un proyecto así puede chocar con los intereses de un aliado poderoso. En tal caso, hay que buscar el camino de compatibilizar intereses, pero no renunciar al proyecto.

Otros puntos de la agenda de futuro deben ser la ley de viviendas, la reforma a la carta orgánica del Banco Central, la distribución de utilidades entre los trabajadores y la ley de servicios financieros (una reforma de la presente ley de 'entidades' financieras, seguiría poniendo como sujeto a los bancos; una ley de 'servicios' financieros, pone como sujeto al ciudadano).

En definitiva, es muy grande el desafío del futuro. Pero jamás hubiéramos podido llegar al punto de plantearnos un desafío tan intenso, si la gestión de gobierno del ex presidente y de la actual presidenta no hubieran encaminado al país bajo los lineamientos citados.

Para otra discusión, en la que estaremos muy presentes en la campaña electoral, queda pendiente el debate sobre los límites de las estructuras tradicionales –tanto políticas como sindicales– para sostener y profundizar este proceso. Y la necesidad de construir esa fuerza política protagonista, no testimonial, mayoritaria, capaz de trasponer esos límites, renovar las prácticas y consolidar a nivel masivo el universo de ideas e ideales que sostenemos y sostuvimos siempre.

MIGUEL DEL SEL Y EL VACIAMIENTO DE LA POLÍTICA

(Diario Tiempo Argentino, 03.08.11)

Yo creo en los procesos sociales, procesos de maduración de la conciencia colectiva. Largo proceso de colonización, por un lado. Y un proceso más reciente, el que atravesamos a partir de la administración Kirchner, de salida, de superación, de disputa de hegemonía, de disputa de sentido.

¿Qué quiere decir esto? Que durante décadas, la derecha construyó hegemonía de sentido. Modeló astutamente el promedio del pensamiento social a su medida, de modo de justificar los sucesivos ajustes sociales que la consolidaron en su posición dominante. Por eso creció tanto la brecha distributiva, primero al precio del terrorismo de Estado, pero luego por el voto.

Kirchner viene a hacer un corte a eso, y recupera autoridad para la política, capacidad de la política para interpelar al Poder. Pero el otro proceso sigue latente.

Me refiero a que la derecha no construye sentido a través de la política, porque cuenta con otros medios. Menos visibles, más sutiles, pero extremadamente eficaces. El poder económico y su capacidad de cooptación, los medios masivos, los aparatos ideológicos, la educación. Entonces, cuando la política recomienza a construir poder autónomo, se comienza a independizar de esos aparatos de los poderes permanentes, la derecha reinicia el juego de degradarla. De inventar o propagar hasta el hartazgo hechos de corrupción o de inseguridad para mostrar la debilidad de la política. Y entronizar a personajes que vienen de fuera de la política, denunciando aquella debilidad, denunciando que “la política” ha fracasado.

Por eso Macri, aspirante a gobernar, es decir, a un cargo de absoluta centralidad política, le pide a Susana Giménez que es mejor que no hablen de política.

Porque la derecha cabalga sobre la degradación y el vaciamiento de la política. Sólo así puede entenderse que personajes como Blumberg, De Angeli, Cobos, Reutemann o De Narváez puedan haberse convertido en ‘dirigentes políticos’.

Y, claro está, algunos otros políticos, arropados con la vestimenta del campo popular, con su corrupción, su cinismo, su inutilidad, sus contradicciones o su hipocresía, han contribuido bastante a que eso penetrara en sectores importantes de la sociedad.

Esta disputa de sentido es el motivo central por el que adhiero al proceso político que está viviendo la Argentina y aspiro a su continuidad. Porque, más allá del listado de logros que seguramente compartiremos, ha planteado la batalla central por la distinción entre gobierno y poder. Y ha desnudado que el Poder no ha estado en los gobiernos, que nos han gobernado desde esos poderes “invisibles”, y la actual administración les ha dado visibilidad, e intenta construir ese poder ausente, “desde” el gobierno. Y eso implica conflictuar. Una batalla cultural como esta, una construcción de contracultura como esta, inexorablemente implicará conflicto y “crispación”, que bienvenida sea. Lo que

enerva a los pacatos conservadores es precisamente lo que a mí me da adrenalina para seguir y triunfar.

Desde el campo de lo estrictamente político, hay un solo polo de irradiación de iniciativas, y está en el gobierno nacional. Los apellidos de los opositores figurarán en las boletas impresas, pero no son los generadores de oposición, en término de cotejo de proyectos. Sólo obedecen órdenes. La jefatura de la oposición se ejerce desde las corporaciones que están perdiendo mucho más poder hegemónico y capital simbólico que dinero.

De allí que debemos esperar sólo campaña negativa: falta de nafta, de dinero en los cajeros, vagones quemados, malestar en aeropuertos, precios que disparan, noticias incesantes sobre inseguridad, etcétera. La estrategia consiste en crear sensación de “todo mal”, de desorden absoluto, que sólo podría ser controlado por un gobierno de coalición entre las diferentes variantes de la derecha, política y económica. Eso aspiran a instalar para una eventual segunda vuelta.

Hay que anticiparse a ello, decir hasta el cansancio que no será casual. Que está armado. Pero decirlo antes. Desplegar todo el instrumental de que dispone un gobierno, toda la dimensión pedagógica de la política y toda la capacidad de anticipación, para denunciarlo, y cotejarlo con la realidad de palpable mejoría que viven millones de argentinos. Y contrarrestarlo con medidas y acciones políticas y sociales concretísimas, “*pellizcables*”, que mejoren de verdad la calidad y el horizonte de vida. Y no dejar flancos débiles. Y construir un mensaje para ampliar el bloque social con potenciales aliados que hoy están en los bordes, y no solamente reafirmar lo propio.

La necesidad de construir anclaje territorial y fuerza política en distritos clave, como Capital, Córdoba y Santa Fe, es claramente un desafío para cubrir ese déficit del oficialismo, pero está en un plano más concreto, más táctico. El otro me parece el plano estratégico. Ninguna táctica funciona si no es en función de un objetivo estratégico prefijado. Y el que estamos comentando –la disputa de sentido, la reconstrucción de la política– me parece más que valioso. Desde allí hay que enfrentar a Del Sel. Con una

salvedad: reconocer que la derecha nos lleva ventaja en un discurso que interpele el sentido común desde un lenguaje no militante. Tenemos que conectar el gran proyecto de liberación, en cuyo plano todos los militantes populares, de izquierda o progresistas nos sentimos más cómodos, con la cotidianeidad de aquellas personas, conciudadanos nuestros, que no tienen tan afinada la ideología.

PARA EL NUEVO MANUAL DE ZONCERAS

(Diario Tiempo Argentino, 14.08.11)

Es increíble el nivel de endeblez de quienes dicen ejercer la oposición en la Argentina. Calificar a determinados dirigentes de verdadera oposición política sería darles una jerarquía que no tienen. Ante la carencia absoluta de ideas alternativas, apuestan todo a la crítica destructiva, aprovechando cualquier atajo -que siempre los hay- para descalificar aspectos centrales del modelo vigente, como los derechos humanos y la independencia de la Corte Suprema de Justicia, manchando a sus personalidades más emblemáticas. Descalificar sin proponer, de cotejar ideas ni hablemos.

La primera zoncera: una vez que Europa y Estados Unidos ya no sirven como ejemplos donde reflejarnos, se enarbolan los procesos de Chile, Brasil y Uruguay. En Chile ha disminuido la pobreza, pero no la brecha de desigualdad, se mantienen las bases de una economía primarizada y ostenta las relaciones laborales más precarias de la región con bajísima fuerza sindical. El gobierno chileno acaba de reprimir ferozmente una manifestación pacífica de estudiantes en pos de la educación pública. En Brasil, Lula da Silva, nada menos que el artífice del proceso que se pone como ejemplo, declara públicamente que vendría a la Argentina a votar por la actual presidenta. Y el presidente de Uruguay, José Mujica, venerado por algunos opositores argentinos como Duhalde y Alfonsín, no sólo ya no lamenta el corte del paso fronterizo, sino que celebra que a partir del próximo 29 de agosto el ferrocarril volverá a unir nuestros países.

La segunda zoncera: chillar porque la presidenta anuncia el segundo aumento del año a jubilados, a pesar de que es la propia ley de movilidad jubilatoria la que le exige señalar en agosto cuál será el coeficiente de aumento a aplicar (reitero, lo manda la ley) a partir de septiembre. El trasfondo de la protesta “opositora” no es en verdad la violación a la veda electoral, porque todos ellos hacen propaganda, sino que no pueden soportar un anuncio socialmente beneficioso. Si el anuncio presidencial hubiese consistido, como en algunas presidencias anteriores, en bajar la jubilación en lugar de subirla, la habrían criticado como una mala medida política, pero ni se habrían acordado de la veda electoral.

La tercera zoncera: propaganda del hijo del Dr. Alfonsín en la que un joven vestido de determinada manera le roba la cartera a una señora de clase media, caracterizándolo como delincuente y estigmatizándolo. Soy docente de muchos jóvenes que visten con el mismo estilo en más de una facultad. A diario soy testigo de que miles de jóvenes del conurbano portadores de un “look” semejante, son trabajadores honestos.

Si tuviera que responder con otra propaganda igual de sucia pero más verídica, pondría el semblante de más de un ministro de economía de una Argentina no tan lejana, robando de la cartera de millones de compatriotas.

La cuarta zoncera: esta ya no es de los opositores serviles al poder, sino que está inmersa en muchos de los integrantes de clase media a quienes les ha ido muy bien en los últimos años.

Por momentos me da la sensación de que forma parte del ADN de la clase media argentina atribuirle a los malos gobiernos sus magros desempeños económicos. Eso sí, cuando a ciertos sectores medios y medios altos les va bien, eso no tiene nada que ver con buenas políticas, ni con un tipo de cambio controlado, ni con un mercado interno que funciona, etc., sino que está directamente ligado al propio talento.

Pero no es genético. No está en el ADN. Es un síntoma cultural y, por lo tanto, tenemos que bregar para derrotarlo.

A la última zoncera ni siquiera la califico como tal porque es demasiado zonza. Es la del presunto líder de un proyecto que tiene como norte pelear contra las grandes mineras del mundo y volver a fabricar aviones, vagones y locomotoras (cosa que ya estamos haciendo), es decir, volver a la Argentina de la industria pesada, y ni siquiera se asume como candidato. Mis disculpas al ilustre Arturo Jauretche. No pude resistir la tentación.

TOMAR MEDIDAS POPULARES ES LO MÁS RESPONSABLE

(Revista Debate, 29.12.11)

Los datos del tercer trimestre de 2011 resultan decepcionantes para las economías desarrolladas. Todas proyectan, en el mejor de los casos, un crecimiento muy bajo, cuando no retracción, señala un informe realizado por la CEPAL en noviembre último. Y, como es obvio, esto repercute negativamente en la tasa de ocupación de los países centrales.

Con relación a la dinámica de nuestros socios comerciales, se nota un leve descenso en el crecimiento de la economía china, así como la desaceleración de Brasil, no obstante lo cual, la política comercial brasileña continúa siendo muy agresiva. Por su parte, las medidas implementadas por los EE.UU. no han tenido los resultados esperados.

Según el mismo informe, el precio de las materias primas, alimentos y demás comodities, comienza a sufrir cierta disminución, como una de las maneras en que la crisis internacional impactará sobre nuestros países.

En este contexto, adquieren dimensión histórica tres medidas estructurales tomadas por la Argentina durante los últimos años, en el marco de una situación regional política y económicamente favorable. La primera, el proceso de desendeudamiento respecto de los organismos financieros internacionales y de los acreedores privados, lo que implica menor dependencia del sector externo, mayor autonomía respecto de la presión extorsiva que éstos ejercieron históricamente por vía de sus condicionalidades, y reversión del proceso de transferencia de recursos de la periferia al centro.

La segunda, la negativa a conformar el ALCA, que era nada menos que la mayor estrategia de poder de la era Bush sobre nuestra región, con todas sus lógicas consecuencias de profundización de nuestra dependencia. La tercera, la reapropiación de los recursos previsionales, de modo de apartarlos de la volatilidad de los mercados financieros internacionales por donde deambulaban, y convertirlos en principal impulsor de nuestro mercado interno. Está al alcance de cualquier observador, analizar lo que hubiera ocurrido con nuestras economías, en caso de no haberse tomado estas medidas en el actual marco de crisis internacional.

Gracias a estas decisiones políticas, y a haber privilegiado un modelo con base en el mercado interno, hoy podemos decir que la Argentina –y América Latina en general- han podido sustraerse al desplome de las economías centrales. Pero, aun así, nadie podría considerarse completamente inmune a las consecuencias de la crisis.

Buena parte del incremento de nuestra actividad fabril, del empleo formal y las paritarias a la alza, lo explica el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes. Pero no es aventurado pensar que la exportación de unidades terminadas en el país podría verse parcialmente afectada, debido a la desaceleración económica de algunos de los países compradores: nadie los imagina renovando su parque automotor con la misma intensidad que si se tratara de un período expansivo. Algo parecido cabe para las divisas que ingresan por el turismo internacional.

Otro factor de desaceleración podría constituirlo el descenso del componente financiero del precio de nuestros cereales y oleaginosas, particularmente la soja. Si bien su precio se mantendrá elevado en la medida que se incrementa el acceso al mercado de alimentos de China y la India, es posible que la porción del precio que sostiene los mercados a futuro –la soja como derivado financiero y no como proteína- se desvíe hacia la compra especulativa de títulos

de las economías más deterioradas. Hoy, esa inversión está por el suelo, pero se valorizará al compás de la recuperación de esas economías, y les permitirá ganar fortunas a sus tenedores.

Por su parte, las casas matrices de aquellas empresas extranjeras con asiento en nuestro país, les exigirán el giro de utilidades en auxilio de las situaciones más críticas, en lugar de reinvertirlas en el país en la misma proporción en que lo harían en etapas de normalidad.

Con seguridad, estos y otros factores están siendo tenidos en cuenta por los gobiernos de América Latina, y del nuestro en particular, a la hora de la toma de decisiones. La reorientación del gasto en materia de subsidios, el mayor control de cambios, la obligación de liquidar divisas en el país para las grandes empresas, el llamado a los industriales a invertir en el país, forman parte de ese conjunto de medidas al mismo tiempo progresivas y responsables.

A diferencia de Brasil, nuestro país no ha reprimarizado sus exportaciones durante el último quinquenio. Las metas del plan agroindustrial, la agenda de industrialización para el año 2020, los Créditos del Bicentenario bajo la condición de sustituir importaciones y otorgar empleo decente y registrado, transitan en esa misma dirección. El propio BID, en su documento “El salto exportador del MERCOSUR”, reconoce que “los productos de contenido tecnológico medio” y “los nuevos destinos”, son los que explican, especialmente en la Argentina, dicho salto exportador.

En definitiva, una vez más, será el nivel de actividad económica que pueda imprimirse al mercado interno, así como la potencia y capacidad de integración física y en infraestructura con la región, y los acuerdos de complementación económica con Brasil, los pilares para que nuestros desempeños económicos y sociales se mantengan lo más al margen posible de la crisis que ataca a las economías centrales.

Elevar nuestros aportes a los fondos de financiamiento de la inversión en la región –donde la Corporación Andina de Fomento y el Banco del Sur tienen un rol preminente– y los acuerdos de cooperación macroeconómica manteni-

dos por las frecuentes reuniones de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales de UNASUR (administración responsable de las reservas, incremento de las operaciones en moneda regional), y los avances de la CELAC, representan un marco de integración política y económica sin precedente histórico. Los anteriores intentos no pasaron de eso, para volver luego al campo de los sueños, las utopías y la resistencia. Hoy, en cambio, la encarnan gobiernos populares muy legitimados por sus pueblos.

Con indicadores de crecimiento que difieren de la retracción de las economías desarrolladas, con niveles de legitimidad muy elevados de sus Presidentes, y con la clara decisión de éstos, América Latina, y básicamente la Argentina, estamos ante una etapa inmejorable para achicar la brecha social y tecnológica que nos separa de aquellas, y plantear nuevos ejes de la agenda internacional, tendientes a reforzar instituciones de la Economía Social, frente a un capitalismo despiadado, que prosigue mostrando nítidas señales de agotamiento.

DISTRIBUCIÓN Y RE-DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, Y DEL INGRESO

(Diario Tiempo Argentino, 29.12.11)

La ampliación de derechos, la construcción de ciudadanía y el concepto de distribución, son inherentes a la idea del Estado que se está reconstruyendo en la Argentina, y en América Latina.

Sin embargo, a veces se utilizan indistintamente los términos 'distribución del ingreso' y 'distribución de la riqueza', o 'distribución' y 'redistribución', cuando, en rigor, son diferentes.

En la naturaleza misma del Estado popular, las necesidades y derechos básicos no dependen de la ubicación del ciudadano/a en la escala socioeconómica, sino de la propia naturaleza universal de la condición de ciudadanía. Por su parte, el ingreso tiene que ver con salarios y otras formas remunerativas y no

remunerativas, directas e indirectas, mientras que la riqueza tiene que ver con la conformación del producto nacional.

Y la re-distribución es un proceso ulterior a la distribución inicial. A mejor distribución inicial estructural (relación entre salarios y capital), menor necesidad de aplicar políticas redistributivas. Los países con mejor desempeño en materia de distribución, tienen menor cantidad de políticas re-distributivas.

En nuestro país, los impuestos internos sobre los bienes y servicios duplican prácticamente a los impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital, dentro de la distribución de la carga impositiva. Y triplican, aproximadamente, a los derechos sobre el comercio internacional. Todo lo cual ha venido configurando, con el correr de las décadas, una estructura tributaria de carácter regresivo.

Al mismo tiempo, la participación del salario en el PBI fue descendiendo progresivamente desde los años 60 hasta los primeros años de la presente década. Como reafirmación de esta injusticia, podemos tomar como ejemplo la comercialización de productos agropecuarios como la leche, los aceites y las harinas, donde las cuatro primeras empresas acaparan más del 50 % del mercado. Entre otros estragos, la hegemonía neoliberal de los noventa nos dejó como herencia la concentración y extranjerización empresaria. El peso de las ventas de la cúpula empresaria marca un notable incremento, así como la participación de empresas extranjeras en las ventas totales. Otros indicadores, como la distribución del conocimiento por ingreso, o, en menor medida, el acceso a la salud por nivel socioeconómico, fueron mejorando su desempeño en los últimos años, pero parten de niveles francamente bajos.

Es, pues, en este marco, que se imponía la profundización de políticas redistributivas estructurales: cambios en la estructura tributaria, la distribución de recursos a las provincias y la diversificación de la matriz de inversiones y desmonopolización de la cadena de formación de precios. Aunque parcialmente, se aplicaron retenciones a la exportación de las industrias extractivas, con el fin de alterar la rentabilidad altamente concentrada del sector vigente en los noventa, desalentar las ventas al exterior de una parte de dichos recursos, y asegurar con

ello la provisión del mercado interno. Se modificaron, además, algunos marcos regulatorios, ya sea por vía de la renegociación con las concesionarias, como, asimismo, con la recuperación de la empresa de correos, fábrica de aviones de Córdoba, Astillero Tandonor, y la creación de la empresa estatal de petróleo off-shore y de aguas y servicios cloacales. La reorientación de los subsidios y beneficios fiscales constituye otro andarivel en el camino de las medidas redistributivas.

En definitiva, las medidas redistributivas pueden ser de tipo personal, es decir, dirigidas de manera individual –aunque el universo sea extenso– a aquellas personas con algún tipo de necesidades básicas insatisfechas. O, por ejemplo, a una rama de investigadores científicos. Pueden estar orientadas a grupos sociales, como la provisión de determinados servicios hospitalarios, escolares, o de obras públicas en zonas que las necesitan, como el tendido de redes cloacales, de agua potable, etc. La creación de un Banco de Medicamentos, o de un Programa Nacional de Producción Estatal de Vacunas, podrían contarse entre este tipo de medidas.

Pueden, también, establecerse medidas de redistribución funcional, como aquellas que estimulan actividades menos favorecidas, o los regímenes de promoción de determinada industria o actividad. Los programas de modernización de determinadas áreas del Estado, e incluso una ley de contrato agrario o un régimen de concertación y seguimiento de precios, son políticas que pueden incluirse en este rubro. Y, además, medidas de redistribución geográfica, a municipios, provincias y/o regiones, mediante diversos sistemas de coparticipación, como bien podría ser un fondo federal para el desarrollo local.

En el entendimiento de que es el Estado el agente redistribuidor por excelencia, la historia de corrupción sistémica, la cooptación de la política por parte del poder económico, y su descrédito frente a la sociedad, han operado como factores deslegitimadores de ese papel del Estado.

Y su recuperación, aun cuando hemos experimentado indudables avances, sigue siendo un objetivo estratégico.

La crisis de 2001 implicó, entre otras cosas, el colapso de tres pactos fundantes de toda sociedad: el pacto previsional, el pacto tributario y el pacto financiero. A partir de ello, reconstruir la credibilidad en el Estado y la política, se convirtieron en tareas colosales, que demandaron, y siguen demandando, un esfuerzo extraordinario, por un lado –y fundamentalmente- del pueblo, y también de las autoridades constituidas en 2003, bajo la conducción del Presidente Kirchner.

A partir de la crisis, y con la no deseada consecuencia del aumento de la pobreza, tres situaciones objetivas ayudaron al efecto rebote de nuestra economía: el default, el incremento del precio internacional de nuestras exportaciones y la macro-devaluación. Los salarios que hasta ese momento se pagaban con un dólar, pasaron a pagarse con un cuarto de dólar. Las exportaciones por las cuales se recibía el equivalente a un peso, pasaron a valer cuatro pesos. Todo ello provocó el aumento de la tasa de ganancia empresaria, y llevó a la recuperación económica. En este marco, la pobreza (en este caso entendida como pérdida de salario en dólares) operó como consecuencia no deseada, pero, a su vez, como aliciente de tal recuperación a partir del estallido de la convertibilidad.

El modelo comenzó a basarse en la exportación de bienes transables, lo cual arrojó como resultado ganancias extraordinarias para los grupos exportadores, y derivó en la conformación de sus respectivas cadenas de valor, e inició la recuperación de puestos de trabajo y una tímida y paulatina apreciación del salario.

En definitiva, la base de un sistema justo está en la forma en que está repartida la propiedad de la riqueza. La distribución de los ingresos es un camino apropiado para encaminarse en esa dirección, pero no el único, ni el más profundo.

Ante una distribución injusta de la riqueza que data de los orígenes de nuestro sistema social y económico, los distintos tipos de políticas redistributivas constituyen el sendero adecuado hacia objetivos de mayor igualdad.

EL MONOPOLIO OPRIME, EL ESTADO LIBERA

(*Revista Debate*, 20.01.12)

Defendí la desmonopolización y el nuevo marco regulatorio para la propiedad y comercialización del papel para diarios y revistas, sintetizado en la empresa Papel Prensa, en nombre de la libertad. No voy a explayarme sobre la mancha de origen que pesa sobre la empresa monopólica en cuestión. Sólo diré que surge de un pacto que canjea un negocio por silencio, y el silencio, especialmente cuando se refiere a atrocidades éticas, económicas y sociales como las de la última dictadura, muy poco tiene que ver con la libertad, valor que esgrimieron quienes se opusieron al proyecto.

El concepto de monopolio es antagónico a la libertad. Y además, es falso que se sale de un monopolio privado para entrar a uno estatal. Es un error muy importante poner en un mismo plano dos niveles de legitimidad, dos categorías económicas, completamente distintas.

Cabe que me refiera a la relación entre una libertad -la libertad de ejercer la industria de la comunicación- y un derecho -el derecho a ser informados. Aquí hay otra diferencia fundamental: el sujeto que se arroga la propiedad de aquella libertad es una empresa, mientras que el sujeto del derecho a la información es el Pueblo. Cuando la libertad de empresa es ejercida por uno solo, el derecho a la información se restringe. Pero en la medida en que el ejercicio de esta libertad se distribuye, el derecho se fortalece. Por lo tanto, la concentración es lo que conculca la libertad, y la regulación, libera.

Hay otra relación a la que me quiero referir brevemente, y es la que se entabla entre tres actores fundamentales de todo sistema político: el poder económico, el Estado y el Pueblo. Claro, me dirán: 'el pueblo somos todos', que es una muletilla que no deja de ser verdad. Es decir, el pueblo somos tanto quienes pensamos 'A', como los que piensan 'B'. Pero, lo cierto es, que, los pueblos tienen que elegir una autoridad pública para que organice su convivencia. Y,

como resultado de esas elecciones, habrá más de los que piensan de una manera, y menos de los que piensan de la otra. *Poner eso en juego no es soberbia, se llama 'Legitimidad'.*

Y la legitimidad tiñe de una tonalidad a las acciones del Estado. Un Estado no actúa igual si lo votan más los que creen en una cosa, que si lo votan más quienes creen en otra cosa.

El problema histórico que hemos tenido en la Argentina, ha sido que los Estados, o bien han sido dirigidos por el poder económico, o bien han sido votados por el pueblo pero cooptados luego por el poder económico. Por lo tanto, el desafío es ver cómo autonomizamos al Estado, y -a través de un gobierno popular- a la sociedad, de la cooptación, de la colonización que sobre él han ejercido históricamente los poderes económicos. De aquí mi gran diferencia con los que plantean que el temor es que las grandes cadenas de medios corren peligro de caer bajo las garras del Estado. Para mí es exactamente al revés: el desafío es que la política se autonomice respecto de la presión y de la cooptación histórica que ha ejercido el poder económico a través de la manipulación de los mensajes hechos por las cadenas de medios que le son afines. Es decir, el Estado -aun cuando hemos avanzado mucho en los últimos años- sigue siendo un espacio en disputa entre el poder económico y la legitimidad popular, pero con mucho desequilibrio a favor de aquél. Y cabe poner algunos ejemplos. El primero, la sanción de la ley de servicios audiovisuales luego de un enorme esfuerzo realizado por los foros, asambleas y debates parlamentarios, que finalizaron con una aprobación concluyente. Sin embargo, entre dos legisladores, una jueza y un par de camaristas -con un sentido evidentemente contra-mayoritario- consiguieron que esa ley democrática y mayoritaria no entrara en vigencia en su totalidad. Otro ejemplo lo constituyen las marchas que miles de argentinos hicimos el 15 de abril y el 28 de septiembre del año pasado a las puertas de Tribunales, mientras al mismo tiempo el jefe de la corporación

mediática más importante se reunía personalmente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Es precisamente el desequilibrio entre la capacidad de influencia del poder económico y de la legitimidad popular, lo que está en discusión.

Y en esa disputa, un Estado democrático y popular no oprime, libera.

Ahora bien, ¿estamos en presencia de un Estado popular y democratizador? Sí. Si vemos cómo se ha avanzado en la televisión digital, cómo se ha ampliado la cantidad de señales en poder de municipios, provincias, universidades, cooperativas, organizaciones sociales, las radios comunitarias, etc., podemos comprobar cómo la sociedad civil, el Pueblo, ha ampliado sus posibilidades de ensanchar y diversificar sus canales de expresión. Una vez más, el Estado garantiza la libertad. Un Estado que no ejerce el poder en términos de dominio, como sí lo ejercen las empresas monopólicas, sino que ejerce un poder de representación, abriendo el espacio para que el pueblo se exprese pluralmente. De *ese* Estado hablamos, del que garantiza que se diga lo que se quiere, con una libertad que nunca había presenciado desde que tengo memoria.

Quiero decir también dos palabras -porque seguramente estos debates van a continuar y va a haber oportunidad para profundizarlos- sobre algunos conceptos que procuro desacralizar, como por ejemplo la llamada manipulación de la publicidad oficial. Si se asocia la capacidad de influir en el mensaje con el control de la pauta publicitaria, digamos que la publicidad oficial es inferior al 3 % del total de la masa publicitaria que circula en el país.

En este caso, los sectores privados que dominan el 97% de la pauta publicitaria, poseen una capacidad proporcional a eso para influir sobre el mensaje que se transmite a la sociedad por los medios de comunicación.

Es una atribución desproporcionadamente superior a la del Estado. Y, además, quiero decir que la publicidad privada también se paga 'con el dinero de todos los argentinos'. Con la diferencia, a favor de los medios públicos, que hay muchos más argentinos que piensan de una manera, y éstos medios públicos los representan en esa proporción mayoritaria. Ese no es un desvío, sino un ejercicio más de la legitimidad. Para explicarme mejor: muchos programas de radio y tv privadas, y los diarios más grandes, también financiados con el dinero de todos los argentinos, efectúan la mayoría de sus entrevistas a personas que expresan un pensamiento muy minoritario electoralmente, aunque muy influyente desde el punto de vista de su poder económico. Y, reitero, lo hacen con el dinero de todos los argentinos. Y no se me ocurriría vetar que lo sigan haciendo.

Tampoco me escandalizo cuando veo publicidad de obras de gobierno. ¿Por qué motivo? Porque hace dos décadas, se llevó a cabo la escandalosa entrega del patrimonio público a partir de todo un aparato publicitario montado por el poder que convenció a una parte de la sociedad de que el Estado no sirve. Por ello, cuando veo publicidad de escuelas, de rutas, de infraestructura, de agua potable, de cloacas, no me escandalizo en absoluto, sino que, al contrario, las aplaudo porque hacen que el pueblo vuelva a querer al Estado.

Un último punto. ¿De dónde viene el terror de los que se oponen a esta desmonopolización, de donde viene la polémica? Viene de dos vertientes convergentes. Primero, de que se le cortan negocios enormes. Y segundo, de algo que creo que, como mínimo, les preocupa en el mismo nivel, y es perder la exclusividad que han tenido históricamente para construir los mensajes, para crear climas en la sociedad para que ésta acepte –a veces con menos rebeldía, a veces con más rebeldía– los ajustes sociales, los golpes de mercado, las corridas, las devaluaciones, los endeudamientos. Cuestiones que el pueblo nunca votó, pero que los Estados cooptados por el poder, se vieron obligados a llevar adelante. Hoy estamos en un proceso de reconstrucción del Estado popular, de modo que sea capaz de honrar, con autonomía política, los intereses de sus votantes.

En este sentido, el de la construcción del mensaje, voy a terminar con dos ejemplos de cómo las empresas monopólicas se ubican, sistemáticamente, en el lugar de enunciación de la contraparte de los intereses de la Nación. ‘Escándalo en los EE.UU. por haberse decomisado la carga de un avión’, cuando, en realidad, se trata de un Estado soberano que hace cumplir sus leyes. O, ‘Preocupación en Brasil por la prórroga de las licencias no automáticas para sus importaciones’, cuando, en realidad, se trata de un país, que, después de décadas, ha decidido tener política industrial, y, para ello, debe administrar su comercio exterior, y decir cuándo y a quién se le compra y se le vende. Es la disputa por desmonopolizar la construcción del mensaje lo que está en discusión. Las réplicas del monopolio no son solamente por el negocio que pierde, sino, también, debido a la pérdida de esa fuerza monopólica que han tenido, históricamente, para modelar los modos de interpretación de la realidad, de acuerdo con sus intereses.

Por eso, distribuir la potencialidad de elaborar y transmitir los mensajes, lejos de limitar la libertad, lo que hace -justamente- es garantizar, después de tanto tiempo, la libertad de expresión y el derecho de información de nuestro Pueblo.

LOS CAMINOS POSIBLES DE UNA REFORMA

(Diario Página/12 , 21.05.12)

Prolegómenos de un debate

“Constituir la unión nacional”, “afianzar la justicia”, “consolidar la paz interior”, “proveer a la defensa común”, “promover el bienestar general” y “asegurar los beneficios de la libertad”, son contenidos del Preámbulo de nuestra Constitución nacional que no deben remitir a generalidades, sino a los cimientos de nuestra organización como sociedad. A ellos podríamos

agregar otros valores, que, por implícitos, no son menos importantes, como el pacto previsional (según el cual los aportes de una generación anterior sustentan el retiro laboral de los jubilados de hoy, y el aporte de la generación presente sustentará nuestro retiro), el pacto financiero (según el cual el dinero depositado en los bancos sigue siendo nuestro) y el pacto tributario (según el cual nuestros impuestos son devueltos en salud, educación, justicia y seguridad de calidad).

Al cabo de casi tres décadas de ajuste prácticamente ininterrumpido, aquellos valores fundantes y pactos organizadores de nuestra comunidad resultaron lisa y llanamente destrozados. Por eso, el primer acuerdo de seriedad a dejar sentado para el debate sobre una reforma constitucional es la profundidad de lo que estamos hablando. No se trata de prolongar un mandato presidencial, sino de consolidar la trabajosa reconstrucción de los principios fundadores de nuestra condición nacional y de los nuevos derechos que de ellos derivan.

Cualquier utilización rastreadora del tema será demostrativa de la bajeza de las intenciones de quien lo pretenda.

Este no es un debate entre republicanos defensores de la libertad y populistas anacrónicos y salvajes. Hay un discurso de los poderes fácticos, que ha caído muy hondo en ese sentido, debido a la profunda horadación cultural que ejercieron hasta 2003. Sin embargo, muchos que se dicen republicanos justificaron bombardeos y proscripciones, golpes de Estado, desapariciones y muertes, que nada tienen que ver con la república, sino más bien con la intención de aniquilar aquellas experiencias políticas que osaron afectar sus intereses.

Rechazamos de plano, pues, que estos factores de poder, junto a aquellos políticos que operan, voluntariamente o no, como sus portavoces, opinen desde el pedestal de la república. La libertad de expresión absoluta, la eliminación de los delitos de calumnias e injurias para el periodismo, la no criminalización de la protesta social, las garantías procesales a los genocidas, la vía política

y legislativa para la confrontación de intereses profundamente divergentes – como sucediera con la Resolución 125 o el matrimonio igualitario– enmarcan el actual proceso dentro del respeto más irrestricto a las bases de la república.

El debate sobre la Reforma Constitucional tampoco es un debate entre “institucionalistas” vs. “no institucionalistas”. Nadie podría contradecir, desde la sensatez, que la Unasur y el Banco del Sur, el Estado promotor, las paritarias, la asignación universal, la movilidad jubilatoria o la presencia de la sociedad civil en un tercio de las licencias audiovisuales son instituciones fuertes.

En todo caso, la pregunta sería qué tipo de instituciones se busca custodiar o qué tipo de intereses se pretende jerarquizar a través de las instituciones que consagra una Constitución.

Digresión. Debate en una reunión familiar. “¿Qué opinás de una eventual reforma constitucional?”, me interrogó alguien que simpatiza con las privatizaciones de los ’90. “Es un tema complejo”, ensayé como primera respuesta. Pero antes de que yo pudiera continuar, otro asistente interfirió: “Aquí, el sistema parlamentario no funciona”. A lo que yo agregué, como último aporte, antes de que finalizara la conversación: “¿Qué significa que un sistema funcione?”

Que un sistema funcione significa, brevemente, que tienda a elevar la igualdad, que dé oportunidades, que brinde herramientas que conecten a cada ciudadana y a cada ciudadano con la posibilidad de realizar sus propias decisiones de vida. Desde esa perspectiva, ¿ha funcionado el sistema argentino? ¿Puede decirse que un sistema tantas veces interrumpido mediante la violencia cívico-militar de los golpes de Estado, y que generara tanta injusticia social, y que fuera tan repudiado por la población, es un sistema, que, sin más, funciona? Y, si, evidentemente, no siempre ha funcionado, ¿tan descabellado es entablar un debate serio sobre él?

Respecto de las “Declaraciones, Derechos y Garantías”, instituciones como la integración regional, la asignación universal, las paritarias, la movilidad jubilatoria, la propiedad nacional de los recursos, la soberanía energética de la

Nación, la función social de la propiedad, la necesidad de contar con un sistema tributario progresivo, la utilidad pública de los servicios audiovisuales u otras que están en debate, deberían añadirse a ese capítulo.

Por último, un párrafo sobre la remanida noción de alternancia y lo que escandaliza la posibilidad de mandatos más largos para un jefe de Estado. Primero, los regímenes parlamentarios europeos –tan “admirados” por momentos– no ponen límite a la cantidad de mandatos, en tanto éstos provienen de la voluntad popular; de todos, el principio más genuinamente democrático. Segundo, ¿quién pone límites a la reelección de autoridades en instituciones y corporaciones tanto o más influyentes que el Gobierno, como la Iglesia, las cámaras empresarias, el mundo financiero, la Sociedad Rural, las empresas multinacionales, los medios de comunicación, o, más allá de la duración de cada embajador, las políticas permanentes del Departamento de Estado?

En la mesa del poder, que es lo que realmente importa, el sillón de la autoridad política es sólo uno, entre los tantos que ocupan esos poderes fácticos y permanentes. Y es, además, el único con que las mayorías populares y los sectores sociales más débiles cuentan para ver defendidos sus intereses. Que la conducción de cada uno de aquellos poderes se mantenga durante décadas, ya sea en las mismas personas o en defensa de los mismos intereses, mientras que lo único que está obligado a rotar es la autoridad política, debilita claramente a esta última, y, con ella, a los sectores populares a los que expresa. Este es un marco conceptual –aunque no el único– desde el cual debe darse el debate sobre la alternancia, para desalentar todo escozor que el tema provoque en la oligarquía y sus voceros.

Frente a toda posición dominante, ya sea económica o cultural, la neutralidad juega a favor del dominio. Hacen falta grandes decisiones para desarticular esa situación de dominio. Y si ellas generan conflicto y “crispación”, habrá que afrontarlas.

¿PARA QUIÉN ES PRIORIDAD LA BRECHA CAMBIARIA?

(*Diario Tiempo Argentino*, 29.5.12)

Este trabajo constituye una mirada de la actual problemática del dólar desde un no economista, es decir, una mirada política.

Para ello, debo partir del amplio marco de referencia que brinda la situación internacional. Frente a esta, el gobierno que iniciara Néstor Kirchner en 2003, tomó tres decisiones fundamentales. La primera, el desendeudamiento, tanto respecto de los acreedores privados con un canje que redujo el capital adeudado en alrededor de un 70%, como el pago anticipado al FMI, de modo de salir de su monitoreo permanente. La segunda fue la negativa de la región a integrar el ALCA, es decir, a ingresar orgánicamente al área de negocios de los EE UU. La tercera es la recuperación de los aportes previsionales, de modo de aplicarlos al estímulo de nuestro mercado interno.

El segundo marco de referencia está dado por el pleno control que ejerce el gobierno nacional sobre los fundamentos de nuestra economía: relación deuda-producto, superávit fiscal y comercial, tipo de cambio administrado, volumen de reservas, tasa de crecimiento, tasas de interés. Este concepto resulta central a la hora de analizar la solvencia con que el gobierno ha venido enfrentando los sucesivos intentos de golpes de mercado con que las corporaciones buscan desestabilizarlo.

Un gobierno, que, además, no vacila en tocar los intereses que debe tocar, cada vez que una encrucijada lo obliga a elegir entre complacer a los mercados, o defender los intereses populares.

En definitiva, se trata de un contexto general que le permite a la Argentina sustraerse a los efectos más devastadores de la crisis internacional.

No obstante, ninguna economía, por más pertrechada que se encuentre, podría permanecer inmune a la crisis en términos absolutos. La necesidad de las casas matrices en el exterior de que las sucursales argentinas les giren sus

utilidades para sostenerlas frente a la crisis de Europa, altera el ritmo de reinversión en el país, propio de las etapas de normalidad. Si el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes explica buena parte de nuestro crecimiento fabril, convergamos que en medio de esta crisis, los mercados compradores no renuevan su parque automotor con el mismo ritmo de las etapas normales. Y, por último, vemos cómo se retiran capitales de los mercados financieros de nuestras commodities, para dirigirse a comprar los alicaídos títulos públicos de los países en crisis, de modo de hacer grandes diferencias cuando dichas economías se recuperen.

Todo esto explica la necesidad de nuestro modelo de preservar por todos los medios posibles el stock de dólares que le permita sostener el manejo de las principales variables macroeconómicas. De aquí que las corporaciones opositoras vienen intentando, infructuosamente, sucesivos golpes de mercado como la disputa de Martín Redrado en el Banco Central, la sanción de la cínica ley del 82% móvil, el no votar el Presupuesto 2011, y la presente movida alrededor del dólar. El objetivo central de esos intentos es, a mi entender, presionar a la Argentina para que vuelva a endeudarse en el circuito financiero internacional.

A mi humilde entender, y no desde la economía, sino desde la política, en estos parámetros debe inscribirse la presente polémica por el tipo de cambio. Una polémica, que, para comenzar, involucra a muchos más argentinos y argentinas desde lo cultural, por lo que arrastramos como memoria histórica y reciente de inestabilidades y corridas, que por lo que realmente incide en nuestras economías cotidianas. Y los medios hegemónicos saben muy bien cómo explotar esos miedos tan arraigados.

Pero, ante el marco descripto, la brecha cambiaria no es un problema que ocupe la centralidad del momento económico. Primero, porque el mercado informal del dólar es extremadamente pequeño si se lo compara con el mercado regular, y, además, porque la brecha es un eje que instala el establishment para alarmar y confundir, es decir, una nueva intentona para conspirar y desestabilizar. De otro modo, no se explica que los mismos que

hasta hace poco criticaban la ‘fuga de capitales’, hoy critican los controles impuestos para evitarla.

La aceleración del dólar ilegal cumple, además, el objetivo de los poderes financieros de marcar una referencia para una eventual devaluación del peso, que, tendría, desde mi punto de vista, dos consecuencias negativas. Una, para el gobierno, que es hacerlo salir de la política de flotación administrada, y otra para el salario de los trabajadores.

Daría la impresión, además, que el gobierno no busca disminuir la brecha, sino dejar correr la cotización del dólar ilegal, para encarecerlo tanto que pierda atractivo para sus eventuales compradores.

Lo que sí es cierto –una vez más– es que esta batalla cambiaría tiene un costado muy importante en revertir la cultura de las argentinas y argentinos, habituados a ahorrar en dólares. Contra lo cual, creo que ayudaría mucho si la compraventa de inmuebles y rodados se efectuara obligatoriamente en nuestra moneda nacional. Esto descomprimiría la presión sobre el dólar, y recuperaría el sentido de ahorrar en nuestra moneda, desde el momento que la moneda nacional constituye uno de los componentes principales de la soberanía de un país.

LEY DE MEDIOS: UN FALLO PARA ‘LAS PARTES’. ¿QUÉ PARTES?

(Revista Debate, 01.06.12)

1. La plena vigencia

El 22 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia emitió, por unanimidad, un fallo por el cual el próximo 7 de diciembre debe concluir la suspensión del art. 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obliga a los diversos operadores –en este caso el Grupo Clarín– a adecuarse a los preceptos de la citada ley, que limita la concentración de licencias y áreas de cobertura, de modo de cumplir con los objetivos de la ley en cuanto a la desmonopolización del sector y la democratización de la palabra.

Esto debería despejar toda incertidumbre, y clausurar -según lo dicho por la Justicia, pero, fundamentalmente, siguiendo los dictados del sentido común- toda duda con relación a la vigencia plena de la Ley. ¿Por qué? Porque confluyen dos afirmaciones emanadas de la propia Corte. La primera, cuando dice “este Tribunal ya se ha expresado en la sentencia de fecha 5 de octubre de 2010”, en la que señala que la medida cautelar que suspendía la aplicación del art. 161, “no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522 (Ley de Medios)”. La segunda, al decir que una vez que caduque la suspensión del art. 161, el próximo 7 de diciembre, el mismo será “aplicable con todos sus efectos a partir de la fecha indicada”.

Es decir, que, si se combinan ambos pronunciamientos, el primero, que la suspensión del art. 161 no obstaba a la vigencia del resto de la ley, y el segundo, que una vez levantada sus suspensión, el art. 161 surtirá todos sus efectos, la conclusión es que la ley estará plenamente vigente en todo su contenido, a partir del próximo 7 de diciembre.

2. La libertad de expresión

Lejos de pretender una acabada interpretación jurídica de dicho fallo, mi propósito es contribuir a su interpretación desde una mirada política del mismo. En su primera presentación, que data de fines de 2009, el Grupo Clarín solicita a la Justicia “ordene la suspensión del tratamiento legislativo del proyecto de ley... por ser flagrantemente inconstitucional... por vulnerar, entre otros, “la libertad de expresión”.

Numerosos periodistas del Grupo, voceros del establishment y de otros medios afines, trataron de instalar en la opinión pública, durante el tratamiento de la ley, que la misma buscaba limitar la libertad de expresión, que se trataba de una ley mordaza, persecutoria, etc. Sin embargo, la propia Corte -cuya actitud no fue condescendiente con el gobierno- concluye que “en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero

no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico. Debe existir una afectación concreta de la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado”.

Consecuentemente con esto, en varios pasajes de su pronunciamiento, la Corte Suprema deja en claro que, detrás de aquellos argumentos, lo único que se perseguía era un interés netamente patrimonial.

3. La apuesta al desgaste

El segundo punto a tratar es la intención del Grupo Clarín de suspender en los hechos la aplicación de la ley, no en base a un pronunciamiento definitivo de la Justicia, sino por el mero paso del tiempo, a través de una resolución provisoria como es una medida cautelar. A este respecto, la Corte se pronunció en dos oportunidades. En su fallo del 5 de octubre de 2010, había dicho que “si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora (Clarín), excepcionarse por el simple transcurso del tiempo...”. Y, en el mismo sentido, el pasado 22 de mayo señaló: “en ciertos supuestos, el simple transcurso de un determinado lapso de tiempo puede desnaturalizar...” la provisoriedad de la medida cautelar, “permitiendo a la parte requirente obtener por esta vía un resultado análogo al que se derivaría de un pronunciamiento de fondo”.

Es en este punto, las consecuencias del paso del tiempo, donde confluyen los objetivos patrimoniales y políticos del Grupo. En primer lugar, debo relatar los comentarios que los opositores a la Ley hacían en los pasillos del Congreso, en los días de su tratamiento, en 2009. Además de las objeciones generales, en lo estrictamente referido a la cláusula de adecuación (art. 161), decían que el año

de plazo que la ley establecía era un lapso demasiado corto, y que como mínimo había que extenderlo a tres años. Comprenderá la lectora o el lector, que, a finales de 2012, cuando venza el plazo según el fallo de la Corte, habrán trascendido, sugestivamente, esos tres años a partir de la sanción de la ley. Precisamente el plazo que los grupos de poder pedían a través de la oposición parlamentaria (a la que manejaron a gusto, hasta el punto de hacerla retirar del recinto al momento de la votación, previa aparatosa e impostada conferencia de prensa).

Pero el objetivo superior de aquella especulación con el tiempo, tenía que ver, fundamentalmente, con el desgaste del gobierno, hasta que cayera derrotado en las elecciones presidenciales de 2011 -como entonces se vaticinaba- y de esa forma poder derogar la ley, para mantener sus privilegios.

4. El verdadero trasfondo de la marcha de la derecha

El último tramo de la nota, quiero dedicarlo al aspecto que me parece más conceptual, no solo relativo a las secuencias judiciales de la Ley de Medios, sino a los rasgos que definen las tensiones políticas de la presente etapa en general. Y para ello, voy a ‘jugar’ –en el sentido metafórico de la palabra- con la simultaneidad del fallo de la Corte y el abrazo a Tribunales organizado por un amplio espectro de la derecha política argentina, bajo la consigna de que “una justicia independiente es garantía de república”, cuando, a mi entender, lo que verdaderamente significa es que “los sectores de la Justicia cooptados por el poder económico, constituyen la garantía para sus intereses”.

Para fundamentar lo que afirmo, vinculado con la Ley de Medios, bastaría con aquella coincidencia entre el alargamiento de plazos que las empresas afectadas buscaban plasmar en la ley, y que al no lograrlo, lo alcanzaron a través de la Justicia. Pero hay algo cultural, que reposa en el fondo de la concepción de república sostenida por el poder económico y sectores importantes de las clases medias y media alta de nuestra sociedad. Siguiendo los pasos de los padres fundadores de la democracia estadounidense, la Justicia es el único poder ‘contramayoritario’, es decir, no elegido por el pueblo. Y eso se hizo así, con

el fin de establecer el llamado ‘sistema de frenos y contrapesos’ que impidiera lo que, entre otros, James Madison (uno de aquellos ‘padres fundadores’), concebía como los riesgos de la tiranía de las mayorías.

Ahora bien, en democracias tan acotadas como las que hemos vivido durante décadas de dependencia (tanto que resulta difícil llamarlas democracias), el mayor riesgo nunca fue que las mayorías ejercieran una tiranía, sino algo infinitamente peor: la tiranía de las minorías.

Es decir, de aquellos grupos muy reducidos en número, pero sumamente poderosos a la hora de influir en las decisiones. En el caso que abordamos, en las decisiones de la Justicia.

Cuando, a lo largo del fallo que comento, la Corte se refiere en varios pasajes, con la debida equidistancia, a “los litigantes” o “las partes”, veamos a quiénes se refiere. Por un lado, a una inmensa mayoría del pueblo que legitimó el mandato de la Presidenta de la República que envió el proyecto al Parlamento, y de los diputados y senadores que lo votamos por abrumadora mayoría. Y todo esto, al calor de un profuso debate público, luego de innumerables foros sociales que delinearon el proyecto y más tarde lo apoyaron activamente. No obstante, bastó que un Grupo poderoso, como Clarín, por una parte, y un diputado opositor como Enrique Thomas, por otra, entablaran sendas demandas ante el Poder Judicial, para suspender por muchos meses la aplicación de la ley. Y más tarde, mientras decenas de miles de personas e instituciones sociales nos movilizamos el 15 de abril y el 28 de septiembre de 2010, con todo el esfuerzo de organización que eso implica, hasta la puerta de Tribunales, el Presidente de la Corte recibía en su propio despacho al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto. Tal es el desbalance real entre “los litigantes” o “las partes”, en cuanto a legitimidad democrática unos, en cuanto a capacidad de influir sobre las decisiones, los otros.

Por eso, mi posición es defender con toda energía la imparcialidad de la Justicia. Pero, al mismo tiempo, desmitificar que siempre proceda con independencia absoluta, porque, en muchos casos, que la Justicia contravenga el

mandato popular no es una señal de ‘independencia’, sino una evidencia de los atajos que el poder económico encuentra para proteger sus intereses.

En su fallo del 22 de mayo último, la Corte determinó que el próximo 7 de diciembre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debe entrar en vigor en todos sus aspectos. Si por algún artilugio judicial no fuera a suceder así, quedaría expuesto, una vez más, para qué tipo de Poder Judicial hizo la derecha argentina, la marcha de ese mismo 22 de mayo.

LA DISPUTA POR LA HEGEMONÍA ESTÁ VIGENTE Y ES NUESTRA *(Diario Tiempo Argentino, 7.8.12)*

Posiblemente, a quien lee esta nota le sucede con familiares o amigos con quienes comparte valores y formas de vida, que, a la hora de valorar la actualidad política, encuentra diferencias profundas y en algunos casos abismos. No me refiero al odio que algunos de ellos arrastran frente a la impertinencia histórica del peronismo, lo que, en otras palabras, Mempo Giardinelli llamaría ‘gorilas’. Tampoco me refiero a su opinión sobre medidas concretas del gobierno. Me concentraré en esa predisposición de algunos para situarse en un lugar de equidistancia, neutralidad, indiferencia o ajenidad, respecto de la batalla cultural, la batalla por el sentido, la batalla por la hegemonía política que se está librando por nuestros días en América del Sur, y en la Argentina en particular.

“Que no me metan en una pelea que no es mía”, “qué tengo que ver yo con eso”, “es una guerra de la cual no me siento parte...”, acostumbramos a escuchar de boca de esos pretendidos neutrales, que no quieren verse involucrados en la batalla entre el gobierno popular y las grandes corporaciones, encabezadas por el Grupo Clarín.

En una reunión familiar me decían que TN es un canal ‘democrático’ porque invita oficialistas, en obvia comparación con los medios públicos, donde muy rara vez concurren opositores. Me consta de boca de esos mismos opositores, que rehúsan concurrir cada vez que son invitados. Deben sentir que les

basta con ser habitués de los medios hegemónicos. Si no están en los medios públicos, no es por falta de invitación, sino por decisión propia.

Cuando escuché aquello no podía creer la precariedad de análisis, viniendo de personas tan inteligentes para desenvolverse en otros ámbitos de la vida. Lo cual prueba la gran capacidad que han tenido esos medios hegemónicos para modelar su interpretación de la política. No podía creer que alguien calificara a un canal como democrático, por el hecho de que después de estar las 24 horas machacando con un mensaje desesperanzador, con zócalos que preanuncian catástrofes, con operaciones vergonzosas, después de toda esa línea editorial destituyente, le den un espacio de cinco o diez minutos a un oficialista, a punto de dar las doce de la noche.

Me inclino por analizar este fenómeno desde otra perspectiva. El 26 de julio último asistí a una nueva y multitudinaria edición de la “Marcha del Apagón” en Jujuy. Alude a la terrible represión de 1976 en la zona de influencia del ingenio Ledesma, que terminó con la vida de decenas de trabajadores, entre ellos, Luis Aredes, por entonces intendente de Libertador General San Martín. También de estudiantes y militantes, que, sin ser de la empresa, cuestionaban los despojos a que la misma sometía a los sectores populares de esa región.

A raíz de ello es el Juicio que se lleva a cabo contra su dueño, Carlos Pedro Blacquier, a pesar de la protección de la que goza de buena parte del aparato judicial, económico y mediático de la Provincia. Junto al juzgamiento de las persecuciones en Loma Negra, de Amalia Lacroze de Fortabat, es uno de los Juicios más emblemáticos por la participación civil en el terrorismo perpetrado por la última dictadura. Con otros grupos similares, forman el núcleo de concentración económica conformada por el modelo de José Alfredo Martínez de Hoz. Recogieron, en definitiva, los beneficios de la destrucción de aquella burguesía nacional que sostuvo, hasta mediados de los años 70, el crecimiento del país. Una burguesía con la que los trabajadores tenían una intensa puja por la distribución de los ingresos, precisamente porque se trataba de una sociedad de pleno empleo, que generaba esos ingresos. Y que derivó en la altísima concentración que describieron Azpiazu, Basualdo y Khavisse, en su ensayo “El nuevo poder económico”.

Aquella represión, aquel terrorismo, provenían de un Estado totalitario, bajo el mando logístico militar, la inspiración económica empresaria y el fuerte apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como en toda la región. Con el objeto de erradicar la resistencia popular al plan de concentración económica, expansión financiera, endeudamiento y exclusión social.

El elemento vital, que se agregó a la represión física y el ajuste económico, fue la conformación de todo un aparato de comunicación de masas, encarnado por la empresa Papel Prensa, convertida así en un socio principal.

Su misión, a cambio de la cual logró su crecimiento, era moldear el clima social de aceptación al modelo, con técnicas muy idóneas para determinar cómo vastos sectores -predominantemente de clases medias- debían interpretar aquella realidad.

Así, el 24 de marzo de 1976 Clarín calificaba lo ocurrido como “Nuevo Gobierno”, y el 26 de marzo señalaba: “favorable repercusión tuvo en el exterior, y el mejor indicador se reflejó en el mercado de cambios de Montevideo, donde el peso argentino experimentó un alza del 15 %”. El 19 de junio decía: “Kissinger apoya la gestión económica, que acordaría importantes créditos del FMI”. Y el 29 de marzo de 1981, cuando ya nadie, y menos los periodistas, podía aducir ignorancia, Ernestina de Noble hablaba de los “logros alcanzados” y de “la consolidación definitiva de la victoria”.

Lo que hacían era, nada menos, configurar el polígono de poder con vértices en lo militar, el apoyo de los EE.UU. y los organismos financieros, que terminarían de cobrarse el endeudamiento externo con las privatizaciones de la década de los noventa.

Aquel proceso de destrucción de la burguesía nacional, de la sociedad de pleno empleo, de las conquistas sociales de los trabajadores, del espíritu de debate y militancia juvenil, terminó desmantelando los resortes estratégicos del Estado, y deteriorando nuestra vida cotidiana en términos de más desocu-

pación y más pobreza, menos recursos para la educación y el sistema de salud, es decir, aspectos concretos que descartan que alguien pueda calificar como “ajena” la batalla de estos tiempos.

No obstante los grandes esfuerzos del gobierno nacional instalado en 2003, todavía padecemos las presiones extorsivas de la concentración de las grandes cadenas de producción en siderurgia, cemento y alimentos, las grandes exportadoras de materias primas, el incremento de la concentración ya existente en la tenencia de la tierra, la extranjerización de la banca y la multiplicación exponencial de la deuda, la cartelización de los formadores de precios y el poder extorsivo de los grandes liquidadores de divisas. Maliciosa o inocentemente, se equivocan, pues, aquellos que sostienen: “no me vengan con cosas que pasaron hace 35 años”.

Todavía vivimos las consecuencias de cierta indiferencia frente a lo público, y somos testigos de lo difícil que resulta reconstruir un Estado eficiente y un tejido social y productivo acorde con el desarrollo que toda sociedad merece.

Por eso, cuando un militar, un empresario, o el ex ministro Martínez de Hoz son procesados y puestos en prisión, no se trata tanto de su poder concreto, muy disminuido por su condición de octogenarios. Sino del rescate del símbolo que significa recuperar por vía estrictamente institucional la Verdad Histórica y la Justicia, como valores instituyentes de la dignidad recuperada de una sociedad. Y actualizan un debate no sólo sobre lo que pasó, sino además, un análisis retrospectivo de cuál fue la conducta de cada uno de nosotros frente a aquellas circunstancias. Y, presos los conductores militares y civiles, el poner el acento sobre el CEO de aquel monopolio mediático que fuera arquitecto del colosal aparato comunicacional que sirvió de soporte a la represión, al ajuste y a la indiferencia –y en el peor de los casos a la justificación-, es justamente plantear la batalla cultural en los ejes que corresponden.

Hoy no son los tanques en las calles. Son los golpes blandos como los que se intentaron en Bolivia o Ecuador, y se concretaron en Honduras y Paraguay.

Y se apoyan en largas campañas de desgaste, de horadación de la credibilidad. Pero el mensaje es el mismo. Cuando Biolcatti dice: “quien critica al campo, critica a toda la Argentina”, no hace menos que repetir el concepto “nosotros somos la Argentina”, y justifica con ello la destitución –ayer con tanques, hoy con dólar blue y zócalos de TN, de los gobiernos populares que demuestran que la Argentina somos todos y todas.

Casi nadie se acuerda cómo se llamaba el candidato opositor al cual derrotó Perón en la elección de 1946. Es mucho más recordada la consigna “Braden o Perón”, como eje de aquella campaña. En ausencia de candidatos opositores de fuste, la batalla contra el jefe de Clarín, Héctor Magnetto, marca, pues, un eje central que no es ajeno, ni del pasado, sino de todos, y plenamente vigente. No sólo en cuanto a nuestro presente, sino sobre cómo delinear nuestro futuro.

EN EL CAMINO DE LA AMPLIACIÓN DE DERECHOS

(Diario Tiempo Argentino, 12.9.12)

El 27 de abril de 2003. A un año del “que se vayan todos” se vota para elegir presidente en los comicios que más tarde ungerían a Néstor Kirchner como triunfador. Pero, para ser riguroso, entre el 24% de Carlos Menem (con Carlos Melconian y Francisco de Narváez propuestos con antelación para ser sus ministros) y el 16% de Ricardo López Murphy, un 40% de los electores se inclina por el neoliberalismo.

Ese día yo era fiscal en una escuela de La Plata, cuando se acerca un joven que, con gestos de molestia y un poco desorientado, buscaba la mesa para sufragar por primera vez. “¿Querés votar?”, le pregunté. A lo que respondió casi ofuscado: “No ‘quiero’ votar, ‘tengo’ que votar. Si fuera por mí, podrían irse todos a ...”

No era casual la relación entre aquel apoyo que todavía tenía el neoliberalismo y la incredulidad de los jóvenes. El desguace del Estado, los despidos masivos, el alineamiento incondicional a los EE UU y el indulto a los genocidas, necesitaba de la despoltización de la sociedad en general, y de los jóvenes en particular.

En la medida que se agrandaba la brecha –hasta convertirse en un abismo– entre el sujeto democrático que es el pueblo, y la política, el mayor instrumento con que cuenta para hacer valer sus intereses frente a los poderes fácticos permanentes, pudo llevarse a cabo el ajuste más colosal y siniestro de la Argentina.

Desde que la dictadura estigmatizó y persiguió la militancia juvenil con la intención de aniquilarla, y luego el menemismo la redujo al nivel de la farándula, el saqueo de la Nación y la exclusión social se fueron filtrando profundamente por las grietas que dejaban abiertas la indiferencia por lo público, el individualismo y la resignación.

En estos días se discute un proyecto que otorga a los jóvenes de 16 años y a los extranjeros que acrediten residencia y estén documentados, la opción de votar. Más allá de la opinión de cada uno, de lo que no cabe duda es que se inscribe en una agenda de inclusión, ampliación de derechos, repolitización y ensanche del espacio democrático.

Confluyen aquí al menos dos planos de análisis. El primero, un cuadro de época, en el que, por ejemplo, el cerebro de un niño almacena la misma cantidad de información que manejaba Parménides, uno de los principales sabios presocráticos. Con el transcurrir de la revolución tecnológica, y el mayor flujo y velocidad de la comunicación, en los 16 años de una joven o un joven de hoy han sucedido más cosas que en los 16 años de las generaciones anteriores. Esto no significa traspolar automáticamente esas nuevas habilidades tecnológicas al campo de la madurez plena (que, por otra parte, nunca se alcanza), pero sí, al menos, coincidir en que si esa joven o ese joven de 16 años decide involucrarse en asuntos políticos, tenga el derecho de elegir a sus gobernantes.

El segundo plano tiene que ver con la revalorización de la política, y de una épica marcada por valores como la Verdad, la Memoria y la Justicia, la igualdad y la inclusión social, la denuncia de los monopolios, el debate sobre el poder. Cuando en 2010 se multiplicaban las tomas de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires por parte de sus alumnos en reclamo de mejoras edilicias, no quería decir que antes de eso esas falencias no existieran. Los techos ya se caían y la calefacción ya faltaba desde mucho antes de las to-

mas. La diferencia residió en la aparición de condiciones subjetivas favorables al compromiso, la militancia y la movilización. Es inimaginable un clima de movilización, una épica, para defender relaciones carnales con los EE UU, las misiones del FMI, los retiros voluntarios a trabajadores despedidos o el indulto a los genocidas. Pero sí se lo comprende en defensa de la Unidad de América del Sur, la reapertura de fábricas y la recuperación de puestos de trabajo y la condena de los genocidas, sean estos militares o civiles.

En el caso de los miles de hermanos provenientes de países limítrofes, también asistimos a una política migratoria amplia, que les reconoce su merecido derecho a vivir en la más plena legalidad, a diferencia de los años noventa, cuando el discurso oficial era que venían a sacarle el trabajo a los argentinos.

Por eso, cuando desde la oposición se dice que el proyecto de marras responde a una especulación electoralista del gobierno, se reitera, una vez más, el error de la estrechez de mira. Por un lado, dan por sentado, implícitamente, que los nuevos incorporados al padrón votarán por el gobierno y no por ellos. Y además, en lugar de fijarse cómo podrían hacer algo mejor que el gobierno en favor de los jóvenes y los inmigrantes, para obtener su apoyo electoral, vuelven a oponerse y forzar diferencias, a partir de una agenda únicamente negativa, que no le sirve al país, ni tampoco les ha dado resultados a ellos mismos.

PER SALTUM

(Diario Página/12, 17.11.12)

El Parlamento, elegido por millones, acaba de aprobar un proyecto del Poder Ejecutivo, votado por millones, para reglamentar el per saltum. Quienes se opusieron aducen un ataque a la República y asumen “per se” la defensa de la “calidad institucional”.

La pregunta es: ¿Cuál modelo de república defienden? Un modelo nuestro, no abstracto. No en otros contextos, sino en el nuestro, de tiempo y de lugar. ¿A cuál “República” de las que hemos vivido en los últimos 50 años ponen

como referencia? ¿A las que, después de alguna efímera primavera atractiva para el pueblo vimos caer en manos de los golpes cívico-militares o de las presiones del mercado? ¿A las que cedieron? ¿A las que fueron vencidas por el dibujo de una paloma sobre la cabeza del presidente, por una placa roja sobre el riesgo país, o por una denuncia de corrupción, de esas que el poder agiganta en tiempos destituyentes y luego la historia grande minimiza? ¿A las que cerraron las fábricas y las escuelas técnicas, empobrecieron el país y entregaron el Estado? ¿A cuál?

La República es una construcción histórica, no una abstracción donde reina la pureza. Y, si alguna vez carreteó por nuestra historia ese tipo de república, a poco de andar demostró que no tuvo poder.

Y cuando un gobierno electo cede a las presiones del poder, nunca resulta ser a favor de las mayorías populares. Y es precisamente eso, la claudicación ante el poder, lo que fue deteriorando progresivamente la cosa pública, es decir, la República.

Cuando lo que está en disputa es el poder, no hay neutralidad, no hay “asepsia”. Y la “calidad institucional” supera la mera retórica. Si hoy el 90 por ciento de los empleos formales se rige por paritarias contra el seis por ciento de Chile, o la mayoría de los universitarios del conurbano proviene de familias humildes, son instituciones de calidad. La no criminalización de la protesta social, la libertad de prensa más absoluta o las plenas garantías procesales a los represores implican valores profundamente republicanos.

El per saltum se relaciona con el control judicial de constitucionalidad que nuestra Carta Magna hereda de la Constitución de los EE.UU.

Pero una cosa es el control de constitucionalidad y muy otra es que un juez reemplace la voluntad de millones, derogando de hecho una ley votada por las instituciones mayoritarias.

Aquellos Padres Fundadores del modelo estadounidense suponían un contexto de normalidad, de descontaminación de los poderes públicos respecto de los intereses de los poderes fácticos permanentes, de los grupos minoritarios de poder. En ese contexto, poner el examen de la ley en manos de una sola persona, como un juez, estaba llamado a contrarrestar el riesgo de lo que ellos denominaban “la tiranía de las mayorías”. Pero aquí, la tiranía de las mayorías nunca ha sido un riesgo. Aquí, las tiranías han sido históricamente de las minorías. Dictaduras, proscripciones, desaparecidos, empobrecimiento, endeudamiento, no han sido producto de la voluntad popular, sino de políticas impuestas por los intereses claramente minoritarios de los grupos de poder.

¿O no sabemos que –sin obviar todo lo que falta hacer– hasta 2003 las distintas oficinas del Estado respondían a los grupos que las habían ido ocupando con el correr de los gobiernos, y no al poder político? Y me refiero –entre otros– a la incidencia de las multinacionales en el área de agricultura, de los laboratorios en salud, de los grandes bancos en economía, de las consultoras en el Indec, de los grandes medios en el Comfer.

A diferencia del pasado reciente, el gobierno iniciado en 2003 decidió echar mano de los instrumentos que necesita, para que las instituciones no rijan sólo desde el punto de vista teórico y no vuelvan a ser efímeras las conquistas y los derechos alcanzados. Y está resuelto a construir el poder democrático que haga falta para sostenerlas en el tiempo. Y para que los grupos minoritarios de poder no hagan lo que quieren, como estaban acostumbrados a hacerlo, a costa de la pobreza y la exclusión de las mayorías.

EL DISCURSO DEL AMO, RECITADO POR EL ESCLAVO

(Diario Tiempo Argentino, 18.11.12)

LA DERECHA IDEOLÓGICA Y OLIGÁRQUICA. Ese sujeto lábil, escurridizo, de fronteras difusas, que da lugar al espacio ideológico cotidiano de “la derecha” o de “las ideas de derecha”, o de “el pensamiento de la derecha” –a que

se refiere Ricardo Forster en su trabajo “La derecha y su metamorfosis”– no se dedica a “construir ideología”, esto es, a delinear un conjunto de valores y creencias que moldeen una visión a largo plazo del mundo y de la sociedad. No destinan a ello demasiado tiempo. Es más, hasta podría decirse que muchos de sus integrantes deben pensar para sí, o darlo por supuesto en todo caso, que no les hace falta “perder tiempo” en eso. No porque no necesiten una ideología para vivir, sino porque se encuentran con que esa “ideología” que necesitan para vivir, está predeterminada, premoldeada, por todo ese despliegue previo de sentido que el poder construye astutamente, con el fin de justificarse, sostenerse, consolidarse y auto-reproducirse.

La derecha no se aboca a esa construcción de sentido a través de la política, sino de otros canales de poder, que están dados por su posibilidad –muchas veces de origen económico– para incidir en el curso de las cosas, en el modo de interpretar ese devenir. Posibilidad o poder que proviene, entre otros caminos, de aquellos medios de comunicación surgidos al amparo de los intereses empresarios y corporativos dominantes, o de las instituciones del sistema educativo privado ligado a las más altas élites, de la cúpula de la Iglesia Católica. En definitiva, a través de lo que Antonio Gramsci llama “los aparatos ideológicos de las clases dominantes”. Aquellos que, en la mayoría de los procesos históricos latinoamericanos (y en una suerte de “internacional” del poder), la derecha ha manejado desde el dominio o bien la cooptación del Estado, con excepción de los cortos interregnos de flujo popular. Procesos estos, a los que la derecha supo, también, cooptar o destituir, en la medida que viera lesionados sus intereses con alguna seriedad.

LAS VERDADERAS CAUSAS DE SU IRRITACIÓN. Esta derecha nunca temió demasiado a las conquistas parciales del campo popular. Es más, fueron estas conquistas parciales las que le posibilitaron justificar su “tolerancia” democrática.

A lo que esta derecha teme es a la disputa de los paradigmas ordenadores de las relaciones de poder. Y a eso se debe su reacción destemplada frente a este presente de Sudamérica.

No es que les tema tanto a los miles de médicos cubanos que prestigian los flamantes centros de salud en medio de las comunidades indígenas de Bolivia. Lo que no están dispuestos a tolerar es que esos indígenas que fueron sometidos durante siglos, estén hoy día tan saludables como para sostener en el tiempo la profundización de un proceso revolucionario democrático encarnado en “uno de ellos” como lo es Evo Morales, y ocupándose, ellos mismos, de las cuestiones del Estado. No le temen tanto a un aumento de salarios, como a la autonomía del Estado para tomar decisiones económicas. No se molestan tanto con que los graffitis afeen el paredón de una de sus mansiones, sino que estallan de indignación, hasta llegar al paroxismo, cuando comprueban el desarrollo de nuevas estructuras políticas populares capaces de inundar las calles y sostener con solidez el debate público desde una mirada alternativa.

En definitiva, su grado de indignación es directamente proporcional a la profundidad de los intereses y las cuotas de poder que sea capaz de afectar un proyecto popular.

De aquí, que sus voceros de clase como Beatriz Sarlo, Magalena Ruiz Guiñazú o el diario La Nación, elogiaron los “buenos modales” de la última campaña presidencial de Chile. ¿Qué nivel de conflicto profundo podía acarrear una campaña en la que sus intervinientes no se proponían alterar ninguno de los pilares fundamentales del status quo?

En la Argentina, el poder estaba acostumbrado a que una amenaza de corrida de depósitos armada por el poder financiero lograba torcerles el brazo a los sucesivos gobiernos. En cambio, la presencia de una presidenta que no se amedrenta los mueve de ese lugar hegemónico, y, por lo tanto, los encoleriza de manera reveladora. La disputa por la orientación de la autoridad monetaria que ejerce el Banco Central, la directiva de destinar fondos para asistir a las pymes o para la inversión financiera, la obligación de liquidar divisas en el país, son medidas conducentes a establecer, progresivamente, regulaciones al mundo financiero a las que este no se muestra dispuesto a disciplinarse. Y

lo mismo podría decirse con la negativa a devaluar la moneda nacional, y con las restricciones a la liberalidad absoluta que reinó durante décadas respecto de las transacciones con moneda extranjera. Desde luego que, si esperaban recibir siete pesos (en realidad no son siete, sino lo que “ellos” fijaran luego de ganar la disputa) por cada dólar proveniente de las exportaciones de soja y el Estado sólo está dispuesto a reconocerles menos de cinco, estamos ante una derrota en el pleito por ese excedente económico que los grupos concentrados no están dispuestos a aceptar en silencio. Inentendible sería si ocurriera lo contrario. ¿Cómo no van a reaccionar los grandes estudios de abogados y contadores, que, primero, arreglaron el endeudamiento usurario del país, y una vez que se hizo imposible su pago, se enriquecieron litigando contra el Estado nacional en nombre de los acreedores? ¿Cómo no van a reaccionar –decía– si hoy el Estado, por la vía del desendeudamiento, ha logrado sortear las condiciones extorsivas que le imponían los organismos internacionales de crédito, de los que ellos cobraban ingentes comisiones? ¿Cómo no va a reaccionar el mayor oligopolio mediático de habla hispana ante un modelo nuevo de país, que, no sólo lo desplaza del ficticio pedestal de la imparcialidad informativa, sino que, al obligarlo a transferir la mayor parte de sus licencias, afecta seriamente la cotización de sus acciones en las plazas financieras del exterior? Por último, ¿podemos desligar el clima de agresividad que invade a una parte considerable de nuestra sociedad, de aquellas grandes líneas de interpretación real y simbólica de los hechos, que estos factores de poder han desplegado históricamente para sostener sus intereses?

EL DISCURSO DEL AMO RECITADO POR EL ESCLAVO (PARTE 2)

(Diario Tiempo Argentino, 23.11.12)

En esta segunda parte, no le daré la centralidad –como sí lo hice en la primera– a esa oligarquía rancia, no tanto referenciada en su abolengo –lo que sería un prejuicio– sino en sus prácticas. Esa que se ha enriquecido haciendo trampas al país, la que ascendió al precio de la ruina del Estado y de las mayorías populares, la cómplice del saqueo, la de los grandes estudios jurídicos y contables

dedicados a legalizar la elusión de impuestos, la que humilló y denigró históricamente a miles de trabajadoras y trabajadores.

En este trabajo me referiré a esos sectores medios que en muchos aspectos cultivan la rectitud en sus comportamientos (aunque muchas veces pacatos), que no roban, que han conseguido un buen pasar por razones de herencia, de movilidad social ascendente o de mérito personal, que pagan impuestos y tienen en blanco a su personal. Y que, sin embargo, a la hora de analizar la coyuntura política, lo hacen desde la perspectiva que le inculcan los medios dominantes. Sectores medios, medios bajos y hasta pobres, dispuestos a plegarse a las cacerolas del poder, en una especie de transversalidad destituyente policlasista. En definitiva, el discurso del amo, recitado como propio de boca del esclavo.

La pregunta que surge a esta altura es: ¿podrían los procesos totalitarios, de proscripción, de ajuste, haberse prolongado en el tiempo por fuera del consentimiento de una parte muy importante de la sociedad en cuyo seno esos procesos acaecen? Y, al decir “parte muy importante de la sociedad”, la expresión bien puede justificarse por su condición mayoritaria en cuanto al número, o bien en términos cualitativos, es decir, a partir de su capacidad para imprimirle a la etapa su modo de interpretar y significar esos acontecimientos.

Mi planteo es que deberíamos edificar defensas para que esa historia no se repita. No podemos regalar a esos sectores, sino que debemos asumir como central el desafío de desplazarlos del campo de la anécdota al amplio universo de la historia. El campo de la anécdota es el que intenta circunscribir el rumbo de un proyecto político a la declaración patrimonial de un funcionario –información la más de las veces manipulada– en lugar de analizar las grandes tendencias del modelo y la fuerza transformadora del sujeto que lo sustenta.

Desde la perspectiva de cierto discurso, y su potencia para penetrar en ciertos sectores sociales permeables a ello, pareciera ser que una sentencia de primera instancia o una columna periodística constituyen el centro de una etapa histórica, y haberle dicho que no al ALCA en conjunto con América del Sur, es un mero detalle.

Haber recuperado los fondos previsionales es menos importante que la reasignación de una partida menor del presupuesto, y restituirle al país la soberanía sobre sus hidrocarburos es insignificante si se lo compara con un rumor adverso impreso en el zócalo de un programa periodístico o con la marca de una cartera.

Es precisamente en este terreno, el de bregar por la construcción de un mensaje alternativo al de los poderes dominantes, donde el gobierno popular y las organizaciones políticas y sociales en que se sustenta debemos desplegar toda la batería de herramientas disponibles en pos de ese objetivo. Reconocer las razones históricas que la clase media tiene para no confiar en el peso como moneda de ahorro, pero al mismo tiempo explicar las diferencias estructurales que hoy existen respecto de ese pasado. Hoy estamos en presencia de un Estado, que, gracias al desendeudamiento, ya no sufre el estrangulamiento del sector externo, y merced al crecimiento con superávit, se ha convertido en tenedor mayoritario de divisas. Y que es justamente esa cualidad de controlar las principales variables macroeconómicas, lo que torna inviable que se desmadre la evolución de los precios. Y esto, no obstante el aumento que los mismos han tenido a consecuencia de la cartelización que rige la formación de los mismos, y la puja distributiva que hizo que las empresas trasladaran a los precios la recuperación salarial operada, de modo de mantener su tasa histórica de ganancia. Y lo mismo cabe decir de la necesidad de explicar las ventajas que apareja a los sectores medios la protección de nuestras industrias por vía del modelo de sustitución de importaciones. Y así también habría que explicar las ventajas de ir reconvirtiendo a pesos el mercado inmobiliario y la importante tasa de ahorro de la que hoy pueden gozar vastos sectores medios de nuestra sociedad.

En definitiva, por primera vez, en muchos años, estamos en presencia de un gobierno que cuenta con algunas condiciones esenciales, que son favorables a un proceso de profundos cambios de paradigmas.

La primera es el contexto latinoamericano, que cuenta con gobiernos populares de una densidad y fortaleza sin precedentes. La segunda es la férrea

conducción política de la presidenta de la República. La tercera es lo ya mencionado respecto al control político de las variables macroeconómicas fundamentales. Y la cuarta es la gran capacidad de las organizaciones políticas y sociales afines al gobierno, de ocupar la calle y protagonizar el debate público.

A todo esto podría agregar una última conclusión.

A corto plazo, hay que trabajar sobre esa franja de sectores medios en disputa. Y conste, una vez más, que no me refiero a la derecha oligárquica, de intereses irreconciliables a vencer, sino a esa otra franja social en disputa. Aun cuando se pueda ganar una elección sin ella, se trata de la ampliación de un bloque social capaz de garantizar una gobernabilidad más pacífica, y apoyar la profundización del proceso. Eso, a corto plazo.

Pero, a mediano plazo, esos sectores cada vez más vastos que se incorporan al espacio democrático en términos políticos, económicos y culturales por vía del plan Conectar Igualdad, de la educación cooperativa, de las primeras generaciones de universitarios, y tantas otras vías de inclusión, conformarán una nueva franja social ascendente, con niveles de consumo propios de las capas medias tradicionales, pero con otra estructura o matriz ideológica y cultural. Un nuevo paradigma cultural, despojado del perverso mensaje impuesto sutil e inteligentemente por el poder, aunque no menos perverso, durante las cuatro décadas precedentes al corte que se inició en nuestro país, en 2003.

“SI NO LES GUSTA UNA LEY, NO LA CUMPLEN”

(Diario Tiempo Argentino, 28.11.12)

En vísperas del 7 de diciembre, el principal grupo afectado por los límites al monopolio que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece, no vacila en apelar a cualquier inescrupulosidad, con tal de enrarecer el clima

político y social del país. Sin embargo, a diferencia de lo que sucediera históricamente con otros gobiernos, la Argentina tiene hoy un gobierno fuerte y decidido. En parte por el claro liderazgo del ex presidente Néstor Kirchner y de la actual presidenta Cristina Fernández.

Y en parte, también, porque hay una porción cada vez mayor de nuestro pueblo, en línea con los pueblos de la región, que ha asumido como propia la alta calidad e intensidad del debate público de estos últimos años, y no está pasivo frente a los ataques del poder.

Gracias a ello, en las mañanas que siguieron a la importante manifestación del 8N y del denominado paro nacional del 20 de noviembre, el país amaneció con absoluta normalidad. Ello, como expresión de esa capacidad de mando y conducción política, económica y social del país que demuestran las actuales autoridades, garantizando la más absoluta gobernabilidad, frente a los sucesivos intentos destituyentes.

Para ello confluyen dos tipos de razones. Una, las políticas aplicadas, que sostienen a nuestra economía, a sus fábricas y trabajadores, en una situación bastante lejana a las debacles que se presentan en otras áreas del planeta. Y la otra es cómo se ha elevado la conciencia pública sobre la traumática y muchas veces humillante relación de los gobiernos populares respecto de los poderes fácticos y las corporaciones. Ponían y sacaban presidentes y ministros; con una placa roja en la pantalla de TV originaban corridas cambiarias y financieras, torcían el rumbo de medidas populares. Nos hacían creer que quien gobernaba era la política, cuando en realidad quienes gobernaban eran esos mismos intereses, que le hacían cumplir órdenes a la política.

Eso es lo que cambió. Lo saben y no pueden tolerarlo. Y es eso lo que genera esta irritación, además de alguna cuota de negocios que seguramente deban perder a partir del desprendimiento de algunas licencias. Son dos meridianos muy determinantes como para que no reaccionen: la pérdida de negocios, y el cambio de paradigma que pone a la política por sobre la impunidad histórica de las corporaciones. Hoy se encuentran con una valla infranqueable: si bien todavía debemos ganar más terreno en la sociedad, hay cada vez más sectores del pueblo que lo saben. Y no están dispuestos a dejarse doblegar.

Históricamente, los momentos de mayor ajuste y exclusión coinciden con los de mayor despolitización. Hoy, en cambio, hay un tejido de militancia política y social, una muchedumbre de jóvenes comprometidos que genera el entramado por donde no pueden pasar. Y su capital más importante es La Verdad.

La Verdad de que el grupo que hoy acusa penalmente a Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente nació de un pacto de silencio con la dictadura, a cambio del papel subsidiado para que centralizara el mensaje escrito. La Verdad de que a partir de allí acapararon más medios con la riqueza acumulada, hasta hacerse oligopólicos. La Verdad de que nos hicieron creer que la dictadura era un gobierno respetable en el que había que confiar, y así legitimaban ante sus oyentes y lectores las políticas del FMI y del Departamento de Estado, sin darle a la sociedad los elementos suficientes para que luchara contra la destrucción de nuestro aparato productivo y el desguace del Estado.

Hoy, una parte cada vez mayor de nuestro pueblo tiene acceso a la Verdad. La Verdad de que intentaron convertir en natural que se vea durante horas una tribuna de fútbol en lugar del partido. La Verdad de que los ídolos populares, del pasado y del presente, son precisamente eso porque le pertenecen al pueblo, y no a la empresa que pasa sus programas. La Verdad de que controlan nichos de la justicia y cuando eso se denuncia dicen que el Estado amedrenta a los jueces. La Verdad de que cada vez que nuestro país tiene un problema o una diferencia con los EE UU, con los empresarios de Brasil, con la OMC, con los fondos buitres o con los importadores, invariablemente son los que expresan la voz de los EE UU, de los empresarios, de los buitres, o de quien sea, pero jamás la voz del gobierno legítimo. La Verdad de que en su editorial del domingo 18 de noviembre, Van der Kooy escribe infamias sobre dichos míos en una sesión, que nada tienen que ver con lo que realmente dije y consta en actas. La Verdad de que si no les gusta una ley no la cumplen. La Verdad de que en sus páginas o en sus zócalos hace años que no pasan una sola buena noticia que acontezca en nuestro país.

En definitiva, la Verdad de que cuando tres periodistas dignos, capaces y profesionales, como Caballero, Russo y Vicente, señalan distintos aspectos de sus abusos, los denuncian penalmente para caldear aun más los ánimos. En honor a esa Verdad, la solidaridad, el apoyo, el compromiso, el involucramiento y la movilización de quienes nos sentimos parte del campo popular, y sabemos de qué lado de la historia ubicarnos. De esa gran historia que estamos escribiendo en la Argentina y en la región.

LOS HÁBITOS DEL PODER

(Diario Tiempo Argentino, 04.12.12)

Mi lectura y posterior opinión sobre el documento emitido por los obispos argentinos fue atravesando etapas. La primera –esa dimensión tan humana y que Cristo tanto entendería– fue la ofuscación y esas ganas tan fuertes de gritar que me parecía deplorable. Pero no debía quedarme ahí, porque eso convalidaría una confrontación basada en el impulso, y ese plano, aunque válido, no resulta igualmente constructivo que el de la reflexión.

Por eso pasé a la ponderación de cada párrafo, a lo que me referiré unas líneas más adelante. Pero la dimensión más abarcadora es la que me lleva a calificar el documento desde una mirada general, esto es, a discrepar con el lugar desde donde decide ponerse el obispado para evaluar nuestra realidad. Y es aquí donde llego a la primera conclusión. Se trata de un documento eminentemente partidario, desde el momento que se apropia de toda, sin excepción, la línea argumental de los factores de poder cuyo principal objetivo no es construir una Patria mejor, sino denostar al gobierno en todo lo que haga.

No está hecho desde la Iglesia-pueblo, sino desde la Iglesia-poder. No está hecho desde la mirada de los humildes, sino desde los sillones. No está redactado desde el vínculo estrecho y profundo – que no lo tienen– con los más vulnerables, sino desde los estereotipos

construidos en las grandes, pero herméticas, oficinas del poder, y “propalados” luego (aquí sí cabe la palabra), por los títulos gráficos, los zócalos televisivos y los mensajes radiales del poder.

Es un documento surgido de esa renovada alianza de clase –y rencor de clase– que históricamente constituyó la cúpula de la Iglesia con los grupos de interés más poderosos de nuestro país.

Sólo así, desde ese divorcio más absoluto con la realidad concreta que viven amplios sectores de nuestra sociedad, y especialmente los jóvenes, es que pueden asociar el extraordinariamente rico momento histórico que atravesamos junto con Sudamérica, con ejes como la droga, el delito, la falta de libertad. Como si algo de eso fuera lo que define nuestro presente. Como si fuera eso, y no la recuperación de nuestra dimensión latinoamericana, nuestro arduo proceso de autonomía financiera, la recuperación de la negociación a la alza de las relaciones laborales. Como si fuera eso y no el enorme salto de calidad que ha experimentado el debate público, que discute hoy temas centrales como cuestionarse dónde ha residido el poder real durante las últimas décadas. Ese poder real, que, pese a que hemos ejercido nuestro derecho al voto, fue mucho más fuerte que el voto y nos llevó a entregar el Estado, a tremendos ajustes, a la exclusión de tantos y tantas compatriotas. Porque nadie votó eso, y sin embargo fue lo que realmente sucedió.

Y no es que no haya drogas, o delito, o aumentos de precios que sería mejor que no estén. Pero si somos intelectualmente honestos, todos y todas deberíamos reconocer que hay una clara tendencia a revertir esos flagelos, con la inclusión de miles y miles de pobres al mundo del trabajo, del cooperativismo, de las escuelas públicas, de las nuevas, pujantes y socialmente igualadoras universidades nacionales. Con los miles de proyectos comunitarios, con la proliferación de modalidades de economía social y solidaria. Con el manejo más autónomo que impulsa el Estado de las variables económicas y su intervención para reorientar el ahorro desde el atesoramiento individualista y financiero, hacia la inversión productiva.

Es un documento del poder, hecho desde el poder. Porque solamente así se justifica pensar que un pueblo podría “reconciliarse” con un proyecto cuyo jefe, el dictador Videla, reconoce con sus propias palabras el valor de haber asesinado a miles de jóvenes. Pero la tergiversación no es ingenua, sino que responde, precisamente, al hecho de que hoy, el debate que denuncia a los poderes históricos, ha ido ganando terreno en todos los rincones del país. Y es eso lo que el poder, y los obispos son parte central de ese poder, no tolera.

Por eso fustigan la politización de los jóvenes. Si trazáramos dos líneas de tiempo, veríamos cómo coinciden los momentos de mayor ajuste y exclusión, con aquellos de mayor despolitización, apatía e indiferencia frente al debate político. Por eso, cuanto más presente esté el debate, más se cierra el entramado social para que no vuelvan a pasar las recetas de ajuste social, que es el precio que pagamos para financiar los negocios y privilegios del poder. Y a ese debate público, a esa recuperación de lo político, que es lo que afecta sus intereses, le llaman “división irreconciliable”.

Y cuando un Estado democrático se decide a no seguir esperando que una ley surgida de los poderes democráticos votados por millones se frene por la capacidad de ciertas corporaciones para influir sobre algunos jueces, a eso le llaman “menoscabo del poder judicial”.

Para seguir usando palabras del documento, “la Patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad”, respondo: la patria es una construcción histórica, en medio de un contexto mundial y regional, con hombres y mujeres reales, que tienen sus contradicciones, sus imperfecciones, sus contramarchas. Y que, cuando se combinan algunos factores, como voluntad popular y liderazgo político –no peyorativo caudillismo– decide tomar un nuevo rumbo histórico, construyendo autonomía, desatando tutelajes. Y es ahí donde entra a tallar el valor Libertad. Y, como lo practicaba Evita, o como lo señala el lúcido vicepresidente de la hermana Bolivia, Álvaro García Linera, “no hay derechos si no hay recursos”. Y es esa búsqueda de recursos genuinos y de ampliación de

derechos lo que posibilita la libertad de un pueblo, para que, progresivamente, no sólo vote, sino decida. Decida sobre los temas que históricamente decidió el poder, y dentro de él, el obispado argentino, cómplice, entre otras cosas, del genocidio de los setenta.

Pocas impunidades son tan aberrantes como cuando una persona o una institución se atribuye la representación de Dios. Una institución que mandó construir monumentos imponentes mediante el trabajo esclavo de miles y miles de seres humanos, para congraciarse con un Dios que no era Jesús de Nazaret. Porque el Cristo histórico, el Cristo hombre, sólo les reclamaba humildad y compromiso con los humildes.

El último tramo de mi análisis no es ya criticar las críticas que hace el documento de los obispos. Al contrario, hay críticas que enaltecen al criticado. Mi sensación final es, más bien, agradecerles la claridad.

SIN FRAUDES NI PROSCRIPCIONES

(Diario Tiempo Argentino, 22.12.12)

El aniversario número 29 del 10 de diciembre de 1983 me llevó a formular algunas reflexiones, más allá de la celebración. Todas ellas alrededor de un concepto que puede aparecer polémico: no se trata de veintinueve años de democracia, sino de continuidad de gobiernos elegidos por el voto, sin fraude ni proscriciones. Veintinueve años en que se han sorteado graves crisis –que antes desencadenaban golpes de Estado– siguiendo los pasos institucionales indicados en la Constitución Nacional. Al menos, no de una democracia integral.

No quiero que se interprete esto como un cambio menor. Baste mencionar que, a partir del 10 de diciembre de 1983, el Estado cesó de ser un instrumento represivo para pasar a ser garante de derechos civiles y políticos. En una realidad como la nuestra, es nada menos que la diferencia entre el debido proceso y el arrojar al río los cuerpos de los disidentes. Y ese es un prerrequisito fundamental de la democracia, pero no es toda la democracia, no es la democracia integral.

Me resisto a reducir la democracia a la sola ausencia de dictadura, porque sería un desmedro de su contenido social.

Lo que quiero poner en cuestión, vista la perspectiva histórica, es una idea con la cual nos formamos en plena transición entre la dictadura y la institucionalidad. Es la que indicaba que cada golpe de Estado, es decir, cada período de totalitarismo, traía consigo un profundo debilitamiento de lo social; habíamos vivido tantas interrupciones institucionales con sus consecuencias tremendas para los sectores populares y más vulnerables, que la premisa era recobrar la estabilidad institucional, y con ella vendría el bienestar. Por lo tanto, había que asegurar lo procesal, para garantizar el logro de los contenidos sociales de una democracia cabal. Es lo que Alfonsín había sintetizado en su frase: “Con la democracia, se come, se educa y se cura.”

Cuando atravesamos esta fecha, se suele hablar de “las asignaturas pendientes de la democracia”. Y, en ese sentido, en lo primero que pensamos es, por ejemplo, en la pobreza, o en la calidad educativa. Pero lo cierto es, que, durante los primeros veinte años posteriores al 10 de diciembre de 1983, no sólo no se resolvieron esos y otros problemas sociales, sino que los mismos se multiplicaron y se profundizaron. Eso no es ya una asignatura pendiente, sino un claro retroceso. Es decir, en pleno cumplimiento de los pasos procesales de la democracia, su dimensión social se deterioró profundamente.

Tomemos, por caso, tres grandes fundamentos que determinaron la desestructuración de nuestra sociedad.

1. Entre 1983 y 2003, y no obstante la desarticulación de nuestro sistema productivo durante la dictadura, la Argentina pasó de ser una sociedad de pleno empleo a tener el 50% de la población económicamente activa con problemas de trabajo, y un 25 % de desocupación lisa y llana.
2. Cuadruplicó los 45 mil millones de dólares que arrastraba de deuda externa en 1983, tomando números muy gruesos.

3. Multiplicó exponencialmente los indicadores de pobreza, pasando de bolsones parciales al empobrecimiento estructural de franjas cada vez más anchas de nuestro pueblo. Podríamos hablar, también, en términos similares, de nuestro desempeño en materia de salud y educación.

Estos botones de muestra, señalan a las claras que no se trató simplemente de “no cumplir asignaturas pendientes”, sino del debilitamiento estructural del sujeto democrático. Y todo, bajo el estricto cumplimiento de los pasos procesales previstos por la Constitución Nacional.

Es decir, la realidad desmintió con toda intensidad aquella idea de que la estabilidad institucional acarrearía la prosperidad social.

Fue recién a partir de 2003, cuando algunas de las dimensiones estructurales de lo que podemos definir como una democracia “integral” comenzaron a ser revertidas con políticas de inclusión, interrumpiendo claramente aquellas tendencias descendentes que la democracia procedimental no había logrado detener. Es a partir de 2003 que se inicia un proceso de trabajosa conjunción entre las normas constitucionales que consagran las libertades civiles y políticas, con aquellas que determinan el umbral de derechos sociales. No hace 29 años, sino recién diez años, que avanzamos en una etapa ascendente de reconstrucción de la dimensión social de la democracia, es decir, hacia un concepto integral, y no meramente parcial o electoral, de la democracia.

Diez años, desde que instituciones fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y el sufragio sin fraudes ni proscripciones, se entremezclan con otras instituciones de –como mínimo– tanta “calidad institucional” como la Asignación Universal, las negociaciones colectivas, el desendeudamiento, la integración regional libre de tutelajes, la economía social y solidaria, la soberanía energética, la recuperación del Banco Central para el sistema productivo, la sustitución de importaciones, el control de la fuga de divisas, la enorme masa de ciudadanos humildes que hoy concurren a la univer-

sidad pública. En definitiva, la recuperación del Estado como facilitador social y equiparador de desigualdades, en lugar de aquel Estado cooptado durante décadas por los grandes conglomerados económico-financieros. Con la honrosa excepción de los primeros años posteriores a 1983, cuando aquella primera etapa del gobierno del doctor Alfonsín intentó una digna, pero tenue resistencia.

En definitiva, está demostrado que con el solo cumplimiento de las pautas procesales de la democracia no se come, ni se educa, ni se cura. Se trata de una condición necesaria, pero no suficiente.

Para completar el ciclo democrático se requiere, además, combinar un fuerte liderazgo político con la férrea voluntad de transformación de un pueblo politizado, movilizado, capaz de conflictuar los preconceptos liberales, que, bajo un pseudo consensualismo teórico, en la práctica nos habían llevado a perder muchas de nuestras conquistas históricas, aún, bajo gobiernos elegidos por el voto.

LA CUESTIÓN DEL PODER EN EL LENGUAJE DEMOCRÁTICO

(Diario Tiempo Argentino, 30.12.12)

Hay una cuestión de fondo que subyace y le da base de sustentación a todo el conjunto de grandes medidas y decisiones políticas que configuran el modelo nacional y popular, y que es la que conceptualmente determina el cambio de etapa política que estamos presenciando.

Esa cuestión es haber puesto al descubierto un tema históricamente oculto, silenciado, como lo es la discusión sobre el Poder real. “Lo que no se nombra no existe”, dice George Steiner. En eso, precisamente, consistía el mérito, la astucia, el privilegio del Poder, para mantener su inmunidad; en su capacidad para ejercerlo desde las sombras. Lo que se nombraba eran dirigentes, gobiernos, medidas políticas, orientaciones económicas. Y, por lo tanto, ellas eran las responsables de los ajustes, del malestar, de la exclusión. Uno de los grandes

cambios operados a partir del liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner fue, precisamente, nombrar al Poder. Y ese ‘nombrar’ al Poder, lo pone en el centro de un debate social y político, y es lo que permite, precisamente a partir de ello, denunciar sus abusos, atacar algunos de sus intereses profundamente injustos, e intentar resituarlo dentro de un nuevo esquema social y político más equitativo.

Tal vez lo más grave para ‘ellos’, más que cualquier medida individual por más grandes que fueran los intereses afectados, ha sido poner al descubierto la diferencia entre el Poder real, por un lado y el gobierno y la política, por el otro.

Lo que nos gobernó durante décadas no fueron los gobiernos elegidos, sino los poderes fácticos que actuaban en las sombras y por detrás de esos gobiernos, impartiendo las órdenes.

Y, en la medida en que, por acción u omisión, los actos de la política comenzaran a ser disfuncionales a esos poderes fácticos, o bien disciplinaban a esos gobiernos a partir de sus presiones, amenazas y climas mediáticos, o bien los destituían.

Fue una tarde, dando una clase habitual en mi Maestría de Política Latinoamericana en la Universidad de La Plata, cuando –sin querer– puse en palabra este concepto. Hacía poco se había producido la represión de las fuerzas policiales a los indígenas que se oponían a la construcción de la carretera del Tipnis. Esos indígenas formaban parte de la coalición social y política de Evo Morales, y la derecha, en uno de sus remanidos actos de picardía, se dio cuenta de que debía ahondar la grieta entre los disconformes y el gobierno boliviano. Actuaron igual que nuestra prensa hegemónica, mutante a descamisada, que piensa que alguien va a creerle cuando aúlla en favor de algún derecho social, a los que históricamente ignoraron.

En aquel momento, les dije a mis alumnos y alumnas que les iba a enviar por mail algunas interpretaciones alternativas de lo había sucedido en Bolivia, porque la interpretación ‘oficial’ la podrían obtener consultando la página de

los diarios tradicionales. Y, mientras lo estaba diciendo, me dije mentalmente: si quien ejerce el gobierno es Evo Morales, al utilizar la palabra 'oficial', debería haberme referido al gobierno. Pero me estaba refiriendo al Poder. Y eso disparó en la clase un debate muy enriquecedor sobre este presente de Sudamérica.

En esto reside, pues, uno de los más grandes, tal vez el más grande cambio de paradigma político de esta etapa: poner en disputa quién disciplina a quién. Y, en la medida que pueda consolidarse una nueva ecuación, según la cual sea la política la que discipline a los mercados, la voluntad mayoritaria la que oriente el rumbo de los poderes económicos, estaremos ante la refundación de una nueva legitimidad democrática e institucional.

Pero hay una segunda cuestión, no menos de fondo, que surge del discurso opositor. Y es el hecho de desacreditar sistemáticamente el orden de prelación de las legitimidades. En la política, la mayor legitimidad pública es la del, o de la presidente. Por lo tanto, sus acciones no sólo no pueden presumirse como abusos de poder, ejercicio de autoritarismo o acciones inconsultas, cuando, en verdad, de lo que realmente se trata es de hacer uso de esa legitimidad superior proveniente de la voluntad popular.

De lo contrario, caeríamos en la paradoja de que quien ostenta la mayor legitimidad es el autoritario, y lo 'democrático' sería que ese presidente o presidenta tomen las medidas que les indican las minorías.

Ese discurso no es ingenuo, sino parte de toda una técnica comunicacional dirigida a confundir, equiparando legitimidades que no tienen punto de comparación. Uno de sus primeros antecedentes lo encontramos en la etapa de la Resolución 125, cuando en las pantallas de TN, un discurso de la presidenta, respaldada poco tiempo antes por el 45% de los votantes, ocupaba la mitad de la pantalla, y en la otra mitad, un dirigente local de una de las tantas entidades rurales, ocupaba la otra mitad haciendo un gesto de negación. Se trataba, lisa y llanamente, de una trampa a la Democracia.

Algo similar sucedió tiempo después, en el episodio que concluyó con el alejamiento de Martín Redrado del Banco Central. Los medios hegemónicos se referían a aquel episodio como un conflicto de poderes, cuando, en verdad, jamás podría equipararse la legitimidad de la presidenta de una Nación con la del presidente de un banco, salvo que, para determinados intereses, los bancos sean igual o más importantes que las naciones.

En el mismo sentido, cuando debatimos en la Cámara de Diputados la declaración de repudio a la denuncia penal de Clarín contra algunos periodistas y funcionarios, un legislador de la oposición habló de una disputa entre el Grupo Clarín y el ‘Grupo Casa Rosada’, nombrando a este último, en forma peyorativa. Lo paradójico es, además, que por un lado se trate despectivamente al gobierno como si fuera un grupo más, y al mismo tiempo se alerte sobre el supuesto riesgo de caer bajo las garras de una suerte de poder totalitario. En el último debate parlamentario, sobre la Ley de Trata, alguien habló reiteradamente de ‘Estado proxeneta’. En fin... ¿cómo se puede hablar con tanta liviandad de la autoridad investida de la máxima legitimidad, que es la representación popular? ¿cómo se puede viajar semánticamente con tanta laxitud entre la banalización y la sacralización extrema de las palabras, negando todo posible punto de equilibrio?

En definitiva, el litigio de intereses que implica un cambio de época en la política argentina y latinoamericana, también debe atender a las cuestiones del lenguaje. En estas líneas, he tocado dos aspectos. El de poner en palabra lo que el Poder siempre quiso mantener oculto. Y el darle a las palabras alguna aspiración de racionalidad, que nos aleje del paroxismo a que pretenden llevarnos, infructuosamente, algunos intereses.

Capítulo II

**LA REGIÓN, EL CONTEXTO,
Y EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN •**



UNIDAD Y AUTONOMIA PARA ENCAUZAR EL CONFLICTO

(*Diario Tiempo Argentino*, 13.08.10)

El ex presidente Uribe utilizó su combate contra las FARC con tres objetivos básicos de política interna: 1- Como factor de cohesión social, habida cuenta del rechazo generalizado de la población a esa organización. 2- Como consolidación de su popularidad y prolongación de su presencia política aun después de su salida y 3- Como forma de “marcar la cancha” a su sucesor, quien ya había mostrado cierta diferenciación en términos de mayor diálogo con Venezuela, y garantías de salidas pacíficas del conflicto.

No obstante, la controversia ingresa en un campo de análisis mucho más amplio que la pretendida incursión de las FARC en territorio venezolano y la consiguiente ruptura de las relaciones diplomáticas, e involucra, en gran medida, al conjunto de nuestra región. Me animo a ubicar ese amplio marco conceptual en las siguientes coordenadas:

- A. *Rusia*: su recuperación económica y su protagonismo como abastecedor de combustible, la reconcilia con su tradición imperial, y la involucra en los conflictos por el control de territorios adyacentes, como límite a las apetencias de los EE.UU. de consolidarse lisa y llanamente como potencia asiática.
- B. *Medio Oriente*: el fracaso de los EE.UU., tanto militar como ante la opinión pública mundial, debilitan la autoridad de las intervenciones y las guerras inventadas.
- C. *China e India*: su emergencia como nuevos actores económicos los convierte en inminentes convidados a la mesa de la política internacional.
- D. *Europa*: una crisis que acentúa su impotencia para controlar la inmigración africana, agrega a la agenda de los EE.UU. un nuevo dolor de cabeza.

E- Brasil: se afianza como país continente y potencia de segundo grado, representando a una región que sale de tres décadas perdidas. Con números virtuosos en su macroeconomía, Sudamérica ensancha el margen de reivindicación social de sus pueblos, y se reapropia de rentas históricamente depredadas por el poder financiero extrarregional.

En este marco, la llegada de Obama a la presidencia de los EE.UU. aumenta la complejidad, porque, si bien está lejos de ser un “progresista” en términos de la izquierda latinoamericana, tampoco es un representante ortodoxo de los halcones que aún controlan los mayores núcleos de poder de su país, y buscan –a cualquier precio, como siempre– desbancarlo de una segunda presidencia, o en todo caso, inviabilizar sus posiciones más innovadoras. La incursión estadounidense en el Mar de Corea, provocando la caída del primer ministro japonés de centroizquierda Yukio Hatoyama, es una muestra de que todavía conservan una feroz capacidad de reacción de sus organismos de inteligencia.

Todo esto contribuye a cimentar esperanzas en un mundo con más actores decisivos de lo que suponía la unipolaridad emergente tras la caída del muro de Berlín.

El conflicto Colombia-Venezuela, supuestamente bilateral, se inscribe, más bien, en este debilitamiento de la hegemonía estadounidense y su necesidad de recuperar control estratégico sobre nuestra región.

¿Qué papel le toca en tal contexto a América Latina? ¿Cómo se relaciona ese conflicto con este cuadro de situación mundial?

Antes de esbozar una respuesta, no puedo dejar de plantear un párrafo sobre el narcotráfico. Siendo el primer país consumidor y con poderosos instrumentos de control a su alcance, los EE.UU. no encauzan el tema porque no quieren. En vez de prevenir el consumo y descomprimir, por vía de legalizaciones parciales, un negociado que se infla proporcionalmente a su clandestinidad, la criminalización y militarización usadas hasta ahora han operado como

los más fuertes mecanismos de control social y disciplinamiento político. Y Uribe fue, en ese sentido, el ariete de la estrategia estadounidense; sus bases recientemente instaladas en Colombia bastan como prueba fehaciente.

Pero desde el momento que en América Latina aparecen otros gobiernos con el coraje de salirse del libreto, los EE.UU. se sienten compelidos a reforzar su injerencia. Lo están haciendo en México, y no porque tenga un gobierno progresista. Allí, los 14 mil muertos por un narcotráfico que ya no condiciona al Estado sino que en diversos nichos de gestión lo ha sustituido, tapan el flagelo social más importante que es la pobreza, multiplicada desde la firma del tratado de libre comercio, y su consecuencia directa, los emigrados.

Volviendo a las preguntas, América Latina está felizmente dotada de aquellos recursos estratégicos que en el planeta resultan insuficientes: energía y combustibles tradicionales y alternativos, agua potable, biodiversidad. Pero con un extra sobre otras regiones que también los poseen: no estamos en presencia –hasta ahora– de conflictos étnicos, religiosos o sociales de tal radicalidad, que distorsionen el carácter prioritario de aquellos recursos. Para preservarnos de ello, la Unasur es una herramienta fundamental, no sólo por concretar simbólicamente la aspiración bolivariana, sino por su potencial político. El Banco del Sur; el Consejo Regional de Defensa, direccionado hacia áreas estratégicas como la amazonia (biodiversidad), la andina (minerales), la platina (agua dulce) y la atlántica (petróleo), las cumbres presidenciales, y, como está visto, las mediaciones personales e institucionales, constituyen pilares esenciales para la unidad y la autonomía de la región.

América Latina está dando pasos históricos en dirección a su autonomía. Ayudan a ello su situación económica y la voluntad política, aún con matices, de varios de sus gobernantes.

Por eso, no hay que permitir que se instale como problema central la falsa división entre presuntos “institucionalistas prolijos” dignos de todo elogio por los bienpensantes de siempre, como podrían ser Lula o Mujica (o Ricar-

do Lagos y Michelle Bachelet en su momento), y “populistas anacrónicos” como Chávez y Evo Morales, entre quienes les conviene incluir también a Kirchner y Correa.

Y no debemos tampoco ceder a un republicanismo vacío que taladra con la alternancia, sino consolidar la orientación de los liderazgos presentes, hasta tanto se tornen irreversibles algunos de los logros y las disputas de poder que transforman a este momento en uno de los más ricos de nuestra historia.

Sobre la conveniencia o no de exacerbar el conflicto se pusieron en juego dos teorías. La primera propone no alentar la injerencia de una fuerza extrarregional, para no desviar la atención de la defensa de nuestros recursos estratégicos en unidad. La segunda, que en algunos momentos pareciera haber sostenido Chávez y de ahí su acercamiento a Irán, es que si América Latina no entra en la confrontación principal –esto es, con los EE.UU. como enemigo explícito, directo y en el campo de batalla y con el objeto de salir del capitalismo– nuestra región nunca será un jugador internacional de relieve. En mi opinión, la región debe profundizar las actuales experiencias de inclusión social y multiculturalidad, de cambio de patrón distributivo y de inversión, e inclusive, revisar la utilidad o no que le han deparado las instituciones liberales anglosajonas y eurocéntricas. Pero en paz. Los odios y las consecuencias de un enfrentamiento que vaya más allá de lo político, pueden ser irreparables por décadas y dilapidar la presente oportunidad.

Desde el momento en que la Unasur (incluyó el proyecto CELAC, Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe sin los EE.UU. ni Canadá) salvaguardó a Evo Morales del gompismo, resistió la instalación de las bases militares estadounidenses y cuestiona la presencia de la Cuarta Flota, se erige como un freno a la incursión neocolonialista: ergo, la pretensión original del ex presidente Uribe, cabeza de playa de los EE.UU. en el continente, intentó hacer todo lo posible para que las gestiones de la Unasur aparecieran como un fracaso. Y no pocos actores internos de nuestro país apostaron a ello a través de sus presagios apocalípticos.

Con inteligencia y decisión política, y no sin dificultades, cada uno de nuestros pueblos está sorteando la abrumadora presión a la que las corporaciones estuvieron hasta ahora tan habituadas, se trate de cúpulas financieras, terratenientes, mediáticas o eclesiásticas.

Con la misma decisión, la unión de esos mismos pueblos, acaba de dar un valorable paso frente al ancestral acoso del colonialismo: eligiendo la paz frente al señuelo de una posible intervención militar, y la unidad en autonomía, frente al tutelaje histórico de la superpotencia.

ES NECESARIO REPENSAR NUESTRAS INSTITUCIONES

(Diario Tiempo Argentino, 17.09.10)

Las instituciones políticas, y entre ellas los parlamentos de América Latina, afrontan un gran desafío en el actual contexto internacional, que presenta más actores decisivos que lo que suponía la unipolaridad emergente tras la caída del socialismo “real”, a expensas de un capitalismo, también “real”.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) tiene dicho que la década de 1980 fue para nuestra región una “década perdida”. Sin embargo, es oportuno agregar que venimos de tres décadas perdidas. Los '80 se perdieron en términos económicos, porque los '70 se habían perdido en términos de democracia política, y a raíz de ello se perdieron los '90 en términos de brecha social.

En cambio, el presente milenio nos encuentra ante una combinación de legitimidad política y bonanza económica de la cual no se tiene memoria.

Sumado a esto, nuestra región posee los recursos naturales y energéticos que resultan escasos para otras áreas del planeta, recursos como biodiversidad, combustibles tradicionales y alternativos, agua dulce. Y, además, no padecemos conflictos étnicos, religiosos y/o sociales de tal radicalidad que absorban y distraigan el grueso de nuestras energías populares.

De aquí la importancia de que los gobiernos constitucionales del subcontinente hayan encarado con un éxito, al menos ponderable, los retos a la democracia y a la paz en Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela. Porque en el caso de no sortearlos en términos políticos, es decir, pacíficamente, facilitarían la injerencia militar de potencias extrarregionales. Y eso es lo que algunos factores de poder están buscando, como un renovado instrumento de control y disciplinamiento de sesgo colonial.

A la consigna histórica “dividir para reinar”, América del Sur está respondiendo con unidad y autonomía.

América del Sur afronta una oportunidad inmejorable de ir rompiendo ciertas cadenas históricas de colonialismo, y para ello es necesario contar no sólo con la labor de los parlamentos, sino pensar en el rediseño de todo nuestro sistema institucional.

Lejos de ser una conclusión cerrada, el debate acerca de los desafíos de la región está abierto. Es importante partir de la base de que provenimos de una sociología muy particular, con una fuerte impronta hispana, pero también indígena, y una marcada influencia de los intereses británicos; y a esa sociología fuertemente impregnada de mestizaje, indigenismo y multiculturalidad, dominada y sojuzgada, se le impuso una religión, se le saquearon grandes riquezas, se le pretendieron arrasar ciudades, costumbres, culturas autóctonas, y se le injertó, hace dos siglos, un sistema de instituciones liberales de origen eurocéntrico y anglosajón.

En nuestros tiempos, los sudamericanos y latinoamericanos estamos notando que en enormes tramos de nuestra historia, esas instituciones liberales intermediaron mucho más a favor de los poderes establecidos que de los sectores populares. Y comenzamos a repensarlas.

Incluso, en los últimos tiempos, esta interpretación de las instituciones liberales puras también podría resultar válida para algunas sociedades europeas, más desarrolladas, con mayor grado de cohesión social. Casos donde,

aún contando con sistemas políticos “estables”, parlamentos activos y partidos consolidados, la mediación institucional no pudo evitar la aplicación de fuertes ajustes sin brindar a los pueblos que los sufren ninguna instancia de consulta, mucho menos de decisión.

En Grecia, ninguna de las personas a quienes acaban de recortarle la jubilación votó eso, ni fue llamada a discutirlo en una mesa democrática. Y en España, hacia donde emigraban un decenio atrás los jóvenes argentinos, hoy rebajan las pensiones y subsidios por nacimiento en nombre del Partido Socialista, mientras el Banco Santander acaba de comprar el paquete accionario del mayor banco de Suecia. Es decir, el ajuste se dirige al pueblo de España, no a sus grandes capitales.

El debate de estos temas no implica en modo alguno cercenar la democracia sino, más bien, potenciarla con una presencia más directa del pueblo en las grandes decisiones. Y transformar a las instituciones políticas en espacios de expresión de la voluntad popular, antes que en guetos de la denominada corporación política, a menudo cooptada por los grandes intereses.

De lo que se trata es de llenar el sistema institucional latinoamericano de contenido social, para evitar esa reiterada tentación por separar la agenda cotidiana del ciudadano común del submundo de prioridades exclusivas de los círculos partidarios.

Necesitamos una comunicación mucho más directa entre la voluntad popular y el sistema institucional. Y para ello estamos en una etapa propicia capaz de sostener la orientación y profundización de los actuales liderazgos de la región, de manera que los avances a que asistimos se consoliden en el tiempo.

La tradición institucional liberal, sustentada por los bienpensantes de siempre, es portadora de otro mito “republicano” y es la alternancia de los gobiernos. “¡Cuidado!”, se alerta por las grandes cadenas de medios, “¡no vayan a quedarse muchos años en el gobierno!”

Así, los que permanecen décadas en la mesa del poder son los jefes de las grandes corporaciones mediáticas, financieras, terratenientes, industriales, re-

ligiosas. Lo único que debe rotar en nombre de “las buenas costumbres republicanas” son los dirigentes populares y esto encubre, claramente, la intención de debilitar a la política –entendida como representación de lo público y agente del interés social frente a las corporaciones privadas más poderosas.

Otro punto a tener en cuenta es no permitir que se instale como problema central lo que es una falsa división entre presuntos “institucionalistas prolijos” como podrían ser Lula o Mujica (o Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en su momento), y “populistas anacrónicos” como Chávez y Evo Morales, entre quienes a ciertos intereses conviene incluir también a Kirchner y Correa.

Todos ellos forman parte, aun con sus particularidades y matices, de un campo político contestatario del neoliberalismo.

Para continuar en defensa de la riqueza de este momento sudamericano, tomemos el ejemplo de algunas instituciones impulsadas por la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), como el Banco del Sur, la coordinación de políticas monetarias y cambiarias, la integración energética, el Consejo de Defensa Regional que tiene como principal “hipótesis de conflicto” la preservación de nuestro patrimonio ambiental.

Imaginemos cuál sería la situación actual del subcontinente si nuestras economías hubieran quedado atadas a las economías centrales a través del ALCA, en lugar de habernos negado a su constitución en nombre de una política soberana en la Cumbre hemisférica de Mar del Plata, en noviembre de 2005.

Imaginemos qué hubiera pasado en la Argentina si en lugar de haberse recuperado los recursos previsionales como herramienta de financiación de políticas públicas, ellos permanecieran aún en manos de los grupos financieros internacionales que acaban de desplomarse.

Son estos caminos de autonomía política los que representan un impulso para afrontar con esperanza y con soberanía, los desafíos de la etapa. No ya sólo por los parlamentos, sino básicamente por nuestros pueblos. O, más bien, llenando de pueblo a nuestros parlamentos.

MEDIOS, GOBIERNO Y EL PODER EN LA REGIÓN

(*Diario Tiempo Argentino*, 19.10.10)

A partir de la aparición de gobiernos populares, cierta audacia en la acción, mucha participación y a la vez soportando grandes escollos, los países de América Latina estamos tratando de salir de la “colonización cultural” en que estamos sumergidos y del “dominio del sentido”, que desde tiempos ancestrales operan los factores de poder. Un ejemplo que resulta gráfico lo constituye la diversa interpretación de la crisis internacional.

Acertadamente, en América del Sur hemos mantenido un nivel de actividad en nuestros mercados internos, gracias a la recuperación del papel del Estado y a políticas públicas que mucho distan del modelo neoliberal de los '90, todo lo cual nos ha mantenido al margen del epicentro de la crisis.

Dicho en grandes números, el mundo tiene, aproximadamente, 6 mil millones de habitantes, de los cuales 4 mil millones viven bajo la línea de pobreza y 1000 millones de personas –seres humanos, no estadísticas– padecen hambre. Sin embargo, la sensación de crisis del capitalismo, el lenguaje de crisis, comienza con la caída del grupo Lehman Brothers.

Para el sistema de comunicación ortodoxo, el que nos impone el poder y que nos somete, hay crisis cuando cae un conglomerado financiero, y no cuando hay hambre en un planeta que produce el doble de calorías de las que en verdad necesita.

Hay muchas maneras de explicar la colonización del sentido común, el intento de cooptar y controlar el promedio del pensamiento mundial.

Y se podría ensayar la siguiente: recordemos que tanto en los Estados Unidos como en España -que han sido dos puntos claves de esta crisis-, la caída irrumpe cuando se perfora la “burbuja inmobiliaria”. Esto es, créditos dados a gente común a la que se le hizo imposible pagarlos, por lo cual había que quitarles las casas.

Este estallido se produce por un crecimiento artificial del dinero, entendiendo el adjetivo “artificial” como un proceso de circulación exponencial de dinero en un circuito financiero escindido del mundo productivo, que se pudo separar precisamente porque el Estado no lo reguló.

Desde el momento que una política autónoma de las corporaciones no regula este llamado proceso de “financierización”, este se incrementa, estalla y cae. Inmediatamente, lo que el universo financiero reclama es “salvataje estatal”, auxilio proveniente de los fondos públicos.

¿A quién habían dejado sin casa?: A la gente. ¿De quién es el dinero del Estado que debe acudir en ayuda de los grupos financieros que no toleraban ser regulados? De la gente, de la misma gente que se había quedado sin su casa. No obstante, el sistema comunicacional “oficial”, el sistema de poder que domina las grandes cadenas de medios, no da cuenta de esto al procurar formar, como lo hace, el “sentido común”. De allí la expresión referida como “colonización cultural”, que pretende imponer el criterio de que vivimos en un mundo “globalizado”, que hay que profundizar los avances tecnológicos que permiten la comunicación en tiempo real y las grandiosas operaciones financieras online, cuando –en verdad– cinco sextas partes de la humanidad no tiene acceso a ello y, por lo tanto, no están globalizadas en términos de esa “totalidad” que inspira la palabra.

Una pregunta posible, entonces, es: ¿estamos ante una crisis financiera o ante una crisis de paradigmas de civilización? No parece tratarse de una crisis financiera. Si así fuera, con fórmulas correctas de política financiera podríamos sortearla.

Desde un planteo ortodoxo como el que surge de los gobiernos centrales, llegaríamos a concluir que el objetivo sería que las poblaciones más pobres de nuestro continente o del África lleguen a consumir como en Vancouver o en Copenhague. El problema es que, para ello, harían falta cinco planetas tierra en términos de recursos energéticos, y ello es de momento imposible.

Una cultura alternativa, como la que es necesaria para salir de la actual colonización, debería cuestionarse la incompatibilidad entre un capitalismo traccionado por el afán ilimitado de consumo, y un mundo finito, con límites precisos en cuanto a la cantidad de recursos naturales y energéticos disponibles.

Es aquí donde se torna necesario un nuevo paradigma de distribución de la riqueza, de la igualdad, de un mayor equilibrio en la manera de concebir el mundo, nuevos paradigmas donde entran en juego conceptos tales como el desarrollo sustentable, las nuevas formas de consumo responsable, el comercio justo, el cooperativismo, las instituciones de la economía social, y donde América Latina tiene un papel importante a desempeñar en una etapa como esta.

Cuando hace 21 años cayó el Muro de Berlín, se vaticinaba un mensaje único con relación al sistema que prevalecería y al que el planeta entero debía alinear-se: democracia liberal y economía de libre mercado. Pero, lo que en realidad ocurrió es que superada la contradicción que enfrentaba a las superpotencias y sometía al mundo subdesarrollado, y cuando el discurso oficial apuntaba a la unipolaridad, en lugar de terminarse las ideologías, en lugar de concluir la historia, salieron a la luz los conflictos más profundos que padecía la humanidad, y que están mucho más vinculados a la pobreza y la desigualdad.

Un ejemplo a escala regional lo constituye el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos, que se presentaba como la palanca para resolver los problemas de pobreza, y lo que hizo fue profundizarlos. Lo que “el sistema oficial” hizo, frente a ello, no fue invertir recursos en integración social sino levantar un muro para que los excluidos no puedan cruzar la frontera.

El proceso reveló las debilidades del sistema, y alentó la aparición de nuevos actores. El mundo no depende ya de un actor único y todopoderoso, sino que nuevos actores están clamando por un lugar en la mesa de las discusiones del poder mundial.

LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUJETOS

(*Diario Tiempo Argentino*, 24.10.10)

No cabe duda de que en la Argentina y en América Latina en general vivimos un tiempo político nuevo, distinto al que estuvimos habituados durante las últimas décadas. ¿Existen rasgos comunes en la región? ¿Cuáles podrían ser algunos de esos rasgos distintivos?

Varios gobiernos latinoamericanos, más allá de sus matices, no son neoliberales. Para ellos, la integración regional y la cooperación Sur-Sur son preferibles al alineamiento con los EE.UU.;

... el Estado juega un rol preponderante; y la pobreza, la desigualdad y los recursos naturales ocupan un lugar destacado en sus agendas.

Es en este marco que se inserta el presente clima de debate, que tanta reacción provoca en los grandes factores de poder. Es lógico: con mayor o menor énfasis, concreción y profundidad, se han puesto en disputa, por un lado, la distribución del ingreso, y por otro –no menos importante– los símbolos y las significaciones.

Veamos algunos ejemplos de este cambio en la formación del sentido en nuestro país. La significación histórica de habernos negado como región a integrar el ALCA. No sólo como iniciativa económica, lo que desligó a nuestras economías del desplome de los países centrales, sino desde el significante profundo, el gesto que implica haber puesto un límite a un tutelaje que se suponía natural, y con él a sus negocios derivados. Algo similar ocurre cuando la Unasur reemplaza a la OEA en el abordaje de los grandes temas políticos.

En un mismo sentido, los juicios por el terrorismo de Estado arrojan condenas penales concretas de privación de libertad a sus responsables. Pero desde lo más profundamente simbólico, reparan la imagen de un Estado terrorista por uno que imparte justicia en paz, ofreciendo a los procesados todas las

garantías legales. Al mismo tiempo, confieren elementos de interrogación a toda una sociedad sobre el comportamiento de los diversos actores durante la dictadura, e incluso en la postdictadura. Y, finalmente, cambian el estatus simbólico de quienes se sintieron –y a quienes sentimos– dueños de nuestra vida, nuestro patrimonio y nuestro destino, por el de personas comunes pasibles de ser juzgadas como cualquier simple mortal.

La aparición en escena de los pueblos originarios pone en palabra un relato diferente, por parte de un nuevo sujeto democrático hasta ahora inhabilitado. Desde luego, la pugna por el territorio que reclaman como propio tiene una implicancia dineraria para los pools de siembra. Pero tal vez sea aun más doloroso para el poder, la pugna para que mayores sectores de nuestra sociedad admitan que no todos somos descendientes de gringos. Ello incidiría sobre el sentido de la tan mentada “calidad institucional”, ampliando sus alcances más allá de la sola defensa de las instituciones liberales y eurocéntricas. El derecho a la tierra, a la lengua, a la organización y a la historia, también pasaría a ser una institución cuya calidad debe ser defendida.

En las antípodas del planteo religioso, que impone quién puede acceder a un sacramento y quién no, la ley de matrimonio igualitario nada impone; se limita a reconocer un derecho a toda persona que se sienta en condiciones de ejercerlo. En resumen, la incorpora como sujeto democrático.

Y así podríamos seguir enumerando ejemplos. Allí donde está naturalizada la ley de “entidades” financieras (cuyo sujeto es la “entidad”), pugna por nacer la ley de “servicios” financieros (cuyo sujeto pasa a ser el usuario del sistema). Allí donde lo natural era el trabajador que acataba esclavizarse con tal de no perder su empleo, pasa a estar un sindicato que negocia la suba de salarios, es decir, lo enaltece como sujeto. Allí donde lo natural era el niño o la niña desnutridos y analfabetos (para quienes la respuesta del poder acaba de ser la militarización), ahora está más cerca una matrícula escolar, una vacuna y un mantel, es decir, un nuevo sujeto democrático.

Cuando, por ejemplo, la Radio Comunitaria del Bajo Flores, o el proyecto Cinezap (Zonas de Alta Complejidad) o La Casa Latinoamericana de Merlo

o el espacio social Cine en Movimiento –entre otras cientos de experiencias similares de capacitación y voluntariado– deciden mostrar la creatividad reparadora que surge cuando se estimula a los jóvenes del Conurbano, no encuentran repercusión en los medios del poder. Es porque mientras quienes sufren la pobreza sigan siendo exhibidos sólo en su rostro más degradado, no se convertirán en un sujeto democrático que dispute la exclusividad de los socialmente aceptados.

Cuando en las universidades de Quilmes, José C. Paz y La Matanza se pone en marcha la diplomatura en Economía Social y Solidaria para quienes acceden a los planes Argentina Trabaja –alejándolos de la amenaza de tener que repartirlo con un puntero político– surge un nuevo sujeto democrático.

Por eso la movilización de los estudiantes por mejores condiciones para la educación. No es porque antes no se cayeran los techos de las escuelas, sino porque ahora hay mejores condiciones para ejercer una nueva subjetividad democrática, preocupada por lo público y no sólo por lo individual.

Tres reflexiones finales.

Primera: se trata de un proceso en el cual hay un mérito del actual ciclo de gobierno, que es haber creado condiciones para que fluya y dejarlo fluir. Pero a su vez, es un proceso cuyo valor trasciende ampliamente al gobierno, poniendo en marcha un dispositivo social, un clima colectivo de época que se autonomiza, en buena hora, de la agenda de este y de cualquier gobierno, abriendo cauce a su propia agenda positiva y superadora.

Segunda: lo que está en juego no son únicamente ciertos negocios del poder que se puedan poner en riesgo. Es esta nueva significación, es este cambio de sentido, este compartir el espacio social y político con nuevos sujetos, lo que al poder le resulta casi imposible de metabolizar. Por eso –insisto, más allá de lo económico– lo que “crispa” al poder, lo que lo lleva a satanizar la conflictividad de estos tiempos, es que sus ancestrales prerrogativas de exclusividad están dejando de ser “naturales”. Por eso, aunque les vaya bien económicamente, van a

seguir centrando su crítica en “los malos modales” de la etapa. Lo que sucede, en todo caso, es que, por el cambio conceptual profundo que despierta, se trata de un proceso que no podría acontecer por el sólo consenso, y sin conflicto. **Tercera:** la batalla recién comienza y está muy lejos de ser ganada. Lo que hay que remover son décadas de dominación cultural que nos impuso cómo interpretar la realidad de acuerdo con sus intereses, y que va a seguir poniendo numerosos, inesperados y poderosos obstáculos a la marcha del campo popular. De aquí que el objetivo político no debe agotarse en reafirmar lo propio, sino en ensanchar, con nuevos mensajes a nuevos aliados, el bloque social capaz de sostener esta marcha.

DESCOLONIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA

(Diario Tiempo Argentino, 23.09.11)

El mundo tiene casi 7000 millones de habitantes.” O, mejor dicho, en el mundo habitamos casi 7000 millones de seres humanos, quienes, por esa sola condición, tenemos derecho de vivir con dignidad. Entre ellos, 4500 de seres humanos viven bajo la línea de pobreza. Y más de 1200 millones padecen hambre.

El día de su nacimiento, cada una de esas personas era –ontológicamente– igual a mis hijos, que –por comparación– han tenido el privilegio de haber estado bien nutridos, haber sido vacunados apropiadamente e ir a la escuela. El pensamiento de derecha dirá que esa desigualdad está inscripta en la naturaleza misma. Dirá que es la sabia “mano invisible” del mercado, quien se encargará de decir cuáles de esas personas son las más aptas para desenvolverse en la vida, y aquellas que no lo son, será porque no han querido trabajar, y “no tengo por qué mantener su vagancia con mis impuestos”.

Nuestro pensamiento sostiene, en cambio, que las diferencias entre los niños que han sido alimentados, vacunados y educados y los que padecen hambre deriva de los erróneos caminos que han tomado las políticas de diferentes países del mundo, de un sistema económico y cultural de acumulación desen-

frenada que es el capitalismo tal cual lo vivimos, y que son, precisamente, la política y el Estado, los encargados de mitigarlas.

Sin embargo, la colonización cultural de gran parte de la Humanidad da por sentada la naturalidad de estos hechos, y recién pone en palabra la noción de “crisis”, no cuando un niño o una niña padece hambre, sino cuando un martes “negro” de septiembre de 2008 cayó el grupo Lehman Brothers.

Precisamente, esa noción de crisis es un signo más de la colonización de sentido a la que hemos sido sometidos, y de la cual América Latina está tratando de salir. La “crisis” se desata con el estallido de una burbuja inmobiliaria que deja a miles de personas sin su casa. Mientras que su origen podemos buscarlo en ese perverso proceso del capitalismo financiero que causó guerras, invasiones y muertes a fin de no ser regulado por los Estados y las políticas públicas. Y generó –artificialmente– colosales riquezas a partir de transacciones puramente financieras, a expensas del universo de la producción, el trabajo y el comercio de bienes, propios de la economía real que desarrolla a los pueblos. A partir de su caída, esos mismos grupos financieros piden a gritos que el Estado los salve, apelando a los recursos de la Reserva Federal (el “Banco Central” de los EE.UU., que, por lo visto, no era tan “independiente”). ¿De quién son esos recursos? De la misma gente a la que esos grupos le quitaban sus casas.

Una pregunta clave para este desarrollo es: ¿han hecho las cadenas de medios esta interpretación tan simple de la crisis? ¿O han buscado una interpretación tal que los pueblos de los EE.UU. y Europa acepten, pese a algunas protestas, los feroces ajustes que están sufriendo? Ajustes hechos con sus propios recursos, con el objeto de “salvar” al propio sistema que los ha causado.

No puedo dejar de lado en este análisis que para extender ese sistema a sangre y fuego en todo el mundo, y para sostener su liderazgo ecuménico, los EE.UU. han elevado su presupuesto militar a tal punto que supera la suma de

los presupuestos militares de todos los demás Estados “soberanos” del planeta, desfinanciando, de ese modo, las políticas sociales de su pueblo.

Es precisamente a un poder de tal envergadura que el coraje y la visión estratégica de algunos líderes latinoamericanos, encabezados por Lula, Chávez y Néstor Kirchner, dijeron NO, en la Cumbre de las Américas de noviembre de 2005, en Mar del Plata.

Y comenzaron a retomar, a partir de allí, el áspero camino de la autonomía y la descolonización.

¿Qué hubiera sido de América Latina, si en aquella reunión se hubiera aceptado el ALCA, atando nuestra suerte a la del capitalismo financiero de los países centrales? ¿Qué sería hoy de la Argentina si, consecuente con esa autonomía, no hubiera recuperado el manejo estatal de los recursos previsionales, dejándolos librados a la suerte de las bolsas que hoy se desploman?

El Banco del Sur, al cual acaba de adherir por ley nuestro país, se inscribe en este proceso de autonomía y descolonización. A diferencia de otros momentos, no se trata de un acto voluntarista reducido a expresar nuestro histórico “sueño bolivariano”, sino que forma parte de un conjunto de decisiones políticas, económicas y culturales, que le dan consistencia.

Un conjunto de decisiones como la fortaleza de la Unasur para defender los gobiernos populares de Paraguay, Bolivia y Ecuador de sendos intentos de golpe. Para encauzar pacíficamente un grave conflicto, como el que tuvo lugar cuando el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, violó la soberanía aérea de Ecuador.

Un conjunto de decisiones históricas, como el Consejo de Defensa Regional, que en lugar de situar a nuestras fuerzas armadas en el tradicional plano del despliegue de armamentos, las involucra en la protección de nuestros recursos naturales en áreas estratégicas como la Amazonia para la biodiversidad, la zona andina para los minerales, el área del Plata para el agua potable, y el Atlántico para el petróleo. O como el desarrollo de obras de infraestructura para el aprovechamiento de esos mismos recursos para nuestro progreso, en remplazo de largos siglos de depredación.

Un conjunto de decisiones económicas como el desendeudamiento, la acumulación de reservas, la coordinación de políticas monetarias, el alejamiento progresivo del dólar como moneda central de nuestras transacciones intrazona.

Consecuentes con su reclamo de cambio en los organismos financieros multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, los países de la Unasur han organizado el Banco del Sur bajo tres parámetros tan novedosos como democratizadores. La integración de capital será directamente proporcional a la riqueza del aportante; el acceso al crédito será, en cambio, inversamente proporcional a esa riqueza; y “un país, un voto”, sin tener en cuenta su tamaño.

Pero más allá de sus estatutos, se trata de una nueva decisión histórica, que busca encarar nuestro futuro sin el tutelaje que sucesivamente ejercieron los imperios, primero el de la península ibérica, luego el británico y más tarde el estadounidense, y que convirtieron a una América Latina naturalmente rica en la región socialmente más desigual.

El hecho de ser contemporáneos de una etapa como la que vive América Latina nos tienta, a primera vista, a perder la perspectiva de su dimensión histórica. No perdamos dicha perspectiva, defendamos este presente, para que los derechos ciudadanos que derivan de él, transformen estas construcciones en irreversible.

LA BATALLA POR LA AUTONOMÍA POLÍTICA

(Diario Tiempo Argentino, 30.10.11)

El 12 de octubre tuvo lugar un debate sobre la situación de los medios en Venezuela y Ecuador, entre Tomás Abraham, Jorge Lanata, María Pía López y Florencia Saintout. El disparador fue un documental que no tuvo nada de académico. Un simple mensaje opositor a los presidentes Chávez y Correa. Antes de ir de lleno al debate, algunos ejes que enmarcan el lugar desde donde miro la temática.

La interpretación de la crisis. En números muy globales, casi 7000 millones de personas habitamos el mundo, de las cuales 4500 millones viven bajo la línea de pobreza, y 1200 millones –que el día que nacieron eran iguales a mis hijos– hoy padecen hambre. Sin embargo, la puesta en palabra de la crisis comenzó el martes 15 de septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers. Es decir, para la interpretación oficial de las grandes cadenas de la comunicación internacional, el mundo no está en crisis porque haya un ser humano con hambre, sino a partir de la caída de un grupo inversor. La primera pregunta es, entonces: ¿tienen algo que ver con esta interpretación colonizada de la realidad las grandes cadenas internacionales de comunicación? ¿Se trata de una interpretación “independiente” o interesada?

El origen de la crisis radica en una burbuja hipotecaria cuyo estallido dejó sin su casa a miles de personas. El motivo: el límite de inconsistencia de un sistema que independizó la acumulación de capital financiero respecto de la producción y el trabajo, a partir de la ausencia de regulación estatal. Producida su caída, imploran ser salvados por esos mismos estados de cuya regulación renegaron. ¿De quién son esos fondos estatales? De los mismos ciudadanos que acaban de quedarse sin casas. La pregunta se vuelve a imponer: ¿las grandes sociedades de comunicación supuestamente “independientes”, proponen una lectura de este tipo, tan sencilla y elemental sobre quiénes son los salvados y los arruinados por la crisis, y la responsabilidad de cada uno frente a la misma?

Es falso suponer que la meta liberadora de los pueblos pobres de África o América Latina debe ser consumir como en Vancouver.

El subdesarrollo no es el camino al desarrollo, sino precisamente el precio que pagamos 4/5 partes de la humanidad por el desarrollo del que goza el quinto restante. Para equiparar nuestro consumo con el de las ciudades más avanzadas, harían falta los recursos naturales de cinco planetas Tierra, lo cual, al menos por ahora, resulta imposible.

Una vez más, la pregunta: ¿pueden considerarse “independientes” las empresas de prensa de las que forman parte los grandes grupos de nuestro país y nuestro continente, respecto de esta interpretación? ¿O son ellas instrumento de ese capitalismo desenfrenado que no busca cambiar el paradigma económico-financiero, sino precisamente su recuperación?

El papel del estado. El sujeto por excelencia del derecho a la información es el pueblo. Y los medios son vehículos llamados a garantizarlo. Asimismo, el espacio por el que se transmiten las señales es público. El dueño de ese espacio es cada ciudadano. Como cada uno no puede utilizar de modo individual la cuota de espacio público que le corresponde, es necesario que una institución, en representación del pueblo, lo regule. Esa institución es el Estado. El eje conceptual del que quiero partir es que un Estado administrado por quienes gozan de legitimidad popular, lejos de ejercer un papel opresor, libera. Sin que esto signifique la más mínima opresión a las minorías. La conclusión de esta idea es que el riesgo no es que el Estado controle a los medios, sino que lo necesario es que la política se libere de la colonización cultural ejercida históricamente por las grandes cadenas de medios. Desde este lugar conceptual quiero comentar algunos pasajes del debate.

La militancia del periodismo “independiente”. Seis interrogantes sobre el remanido tema del periodismo militante.

1. En un tramo del documental, ante la pregunta de un periodista extranjero, Hugo Chávez alude a la vieja Europa que históricamente nos trató de “sudacas”. No hay que ir demasiado lejos, sólo a un importante libro de Alcira Argumedo –Voces y Silencios de América Latina– para saber que contemporáneamente a la campaña libertadora de Simón Bolívar, un filósofo europeo mucho más estudiado en las currículas tradicionales como George Hegel, o el mismo Emmanuel Kant, expresaban que América Latina jamás se desarrollaría, por cuanto sus habitantes éramos ontológicamente inferiores a los europeos. Lo cito para situarnos en un

contexto mucho más amplio que el mero acoso a la prensa extranjera como lo presenta el documental.

2. ¿No ejerce periodismo militante Mariano Grondona al reivindicar la matanza de indígenas por parte de Julio A. Roca, y traspolarla a la actualidad como contraste de Néstor Kirchner?
3. ¿Hizo mal Rodolfo Walsh en denunciar lo que denunció en su Carta Abierta sobre los jefes militares de 1977?
4. La pantalla partida durante el conflicto por la Resolución 125, entre la presidenta de la República –con toda su legitimidad– y un dirigente rural local que a cada afirmación de la presidenta le decía que no con su cabeza, es decir, equiparar dos legitimidades tan dispares, ¿no se trata de un acto de claro sentido militante, en nombre de un falso periodismo “independiente”?
5. ¿Es periodismo independiente o militante inducir a que los argentinos envidiemos los “buenos modales” que tuvo la última elección presidencial de Chile, y contrastar el saludo fraterno entre Frei y Piñera, con la supuesta crispación o conflictividad de la política argentina? ¿No habría que relacionar ese buen trato de los medios hacia el proceso chileno, con la certeza de que ninguno de los dos candidatos tocaría sus intereses profundos, como por ejemplo el cambio de la matriz elitista del sistema educativo?
6. ¿Es periodismo independiente o militante aquel que titula “Escándalo en EE.UU. porque se decomisó parte de la carga de uno de sus aviones”, en lugar de decir que la Argentina es un país soberano que exige se cumpla la ley? ¿Es periodismo independiente o militante el que titula “Preocupación en Brasil por la extensión de algunas licencias no automáticas a algunos productos”, en lugar de decir que luego de varias décadas nuestro país ha decidido tener política industrial, y para ello debe administrar su comercio exterior? ¿Es periodismo independien-

te o militante enunciar siempre desde el lugar de la contraparte de los intereses argentinos? ¿Tiene algo que ver esta estrategia para inducir la interpretación de los hechos, ejercida históricamente por las cadenas hegemónicas de la comunicación en nuestro país, con la docilidad con que una parte importante de nuestra sociedad vino aceptando las sucesivas políticas de ajuste?

Algunos pasajes del debate. Quiero aludir ahora a algunas intervenciones de Tomás Abraham.

1. “La desmesura está en el poder”, identificando poder con gobierno. Yo, en cambio, creo que los estados, en el proceso latinoamericano presente, plenos de legitimidad popular, están desempeñando un papel mucho más activo que en otros momentos de la historia, en descorder el velo de los verdaderos poderes fácticos permanentes, económicos, financieros y mediáticos, que con toda sutileza modelaron la opinión de una parte muy importante de nuestras sociedades, y crearon así el ambiente propicio para que estas justificaran mansamente las sucesivas políticas de ajuste. Una vez más, el riesgo no es que la política controle, sino que el desafío, es, precisamente, que se autonomicen de los poderes fácticos permanentes.
2. “Los medios públicos son pagados por todos los ciudadanos.” Quisiera debatir públicamente con él, y en ese debate le demostraría que los medios privados también son sostenidos por todos los ciudadanos. Y que así como la mentada “publicidad oficial” puede ejercer alguna influencia, en mucho mayor medida la ejerce la publicidad privada.
3. “Vivimos bajo el fascismo” (sic). Debería saber Abraham que cuando se vive bajo un régimen fascista, no se puede pronunciar esa palabra. El solo hecho de que la diga con absoluta libertad contiene la negación de lo que afirma. Lo dijo luego de acusar a nuestro gobierno de construir la idea de trincheras, pero no se privó de expresar, de inmediato, para justificar su extremismo: “yo llevo los argumentos hasta el límite”.

Por último, y lo digo con pena, un comentario sobre dos afirmaciones de un Jorge Lanata tan diferente del que yo conocí. La primera, cuando dijo, aludiendo a su pasado: “nacimos peleando”. Es cierto, debiera recordarlo. La segunda, cuando dijo –con un simplismo demagógico absoluto– que es “inmoral” tener fútbol para todos si antes no tenemos comida para todos. Lanata sabe mucho mejor que yo, que la posibilidad de tener fútbol depende de menos decisiones políticas, y menos complejas, que lo que demanda en un país como el nuestro, recuperar el manejo de variables macroeconómicas, reconstruir el Estado, promover inversiones, o modificar la cultura empresaria. Inmoral fue –entre otras cosas– que nos acostumbráramos a ver dos señales de cable enfocando la tribuna en lugar del partido. Y, el solo comprobar la alegría de tantos compatriotas humildes que hoy tienen la posibilidad de compartir los partidos con sus hijos en lugar de abarrotarse en las vidrieras de las casas de electrodomésticos, me exime de explicar por qué no es inmoral el Fútbol para Todos.

CON LOS ESTADOS UNIDOS, LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE

(Diario Tiempo Argentino, 14.11.11)

Se autoproclamaron partidarios de la libertad económica. Pero, dependientes del capital y la técnica inglesas, los primeros colonos estadounidenses levantaron barreras aduaneras para proteger sus nacientes industrias y salir a competir. Llegados de una cosmovisión insular, que había roto con la realeza británica y renunciaba a todo retorno, el vasto y abierto espacio geográfico constituyó un diferencial positivo para el desarrollo de los nuevos pobladores que a la postre fundarían los Estados Unidos.

Una visión asociada a la lejanía extrema de los confines, a la inexistencia de límites, combinada con la ética protestante del ascetismo de la prosperidad, ayudó a construir y sublimar, en lo más profundo de la memoria del pueblo estadounidense, la idea de tener un “destino manifiesto”, una responsabilidad mesiánica frente a la Humanidad, una misión esencial de salvaguardarla del peligro. Por eso, cada rincón del planeta es “su” preocupación, atañe a “su”

seguridad. Para ellos, el mundo les debe el haberlo liberado del nazismo, luego del comunismo, y ahora, del terrorismo internacional. Tienen algunos argumentos a favor, y fuerzan otros, como para sostenerlo.

En honor a ese “destino”, y en nombre de aquella libertad, crearon la doctrina del garrote, invadieron países endeudados, dividieron Colombia para controlar el canal, balcanizaron la América Central y el Caribe, financiaron golpes de Estado y dictaduras atroces, asesinaron a líderes populares, estallaron dos bombas atómicas. Si bien el pueblo elige a los jueces, fiscales y comisarios de cada condado, al mismo tiempo su presupuesto militar supera a la suma de los presupuestos militares del resto del mundo. Son, a la vez, Atenas y Esparta. En los EE.UU. conviven, como dicen Hardt y Negri, la república y el imperio romanos.

Fueron y son imperialistas. Está en su génesis nacional, y, hasta ahora, no han puesto en crisis ese “destino manifiesto”. Ningún presidente, por mejores intenciones que lo guíen, parece poder abstraerse de ello. En ese contexto, el presidente ocupa un lugar, sólo un lugar, en la mesa del poder. Allí están, como miembros permanentes, el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado, los petroleros, los bancos, los fabricantes de armas. El presidente puede ser uno de ellos, como el caso de Bush. O proceder de intereses diferentes, como Obama, más afín al clan Kennedy y las corporaciones de Chicago, un tanto más autónomas de aquellos conglomerados colosales. Pero no puede salirse del esquema general. De hecho, Bill Clinton no fue lo mismo que Reagan y Bush. Ni lo hubiera sido Al Gore, de haberse respetado el pronunciamiento de los votantes en 2000. Puede haber presidentes más o menos afables, pero todos imperialistas.

Excede a estas líneas juzgar si Obama fue sincero en su propósito de reformar el sistema de salud, en su intento de cerrar Guantánamo o de dialogar para reconocer al Estado palestino. Puedo, sí, disentir con la debilidad con que retrocedió ante las presiones. Pero, de uno u otro modo, para cumplir con aquel “destino manifiesto”, los EE.UU. necesitan el petróleo de Asia y el control geopolítico del planeta. En consecuencia, harán todas las guerras que hagan falta para lograrlo.

Nuestra responsabilidad, como países y culturas soberanas que luchamos por un mundo más justo, más equilibrado en la balanza del poder –para no mencionar el objetivo de máxima, que es el remplazo del capitalismo como sistema civilizatorio– es justamente, construir las alternativas fácticas y conceptuales de poder, necesarias para impedir que aquel objetivo estratégico de los EE.UU. prosiga con la dominación, el sojuzgamiento y el empobrecimiento de nuestros pueblos.

Y América Latina afronta un marco de condiciones favorables para ello, que no encuentra precedente histórico.

Condiciones tales como la legitimidad social y política de sus presidentes, mejoras en el comercio internacional de nuestros productos, menor presión extorsiva del sector externo de nuestras economías, crecimiento interno, reducción de la pobreza, acumulación de reservas.

Frente a esto, nuestro principal desafío como región es preservar y profundizar nuestra autonomía de criterio y acción.

Lo hicimos con la negación del ALCA, la creación de Unasur, el rechazo a los intentos de golpe de Estado, la solución pacífica de nuestros conflictos limítrofes, la defensa de nuestros recursos naturales, la integración energética, la coordinación de políticas macroeconómicas, el proceso de desdolarización del comercio regional.

El presente cuadro de situación sitúa a nuestra presidenta en mejores condiciones relativas para afrontar ese diálogo: legitimidad electoral reforzada, buenos números en nuestra economía, entorno regional favorable. Y al presidente de los EE.UU. en medio de inocultables complicaciones: reelección no asegurada, crisis financiera, pérdida de popularidad interna e internacional.

De todo esto, se deduce que la relación con los EE.UU. no debe subestimarse, pero tampoco define por se nuestro destino, como lo han pensado históricamen-

te los que interpretan desde el “liberalismo” nuestra realidad. No tendríamos por qué ausentarnos de todo un andamiaje de instituciones internacionales contra la trata de personas, el lavado de dinero y otras amenazas. Pero conscientes, eso sí, de su insuficiencia para terminar con la raíz de esos problemas, que son la desigualdad estructural del presente sistema de acumulación. No tendríamos por qué no dialogar amablemente, lo cortés no quita lo valiente. Conscientes, eso sí, de que ese diálogo nada tiene que ver con hociocar o rendirse.

Hay muchos temas de agenda que podrían mejorar la relación bilateral, pero ninguno de ellos empalidece la denuncia troncal de Cristina Fernández de Kirchner ante los Foros Internacionales, de la perversión de un capitalismo financiero intrínsecamente injusto. Denuncia que está en línea con la posición argentina de los últimos años, y que fue requisito de nuestra recuperación. A partir de nuestra independencia del FMI y de los mecanismos ortodoxos de financiamiento, y su remplazo por el desarrollo del mercado interno y la autonomía regional, la Argentina derribó el mito fundante del sistema internacional vigente, según el cual quien rompiera las reglas desaparecería de la faz de la Tierra. No sólo no desaparecimos, sino que a partir de esa transgresión, iniciamos el despegue, y somos hoy el país con mayor crecimiento de Occidente.

En conclusión, así como en su gira latinoamericana no fue mayormente significativo que Barack Obama no viniera a la Argentina, tampoco creamos que el encuentro en Cannes puede ser determinante para nuestro futuro. “Ni aquello era el infierno, ni esto es el Edén”, publicó Martín Granovsky por estos días.

La derecha argentina, las corporaciones mediáticas, una vez derrotadas políticamente, han fijado la nueva fase de su estrategia a partir de las 18:01 del domingo 23 de octubre. Y es forzar al gobierno popular a reingresar a la ortodoxia económica y al FMI, porque representan los intereses de ese universo financiero, causante de la crisis mundial. El primer mundo, sostuvo Cristina en su campaña, es la felicidad de nuestro pueblo. Y confío en que es precisamente eso, y no el protocolo internacional ni el reingreso a la ortodoxia financiera, lo que definirá su política de los próximos años, a partir de su recientemente renovada legitimidad.

MALVINAS: EL DERECHO Y EL PODER

(*Diario Tiempo Argentino*, 02.02.11)

La cuestión Malvinas contiene dos aspectos estrechamente relacionados. La legitimidad del derecho y la construcción del poder necesario para que ese derecho legítimo se concrete.

De lo primero no caben dudas. Pocas causas son tan compartidas prácticamente por todos los argentinos, sin distinguir condición social, poder económico o bandería ideológico-política, como que las Malvinas son argentinas. Y algo no menos importante: que no existe otro camino hacia nuestro derecho que no sea la vía pacífica y diplomática.

Afirmar esto lleva, en primer lugar, al reconocimiento de los soldados que ofrendaron su vida, no sólo en el teatro de operaciones, sino durante todos los años posteriores a 1982. Respecto de ellos, de sus familias, y de quienes combatiaron y no perdieron la vida, nunca será suficiente la reparación que nuestra sociedad pueda hacer, luego de la indiferencia que sufrieron durante tanto tiempo.

En segundo lugar, la condena de la aventura militar. Aquel episodio constituyó un marcado retroceso para la disputa de soberanía. Durante las décadas precedentes a 1982, hubo mejoras significativas en la relación con los isleños, lo que ofrecía condiciones mucho más propicias para la conversación diplomática.

No obstante, el Estado democrático que se fue construyendo trabajosamente a partir de 1983 dio fuertes señales reparadoras de nuestro sistema jurídico-político, de modo que ya no cabe el argumento de que se trató de una ocupación militar por una dictadura, usado por los británicos para devaluar nuestro reclamo. En este sentido, la instrucción de nuestra Presidenta de publicar el informe Rattenbach, es un claro mensaje que extiende la política de verdad y memoria respecto de la dictadura, también para esto.

Tampoco cabe la autodeterminación de los habitantes de las islas, pretendida por el premier David Cameron, en un ficticio rapto de humanismo. El

derecho de autodeterminación no le corresponde a una población como la de las islas, implantada por un acto de fuerza insistentemente denunciado por nuestro país desde 1833, sino a aquellos pueblos autóctonos que pugnaron por romper el sometimiento impuesto por las potencias coloniales, entre las cuales el Reino Unido ha sido la más poderosa de la historia.

Fue, precisamente, el Imperio Británico quien denegó sistemáticamente el derecho a la autodeterminación a pueblos como los de la India, Pakistán y numerosos países africanos, en sus luchas por la independencia.

En este sentido, el proyecto de Constitución política de la comunidad europea, surgido del Tratado de Lisboa de 2009, que finalmente no pudo concretarse por el rechazo plebiscitario de algunos de sus miembros, designa explícitamente a Malvinas como territorio de ultramar bajo soberanía británica. La propia denominación ‘territorio de ultramar’ es una expresión anacrónica que remite mucho más al sesgo colonialista de los siglos XVIII, XIX y primera mitad del XX, que a la etapa emancipatoria de la última parte del siglo XX, que trajo la independencia de numerosas ex colonias de Asia y África, la mayoría de ellas bajo el yugo de la corona británica.

Como reiterara nuestra Presidenta en la última cumbre del MERCOSUR en Montevideo, nadie puede esgrimir argumentos de soberanía sobre un territorio situado a 14.000 millas de la metrópolis. Eso no es otra cosa que puro colonialismo. La denuncia de David Cameron de que quien tiene una actitud colonialista es la Argentina, no hace más que poner aún más en ridículo la posición de su gobierno.

Las Malvinas son, definitivamente, argentinas. Ahora bien, una pregunta pertinente sería: ¿por qué, habiendo ganado todas las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en la OEA (por amplias mayorías y en algunos casos por unanimidad), esos triunfos diplomáticos no lograron obligar al Reino Unido a negociar soberanía, en

cumplimiento de esas disposiciones del derecho internacional? Y la respuesta es que la mayoría expresada en número de países no se corresponde con el poder real que se necesita para materializar el derecho que nos asiste.

La siguiente pregunta sería: ¿ese desbalance entre la legitimidad del derecho y el poder real para ejercerlo, es necesariamente estático, permanentes e irreversible? La respuesta es: categóricamente no. Pero, para trasladar esa justicia intrínseca del derecho a la posibilidad efectiva de materializarlo, esto es, obligar a Gran Bretaña a discutir soberanía, la respuesta la tiene básicamente la capacidad estratégica que demuestre la política exterior argentina y la unidad latinoamericana. Y en esta dirección, la Argentina y América Latina estamos en una posición claramente mejor que la que tuvimos históricamente.

Hasta no hace mucho, esa Europa que reivindicaba para Gran Bretaña la soberanía de Malvinas como territorio de ultramar, era un continente política y económicamente unido, con pueblos socialmente cohesionados, alto desarrollo industrial, capacidad exportadora, una fuerte alianza con los EE.UU. y una gran influencia en la agenda internacional. Pero ha sido tal el poder predatorio del capitalismo financiero sobre Europa, que hoy ha perdido aquella fortaleza de sus sistemas económico y político. El recalentamiento discursivo del gobierno británico coincide con el desplazamiento de Gran Bretaña como 6ta. economía mundial para ubicar en ese lugar a Brasil, con el mayor índice de desocupación de los últimos 30 años, y con un tremendo ajuste social de sus cuentas.

Mientras aquella Europa estaba unida y poderosa, América Latina vivía narcotizada bajo los efectos de las políticas neoliberales, desunida política y económicamente, y entregaba la renta social de sus recursos, en un duro proceso de privatizaciones y desarticulación de sus poderes estatales.

Hoy, paradójicamente, América Latina tiene gobiernos de claro signo popular, con liderazgos fuertes y muy legitimados socialmente, y está en pleno proceso de recuperación económica e integración política. Esto le da mayor capacidad para incidir en la agenda internacional, y crear un polo de atracción de tal envergadura, que gobiernos históricamente hostiles a la posición argentina -como el chileno- en esta etapa han decidido respaldarnos.

Un factor central de este proceso es la conciencia social. Reivindicar Malvinas no es una formalidad, así como no lo es que el Reino Unido destine un cuantioso porcentaje de su presupuesto de defensa para la custodia de las Islas. Se trata de nuestros recursos estratégicos. Por eso, el valor que hoy tiene la solidaridad en la defensa de Malvinas, mañana lo tendrá para la Amazonia y su biodiversidad, para nuestros acuíferos, nuestros yacimientos de gas y petróleo, para el alimento orgánico que descansa en la plataforma de nuestros mares nacionales. Y esto no es una causa individual, sino latinoamericana.

En definitiva, la actual situación no ha modificado la legitimidad sustancial de la causa argentina, sino la relación de fuerza política entre las partes.

Nuestra capacidad de influir conceptualmente en la agenda internacional, y a partir de ello avanzar en la cuestión Malvinas, está fuertemente ligada a la profundización del proceso de integración regional. La consolidación de los gobiernos populares y de las estrategias de independencia financiera, la intervención estatal en políticas de inclusión social, la resolución pacífica de los conflictos limítrofes pendientes, la diversificación de productos y destinos a exportar, la incorporación de valor agregado, el desarrollo de nuestro mercado, tanto interno como regional, la integración física y en obras de infraestructura productiva, el factor tecnológico, las estrategias comunes de defensa, constituyen el camino para equiparar la legitimidad medular y jurídica de nuestra demanda, con el poder necesario para llevar ese derecho al plano de lo concreto.

DIPLOMACIA Y SOBERANÍA INTEGRAL

(*Revista Debate*, 30.03.12)

La cuestión Malvinas se inscribe hoy en un marco general de políticas tendientes a rescatar la idea de soberanía desde una perspectiva integral, a diferencia de la dictadura, que pretendía reivindicar lo territorial al mismo tiempo que violaba la soberanía política y popular, y entregaba la soberanía económica. Decisiones políticas como el control de cambios, la administración del comercio exterior, la recuperación de la autoridad estatal para orientar el crédito y la fuerte intervención estatal sobre áreas petroleras de explotación privada, ponen a nuestro país en una situación sustancialmente mejor que en otros momentos históricos. Imaginemos cómo mermarían nuestras posibilidades, si padeciéramos hoy la presencia semanal de una misión del Fondo Monetario Internacional para monitorear nuestra economía. O si tendríamos el mismo respaldo de los pueblos hermanos, si América Latina estuviera hoy en el ALCA.

Es decir, no hay soberanías parciales. No hay posibilidades de ser fuertes en Malvinas, y débiles en todo lo demás: se construye fortaleza como país, y eso ayuda en todos los aspectos, incluido Malvinas.

Un segundo punto lo constituye el hecho de que nuestra contraparte es nada menos que el Reino Unido, la potencia colonial más poderosa de la historia. Su dominio sobre territorios como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Kenia, Nigeria o Tanzania (por poner sólo unos ejemplos), y la extensión que tuvo el Commonwealth como factor de dominio financiero, sumado a su ligazón estratégica con los Estados Unidos, nos obligan a desistir de toda pretensión facilista o de corto plazo, y proseguir con una estrategia profunda, inteligente, abarcadora.

El Reino Unido tiene, además, el dominio de hecho sobre el territorio en disputa. Para quebrar ese status quo, se requiere una continuidad de políticas

que erosionen sus intereses. Nadie se mueve, y menos una potencia con la experiencia de Gran Bretaña, de una situación que controla de hecho, si no siente la amenaza de que un daño le será infringido. Es aquí donde adquiere un gran peso específico la negativa de los países del MERCOSUR a aprovisionar a los buques y aeronaves británicas en sus puertos y aeropuertos, así como el plan de acciones legales ante la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en el área de las Islas.

El Reino Unido ha planteado la cuestión Malvinas en la dimensión europea. En efecto, el anexo II del Tratado de Lisboa –firmado en 2007 y finalmente pospuesto– equipara la situación de Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur a la de los Estados asociados a la Unión Europea. Esto lleva a la conclusión de que la estrategia argentina debe, por lo tanto, llevarse también al plano regional, en un doble plano. Un plano específico, que tiene que ver con las posibles sanciones económicas a los capitales británicos, que dependerá de la ponderación que haga el gobierno argentino sobre la correlación de fuerzas y los complejos intereses en juego. Y un plano general donde la eficacia de UNASUR, el Banco del Sur, la búsqueda de una unidad monetaria que autonomice el comercio regional respecto del dólar, el Consejo Sudamericano de Defensa, la integración en infraestructura, energética y productiva, y las posiciones comunes en foros internacionales como el G-20, permiten a la región un grado creciente de incidencia en la agenda internacional. La región debe entender la defensa de los recursos estratégicos que descansan en el Atlántico Sur, con la misma jerarquía y solidaridad con la que debe actuar sobre los yacimientos de gas de Bolivia, la biodiversidad de la Amazonia, el petróleo de Venezuela, las reservas de agua dulce de la cuenca del Paraná y los yacimientos petroleros de la costa atlántica, recientemente descubiertos.

Por último, presentar una agenda para la negociación bilateral con Gran Bretaña, de modo de reafirmar que el lugar de la Argentina es el de la paz, la diplomacia y la racionalidad, frente a la sinrazón y la desmesura que caracterizan a la posición británica de los últimos tiempos. Una agenda, que, de acuerdo

con el derecho y las resoluciones mayoritarias de la comunidad internacional, contemple los siguientes puntos:

- Una firme y rápida política de desmilitarización del área Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus aguas circundantes.
- Un régimen de gobierno local y sistema electoral que contemple los intereses de los actuales pobladores.
- Un acuerdo de ciudadanía que contemple el origen británico de sus actuales pobladores y los haga portadores de todos los derechos inherentes a la ciudadanía argentina.
- Un acuerdo sobre el sistema de salud y educación de las Islas.
- Un consorcio público-privado con control del Estado nacional, para la exploración y explotación de los recursos naturales estratégicos.
- La creación de un Área Aduanera especial y de la Zona Especial de Cooperación comercial y científico-tecnológica entre el continente y las Islas.
- La extensión del régimen de promoción industrial.
- Un convenio de cooperación e intercambio cultural entre las Islas y el continente.
- La extensión de los acuerdos y régimen de preferencias comerciales con MERCOSUR y ALADI.
- Un acuerdo sobre la toponimia o denominación de los lugares públicos de las Islas.
- Así, la sangre de los soldados caídos en las Islas adquirirá un significado más intenso aún, que el que tiene para nosotros desde 1982.

PLEBISCITO ISLEÑO, OTRO ACTO DE DEBILIDAD

(*Diario Tiempo Argentino*, 13.06.12)

Desde el más estricto criterio de libertad personal, nadie puede negar a los isleños el derecho a un pronunciamiento como el que acaban de anunciar para el primer semestre de 2013, respecto de pertenecer o no al Reino Unido.

Lo que no tiene ese derecho es valor jurídico para ser presentado a la Comunidad Internacional, como sí lo tendría la declaración de independencia de un pueblo sometido o los referéndum que periódicamente tienen lugar en la provincia francoparlante de Quebec, en Canadá, o en Puerto Rico, en pos de sus respectivas independencias.

En su primera disposición transitoria, la Constitución argentina de 1994, al tiempo que ratifica de manera imprescriptible nuestra soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur, garantiza los intereses de los isleños. Nadie podría obligarlos a hablar en castellano, o cambiar de religión, a dejar de tener como referencia a la Reina o a simpatizar por un club de fútbol argentino. Pero eso no tiene valor jurídico alguno respecto de la disputa de soberanía entre dos estados, la Argentina y el Reino Unido, porque se trata de planos de análisis absolutamente diferentes. Tienen derecho a expresar libremente su voluntad, no a decidir qué Estado debe ejercer la soberanía sobre el territorio que habitan, por cuanto esto último se rige por reglas del derecho internacional que amparan la posición de nuestro país. La autodeterminación es un derecho de los pueblos sojuzgados respecto de las potencias coloniales que los oprimen. En el caso de Malvinas, la potencia colonial, es el Reino Unido, que ocupó por la fuerza nuestro territorio hace casi 180 años e implantó su propia población, de la cual descienden los actuales habitantes. Por eso el caso Malvinas es tratado como un acto de colonialismo por el Comité de Descolonización. Por lo tanto, si a alguien correspondiera el derecho de autodeterminación sobre su territorio, es a la Argentina, por haber sido el

mismo violado por una potencia colonial. Seríamos nosotros los depositarios del derecho de autodeterminación sobre nuestro territorio, aunque se trate de un área parcial del mismo. Imaginemos la legítima reacción de cualquier país soberano, frente a una momentánea violación de su espacio aéreo. Cuánto más debe reaccionar un país cuyo territorio es ocupado de manera permanente desoyendo el mandato de la comunidad internacional expresado en sucesivos pronunciamientos de la Asamblea de Naciones Unidas, de su Comité de Descolonización, de la Unasur, de la CELAC, y de tantos otros foros internacionales. Este 14 de junio, mientras Cristina Fernández de Kirchner se presentará ante un órgano del máximo foro internacional, un enviado del Foreign Office –luego de rechazar una invitación del canciller argentino a visitar nuestro país- arribará a las Islas, cuya población militar rotativa procedente de la Armada Real, iguala prácticamente a la población civil estable. De un lado, la diplomacia y el derecho, del otro, la prepotencia, el militarismo y la desmesura.

Todas estas circunstancias han puesto, por primera vez en muchos años a la Argentina en el marco de América Latina toda, en el lugar de la sensatez y la razón. A la histórica legitimidad de nuestro reclamo, la complementa ahora una mucho mejor reputación internacional que la de nuestra contraparte. La militarización, la negativa al diálogo, y este último plebiscito al que parece acaban de convocar, además de constituir sendas expresiones de debilidad jurídica, colocan al Reino Unido, ante los ojos del mundo civilizado, en el lugar de la sinrazón y la prepotencia. Perserverar en esa diferencia tan marcada de actitud, adquiere, junto con las demás estrategias nacionales y regionales muy activas, un inestimable valor con el devenir del tiempo.

PARA IMPEDIR QUE EN PARAGUAY GANE EL GRUPO “A”

(*Diario Tiempo Argentino*, 26.07.12)

Paraguay es un ejemplo de lo grave que sería reducir la calidad institucional al libre albedrío del Parlamento.

Un golpe puede ser exclusivamente militar, cívico-militar o cívico-institucional. En este caso se trata de un golpe eminentemente institucional, por cuanto la destitución de Lugo no era un reclamo presente en las calles, sino que fue perpetrado por la corporación política del Paraguay en connivencia con los poderes oligárquicos, fundamentalmente terratenientes.

Es todo un desafío no identificar exclusivamente la idea de calidad institucional (tantas veces esgrimida por estos grupos) con la institución parlamentaria. Los hospitales gratuitos para los pobres, el reconocimiento de los sin tierra y los sin techo del Paraguay, o la denuncia sobre la concentración de la tierra, son también instituciones planteadas por el presidente Lugo. Inclusive, son instituciones socialmente más fuertes que la institución parlamentaria en la defensa de los intereses de las mayorías populares.

A diferencia de otros países de la región, la renovación que implicó el voto a Lugo no alcanzó para modificar la composición de su Parlamento, sino que este representa la continuidad de aquella componenda histórica entre el sistema político y el sistema de poder económico del Paraguay. Se trata de un sistema de tal intermediación entre el líder y el pueblo que lo apoya, que termina expresando mucho más la voluntad de los poderes fácticos que la voluntad popular y, en este caso, el Parlamento se desempeñó como un instrumento del poder y no del pueblo.

Todo esto reafirma la importancia que reviste para esta etapa de América Latina, discutir fuertemente sobre el poder y sobre qué significa verdaderamente la calidad institucional desde la perspectiva de las mayorías postergadas.

Y enfatizar en el eje que divide a los grupos de poder, respecto de los gobiernos populares y el debate político como las herramientas principales con las que un pueblo cuenta para empardar la disputa. Los duros litigios mediáticos y los sucesivos intentos destituyentes que frecuentan la escena política argentina (para relacionar ambas situaciones), tienen que ver, precisamente, con la irritación que causan gobiernos como el de Lugo y el de Cristina, que decidieron ser irreverentes con esos grupos, en nombre de los intereses populares, por décadas postergados.

No podemos dejar que ninguno de nuestros conciudadanos caiga en la ingenuidad de que se trata de una disputa ajena porque, por el contrario, es la batalla central por donde pasa la continuidad de un modelo popular o el regreso a la dominación de los grupos económicos.

Por último, celebrar la decisión del presidente Lugo de convocar a una resistencia pacífica de modo de vencer la pasividad inicial. Si por temor a una masacre, la alternativa fuera el repliegue popular, dejaríamos el camino allanado a los enemigos del pueblo y estaríamos negando la enorme gama de posibilidades de resistencia que brinda la política como instrumento del pueblo para hacer valer sus legítimos derechos.

AMÉRICA LATINA DEBE DECIDIR SU FUTURO

(Diario Tiempo Argentino, 3.11.12)

Cada vez que se acerca una elección presidencial en Estados Unidos surge la pregunta sobre la conveniencia para América Latina de un triunfo demócrata –en este caso, la reelección de Barack Obama– o el de un candidato republicano, en esta oportunidad, Mitt Romney.

A tales fines, es relevante recordar que la historia de relaciones entre la política estadounidense y América Latina ha sido siempre intensa, y tiene en su haber un extenso y tortuoso camino, ya sea que el presidente fuese demócrata o republicano. Por lo tanto, al intentar establecer una suerte de corre-

lación entre hechos/políticos de aquel país hacia nuestra región y la pertenencia partidaria del presidente de los Estados Unidos, lo único que surge es una imagen borrosa que por momentos impide distinguir el color partidario de quien ocupaba el sillón presidencial. Algunos ejemplos: John F. Kennedy, la alianza para el progreso y el embargo a Cuba; Richard Nixon y la caída de Salvador Allende; Gerald Ford y el golpe en Argentina; Ronald Reagan y Bush padre con la Revolución Conservadora y el Consenso de Washington; Bill Clinton y los prolegómenos del ALCA; George Bush y los intentos de golpes en Bolivia, Ecuador y Venezuela y Obama en los de Honduras y Paraguay. El plano económico resulta, incluso, más complejo: NAFTA, Subsidios a la Agricultura, ALCA y Tratados de Libre Comercio, impulsados por presidentes de ambos partidos. Y todo en medio de medidas extra-continenciales como las guerras balcánicas y las invasiones a Medio Oriente, sin contar con la anuencia de la ONU.

El actual contexto doméstico de crisis económica interna, así como la crisis financiera de la zona euro y el escenario inestable en Oriente Medio, Irán y Siria, hacen que América Latina no esté en el epicentro de las prioridades de ambos candidatos; incluso a pesar del creciente peso electoral de los migrantes latinos en la política estadounidense.

Aunque ello no obsta para que desplieguen todo su potencial a través de las políticas expansivas del Comando Sur, la cuña que les abre el golpe institucional en Paraguay y su separación temporaria del Mercosur, el control que ejercen sobre el Atlántico Sur a través de la presencia británica en Malvinas y sus bases antárticas, la vigencia del Plan Colombia, etcétera.

Queda en evidencia, pues, que ya no es tan relevante quién sea el ganador de las elecciones del próximo martes, sino cuál será la actitud que tendrá la región respecto a un Hegemón ocupado en frentes diversos: complacencia o autonomía.

Ante un contexto internacional problemático, América Latina ha adoptado durante la presente década un accionar autónomo orientado a encontrar solu-

ciones propias a nuestros problemas internos: Unasur y la reunión de la CELAC son una clara muestra en este sentido. De este modo, ya sea con Obama o Romney, la responsabilidad quedará en manos de nuestros países de seguir apostando por un destino regional común, lejos del alcance de designios externos.

LA EMANCIPACIÓN COMO UN PROCESO HISTÓRICO

(Diario Tiempo Argentino, 15.12.12)

El primero es que el proyecto Socialismo del Siglo XXI viene de derrotar a Henrique Capriles Radonski, hace solo un mes y medio, por casi diez puntos porcentuales y con una participación del 80% del electorado. Y todo indicaría que, en las elecciones regionales del próximo domingo, el candidato chavista Elías Jaua estaría desalojando a Capriles de su cargo de gobernador del Estado de Miranda, y la fuerza de Chávez ganando en la mayoría de las 23 regiones en disputa.

Nada está dicho, pero resultaría llamativo que el electorado venezolano vaya a producir un giro político e ideológico de 180 grados, apostando a una alianza fragmentada, con pocos puntos en común más que ser 'oposición'. Más bien, la mayoría de la sociedad venezolana parece haber legitimado la continuidad de un proceso político, económico y social. Un proceso caracterizado por una profunda sensibilidad hacia los más débiles, una intensa recuperación de la intervención del Estado y una fuerte impronta de unidad regional. Demonizado, al igual que las experiencias semejantes de los gobiernos populares de América del Sur, por lo que podría llamar 'la internacional del poder'. No en vano, miles de cronistas internacionales viajaron a Venezuela con la intención de regresar con la noticia de una derrota de Chávez, o bien con la excusa del fraude si el resultado hubiese sido más ajustado. En el caso de nuestro país, el grupo hegemónico procuró tapan la victoria contundente del presidente de Venezuela, con un supuesto 'secuestro' de su cronista-comediante estrella, hecho tan inverosímil que no mereció mayor cobertura.

Venezuela es uno de los principales proveedores de petróleo del mundo, y, con 297 mil millones de barriles, acumula una de las mayores reservas. De los 19 millones de barriles/día que los EE UU consumen, 6 millones provienen de Venezuela.

Históricamente, su relación comercial estuvo dominada por capitales estadounidenses, que se quedaban con la parte sustancial de esa renta. Hoy la ecuación ha cambiado en favor del Estado Nacional y la redistribución social. El papel de Hugo Chávez fue preponderante para el rechazo al ALCA, así como para la formación de nuevas y autónomas instituciones monetarias y financieras para la región.

En un contexto en que los EE UU tapizan de bases militares las zonas con mayor densidad de recursos energéticos, y no dudan en apoyar dictaduras en tanto garanticen sus negocios, nadie podría dudar que es su pérdida de control sobre la renta petrolera de Venezuela, y no su preocupación por alguna formalidad “demoliberal”, lo que los ha llevado a demonizar a Chávez. Y lo que ha llevado, a su vez, a la mayoría de los líderes de la región, a unirse para defender a ultranza este proceso.

La nominación del vicepresidente Nicolás Maduro tampoco parece tener grandes repercusiones hacia el interior de los movimientos políticos y sociales que conforman el proyecto del socialismo del Siglo XXI. Ninguno integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –incluido el presidente de la Asamblea Nacional, número dos del Partido y hombre de confianza de Chávez, Diosdado Cabello– parecería cuestionar esa decisión. Toda especulación sólo podría adjudicarse a los deseos del poder opositor.

Sería imposible comprender procesos tan profundos como los que hoy vive nuestra región, escindidos de la férrea voluntad de sus líderes. Pero la legitimidad de esos líderes reiteradamente plebiscitados, confirmados y relegitimados, viene de la voluntad de cambio de nuestros pueblos.

Así como es imposible separar los contenidos de los liderazgos, también sería imposible sostener que estos contenidos sólo pueden sustentarse en liderazgos personales. Si así fuera, estaríamos desdeñando la voluntad de cambio de los pueblos que los legitimaron. Confío en la recuperación del querido Hugo Chávez, porque su agudeza y su personalidad son insustituibles. Si así no fuera, el único camino seguirá siendo, de todos modos, la profundización de este presente emancipador de América Latina y el Caribe.

EL PODER POPULAR Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA

(Diario Tiempo Argentino, 24.8.12)

Entre otros cambios de paradigmas de esta etapa argentina, está la recuperación de nuestra dimensión latinoamericana, o, si algunos prefieren, sudamericana. La ampliación del Mercosur como factor de integración básicamente aduanera, las cumbres de Unasur como decisor político, la negativa al ALCA, el Banco del Sur y el Consejo de Defensa Regional, la coordinación entre sus Bancos Centrales, la creación de una unidad de valor que rijan el intercambio regional con prescindencia del dólar, enmarcan un proceso de persistente emancipación respecto del tutelaje económico y político al que fuimos históricamente sometidos. No sólo por parte de los EE UU, sino también de los conglomerados transnacionales económicos y financieros. Siempre de la mano de gobiernos serviles, o cuanto menos débiles, y de conocidas oligarquías internas.

Al calor de estas políticas comunes para alcanzar la recuperación de la propiedad pública de los recursos naturales y energéticos, o la integración en infraestructura, o la conectividad para el desarrollo, surge la necesidad de consolidar el proceso desde lo institucional. Se trata de batallas muy duras, de una dureza proporcional a la magnitud de los intereses afectados. Cuando se trata de romper una estructura histórica de concentración y desigualdad, para reemplazarla por una nueva matriz igualitaria en los campos de la inversión, la producción, la comercialización y la distribución de las riquezas y los ingresos, lo que se disputa es, sencillamente, el poder.

Hoy no parece haber condiciones en el mundo para remplazar el capitalismo por el marxismo, ya sea desde su versión ortodoxa, como de sus adecuaciones sobrevinientes. Pero sí de denunciar los límites, trampas y contradicciones de la “globalización”.

Sus injusticias, las heridas al medioambiente, la concentración morbosa de la riqueza, el empobrecimiento masivo. Y, finalmente, la reciente crisis ¿financiera? que azota a las zonas más desarrolladas. Lo que sí parece viable –y necesario– es profundizar la regulación de los mercados que marca el presente de muchos de los gobiernos sudamericanos, a partir de su compromiso con los sectores históricamente más desprotegidos.

Políticas que han ampliado cuantitativa y cualitativamente el universo de los sujetos involucrados en los procesos de cambio. No sólo desde su simple adhesión, sino desde su militancia, desde la organización social y sus crecientes responsabilidades de gobierno. Cuando una etapa incorpora más sujetos, cuando esos sujetos discuten más temas, y cuando esos temas son cada vez más importantes, estamos ante la ampliación de la Democracia. Es decir, el proceso sudamericano está incorporando la dimensión social, a la noción clásica de la democracia política. Tomemos como ejemplo a la Argentina. Si trazamos una línea de tiempo de nuestro proceso político a partir de 1983, veremos que se han seguido todos los pasos institucionales. Tanto en la entrega anticipada de Alfonsín a Menem, como las sucesiones de De La Rúa y Duhalde, se cumplió lo ordenado por la Constitución. Ahora bien, si trazáramos en paralelo otra línea de tiempo del proceso socioeconómico, veremos que, mientras se cumplía formalmente la ley, cuestiones fundamentales como el endeudamiento, la desocupación y la pobreza, sufrieron caídas estructurales. Esto indica que, sin perjuicio de la importancia de la democracia política, esta no asegura per se la prosperidad ni la igualdad, sino que, inclusive, puede deteriorarlas drásticamente. Es decir, está pendiente completar la democracia política con la democracia económica y social.

No hay verdadera democracia cuando el pueblo vota, sino cuando el pueblo decide.

Y, en etapas como el actual proceso sudamericano, son los liderazgos fuertes y una militancia muy comprometida los que garantizan ese camino a la igualdad, la integración y el desarrollo, mucho más de lo que lo ha hecho el mero cumplimiento formal de las instituciones demoliberales, a lo que tantos formadores de opinión asocian con la “calidad institucional”.

Dos ejemplos más para convalidar este juicio. Primero, el reciente golpe que derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo, dado precisamente por el Parlamento. El segundo, cuando la Asamblea constituyente de Bolivia no aprobó prohibir los latifundios mayores a 5000 hectáreas, y, sin embargo, ese mismo artículo, sometido a plebiscito, fue apoyado por más del 80% de la población. Esto explica cómo en nuestros países se ha renovado parcialmente la democracia, mucho más a nivel de los liderazgos y la militancia, propios de la democracia social y participativa, que de los parlamentos –legado principal del sistema meramente representativo– que en estos casos expresan más los intereses de la corporación política que la voluntad del pueblo.

Esto de ninguna manera desprecia los contenidos más profundos del concepto “república”, en la medida que demuestra su compromiso absoluto con lo público. Nunca como ahora se han respetado los grandes ejes de lo público como la libertad de reunión, la libertad de expresión llevada a niveles de agravio a la autoridad nunca antes vistos, la libertad para decidir la orientación sexual y las iniciativas de género, la condena a las violaciones de los Derechos Humanos, la simplificación del matrimonio, la adopción y el divorcio en el nuevo Código Civil, el acceso igualitario a Internet para los estudiantes primarios y secundarios, el ingreso a la Universidad Pública de miles de estudiantes de familias humildes del Conurbano, y tantos otros. A diferencia de los procesos de ajuste, que propicia el liberalismo económico a partir del autoritarismo político –ya sea por vía de la represión o de la despolitización– este proceso histórico recupera la capacidad de intervención estatal –es decir de la sociedad– en la economía, mientras garantiza todas las libertades civiles y políticas.

Creo haber enunciado algunos ejes que justifican el cambio de etapa. Y, con ese cambio de etapa, la necesidad de su institucionalización, de elevar a rango constitucional los nuevos derechos, de modo de, por un lado, dificultar su reversibilidad, y, por otro, acercarlos al plano de los derechos adquiridos por el pueblo, de modo que la sociedad –incluso el poder– los internalicen de modo definitivo. Podría graficarlo diciendo que, en otras épocas que jamás deben volver, el pueblo soportó bombardeos, golpes, proscripciones, y hasta un genocidio. Pero el poder no pudo arrebatárle el aguineldo.

Todo esto justifica, por sí mismo, la oportunidad de una reforma constitucional. Pasar de un sistema constitucional que gira en torno de la propiedad privada a poner como eje el valor de la igualdad y los derechos sociales. Pasar del concepto clásico de Estado de Derecho al paradigma sudamericano de nuestros tiempos, el Estado Social de Derechos. Atender, como pilares de una nueva norma fundamental, a las instituciones del Poder Popular y de la Economía Social y Solidaria.

Así, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su preámbulo un Estado “donde predomine la búsqueda del vivir bien”, “inspirado en las luchas del pasado, la sublevación indígena anticolonial, la independencia, las luchas populares de liberación, las marchas indígenas, sociales y sindicales, las guerras del agua y de octubre, las luchas por la tierra y el territorio, y con la memoria de sus mártires”. Y consagra instituciones del poder popular como la “democracia comunitaria”, la “participación de la población organizada en la toma de decisiones”, “la educación descolonizadora”, “la acción popular”, “la iniciativa ciudadana” para confeccionar leyes, la elección popular de los magistrados y del Consejo de la Magistratura y la “sencillez administrativa”. E instituciones de la Economía Social y Solidaria como el “sistema único de salud gratuito, intracultural e intercultural” y “la producción de medicamentos genéricos”, “las formas comunitarias de propiedad y de producción” y la “función social de la propiedad”, cuyo uso no puede ser nunca “perjudicial al interés colectivo”, y donde “todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo, reducir

desigualdades y erradicar la pobreza”. “El Estado fomentará las entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva”, los recursos naturales son de propiedad directa, indivisible e imprescriptible del pueblo y no pueden inscribirse en los mercados de valores ni utilizarse para operaciones financieras, y el incumplimiento de la función social de la tierra privada la devuelve al pueblo.

En el mismo sentido, la Constitución de Ecuador de 2008 comienza con un “nosotros y nosotras”, apelando a la sabiduría de todas las culturas, como herederos de las luchas sociales de liberación frente a toda forma de dominación y colonialismo, con la decisión de construir la convivencia en armonía con la naturaleza para alcanzar el “buen vivir”. Consagra como “derechos de la naturaleza”, aquellos que no son de las personas sino de la madre tierra. Le dedica especial atención a la función de Rehabilitación Social del Sistema Carcelario. Y establece el “sistema económico social y solidario”, y da tratamiento preferencial al “sector popular y solidario” del sistema financiero.

Así también podríamos analizar el Proyecto de Reforma Constitucional de Venezuela de 2007, que, entre otras cosas, garantiza diferentes formas de propiedad –pública, social, colectiva y mixta– además de la clásica propiedad privada del modelo liberal. Y los proyectos de reforma constitucional, que, entre otros, reconocen el “derecho a la felicidad”. En definitiva, hay razones políticas, clima de época y antecedentes en la región, que justifican avanzar hacia una Constitución basada en los derechos sociales, la organización del poder popular y la economía social y solidaria, como alternativa a la presente crisis del capitalismo, y sus desgastadas fórmulas de ajuste.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y EL CONTEXTO SUDAMERICANO

(Diario Tiempo Argentino, 13.07.12)

Todas las medidas adoptadas hasta ahora por las economías desarrolladas con la pretensión de paliar su crisis confirman la decisión de persistir en el modelo

financiero, que, precisamente, es el causante de la misma. En lugar de dirigirlas al estímulo de sus fuerzas productivas, van al rescate de los bancos, es decir, de quienes nuclean el tráfico de derivados financieros que apresuró el estallido, debido a su desconexión de la economía real.

La insistencia en el desenfreno financiero por parte de los países del Norte, va acompañada de una demanda cada vez mayor de recursos energéticos que no poseen en la medida de sus necesidades, y, por lo tanto, conlleva al control político y militar de zonas estratégicas. La naturaleza misma del modelo los lleva a repetir el ciclo de dominación ilimitadamente, tanto en su sostenimiento en el tiempo como en su inescrupulosidad en cuanto a los medios.

Se trata de un círculo vicioso del cual América Latina no es ajena desde hace cinco siglos, y, en especial, desde nuestro proceso emancipatorio, a principios del siglo XIX. Y que nos costó la sangre de miles de mártires. La diferencia que marca esta primera década del siglo XXI es la confluencia de gobiernos populares, encarnados por liderazgos muy fuertes, dispuestos a cuestionar aquella hegemonía de la dependencia económica, la depredación de los recursos naturales y el tutelaje político-ideológico.

LA ALTERNATIVA SUDAMERICANA. En el G-20, los países emergentes –con gran protagonismo de la Argentina– vienen denunciando ese modelo. Asimismo, en su encomiable discurso ante el Comité de Descolonización, nuestra presidenta desplegó un conjunto de axiomas que trascienden la disputa bilateral por un territorio, para situarse en el plano de los nuevos paradigmas de civilización. En la misma semana, la Argentina lideró la posición de numerosos países emergentes en la Cumbre Ambiental de Río de Janeiro, denunciando la estrategia de los poderosos. Al mismo tiempo que depredan el ambiente, incumplen los tratados que firmaron y exportan al Sur sus tecnologías más sucias. Están obligados a incumplir con las metas ambientales debido a su necesidad de sostener el desenfreno del modelo, y proponen pagar bonos a nuestros países a cambio del incumplimiento. Esto acarrea dos consecuencias graves: 1) No detiene la depredación; y 2) Para pagar su incumplimiento

necesitan seguir concentrando divisas, convierten al medio ambiente en un nuevo derivado financiero, y reproducen el ciclo de explotación.

Si juntamos estas tres sólidas posiciones internacionales sostenidas por nuestra presidenta –G-20, Comité de Descolonización y Cumbre Ambiental– con las últimas medidas de política interna –regulación del mercado de divisas, administración del comercio exterior, recuperación de autoridad monetaria del Banco Central, recuperación de YPF y el programa de construcción masiva de viviendas– nos encontramos con una consistencia notable de la filosofía de un proyecto global, que es, entre otras cosas, lo que le ha dado a Cristina Fernández de Kirchner, un alto predicamento entre los líderes políticos de la región y del mundo.

PARAGUAY COMO CUÑA. El golpe perpetrado por la corporación política de Paraguay, en connivencia con los grupos de poder oligárquico, fundamentalmente terratenientes, se inscribe en esta disputa de hegemonía regional. Los gobiernos populares del Mercosur y la Unasur suspendieron transitoriamente la participación del Paraguay en esos organismos, hasta que se repare la anomalía institucional. Sin embargo, los EE UU, el Vaticano, el gobierno de derecha español y la Alemania de Angela Merkel fueron los primeros en reconocer al nuevo e ilegítimo gobierno. En el caso del Mercosur, de fuerte sello comercial, Paraguay se siente desobligado de sus compromisos, y liberado, por lo tanto, no sólo para establecer con los EE UU acuerdos de libre comercio, sino también para permitir la instalación de bases, el ingreso del Comando Sur o de equipamiento militar, además de ejercer una tolerancia mucho mayor respecto de sus operaciones de inteligencia. En estas condiciones, Paraguay se reafirma como un territorio apto para todas las políticas que los EE UU quieran hacer sobre la región.

Qué coincidencia, además, que la corporación política que propinó el golpe al presidente Lugo, es la misma que venía impidiendo el ingreso de Venezuela al Mercosur. Por eso, había que responder con una medida política y simbólica muy fuerte y muy autónoma, como fue la incorporación de Venezuela. En estos procesos no se puede andar con medias tintas.

Un cambio significativo en la ecuación política de la integración sudamericana: Venezuela, con todo su potencial energético y político, accede al bloque del Cono Sur y nos conecta a este con el Caribe. A su vez, los EE UU y los grupos de derecha de la región encuentran en la nueva situación paraguaya el canal de entrada al Cono Sur, la cuña al proceso de integración, que no habían logrado con otros gobiernos afines.

Está demostrado que la vocación de cambio, expresada por los pueblos sudamericanos en la última década, ha permitido el surgimiento de los liderazgos presidenciales con mucha más celeridad que lo que tardan sus sistemas de partidos e instituciones demoliberales, en adecuarse a los nuevos paradigmas. Y esto, sumado a las sucesivas intentonas destituyentes que atraviesan nuestros países, no hace más que ratificar la dimensión de la batalla cultural que aún tenemos pendiente.

POLÍTICAS PERMANENTES VS. MANDATOS CORTOS. Sin aferrarme a ningún atavismo, dogma ideológico, ni preconcepción arcaica, y dispuesto a analizar la realidad desde las teorías más recientes, afirmo que el Imperialismo existe y está plenamente vigente. Recubierto de ropajes nuevos y apelando a formas más lozanas y sutiles, pero tan preciso, obstinado y eficiente como siempre. Apoyado en sus acólitos locales, tiene sus intereses puestos en la región, maneja estrategias, y está dispuesto a ejecutarlas. Sus políticas de intromisión –justificada, sucesivamente, con la “Doctrina Monroe”, la política del garrote, la Doctrina de la Seguridad Nacional o los golpes blandos del presente– responden a una idea permanente. La idea permanente de que, en la medida en que cualquier país sudamericano aplique políticas que desentonen con sus intereses, los poderes fácticos –que de ellos se trata– se ven obligados a intervenir en los asuntos internos para reordenarlo.

El esquema descrito es una “política permanente”, que ha recurrido a la invasión, el gompismo, la hegemonía cultural, la dependencia financiera y otros

mil formatos, desde los albores mismos de nuestra emancipación. En algunos países más que en otros, dichas políticas han tenido la inteligencia de construir toda una arquitectura institucional, que genera tantas mediaciones entre la voluntad popular y la decisión política, que finalmente termina desdibujando aquella voluntad popular y jugando a favor de sus propios intereses. El ejemplo más palpable es el reciente golpe en Paraguay, dado, nada menos, que por una institución “democrática” como el Parlamento, a través de otra institución “democrática”, como lo son los partidos políticos tradicionales. Una clase política que no actúa en representación de los más pobres, sino de los más poderosos; que no es independiente ni soberana, sino servil a las directivas de los terratenientes y los grupos transnacionales ligados al agronegocio.

Está en disputa, pues, el significado y el contenido de lo democrático. Y una disputa semejante amerita revisar el sistema institucional en el que se apoyaron los sucesivos ajustes sociales, y pensar en instituciones nuevas, que afiancen los actuales procesos populares y consoliden los nuevos paradigmas.

Tal lo hecho en países hermanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, justifica el debate sobre una Reforma Constitucional. Una Reforma, que, al andamiaje tradicional de instituciones liberales, lo interpele desde una nueva mirada institucional, con anclaje en conceptos como el poder popular y la economía social y solidaria, con una metodología que saque la discusión de los laboratorios para situarla en el seno de las enriquecedoras experiencias que arroja el debate público de estos tiempos.

Por último, es ese mismo sistema de poder el que, de su lado, aplica políticas permanentes. Pero que, al mismo tiempo, limita a mandatos cortos la legitimidad de la política, de modo de debilitar o interrumpir los procesos populares cuando estos tienen la osadía de disputar su hegemonía. Y saltan con la cantinela de la alternancia y la excusa de que los líderes populares no deben “perpetuarse”. Justamente son los inspiradores de políticas perpetuas, los que

necesitan mandatos cortos de la política, de modo que esta no se aventure a poner en tela de juicio sus intereses, no pueda dar batallas culturales que suelen ser más largas que un mandato o dos de un presidente.

No doy por cerrado el debate. Pero tampoco permitamos que sean “ellos” quienes lo cierren. Y procuro que nos preguntemos si hay o no una relación estrecha entre la Reforma Constitucional, y el desafío de consolidar los procesos populares de nuestra querida Sudamérica.

AFIANZAR LA PATRIA GRANDE

(Diario Tiempo Argentino, 18.02.13)

El triunfo de Correa puede analizarse desde tres planos convergentes. En el plano interno, reafirma un proyecto de revalorización del Estado, la economía social y el poder popular. La amplia diferencia le dará la mayoría que necesita para aprobar las leyes de medios y reforma agraria, por ejemplo.

El segundo es la consolidación de la integración regional y sus instituciones políticas y económicas en busca de la autonomía respecto del tutelaje histórico de los EE.UU. y del dólar como moneda internacional.

El tercero tiene que ver con la disputa a nivel planetario del excedente financiero y la escasez de recursos energéticos; una disputa entre modelos de acumulación y desarrollo con el capitalismo ultrajante.

A mediados de los 70, el poder financiero trasnacional, por un lado, y, por otro, los movimientos emancipatorios provenientes de la descolonización afroasiática, la revolución cubana y su proyección latinoamericana, la teología de la liberación, las luchas contra el racismo en los EE.UU., la primavera de Praga y el Mayo Francés, y tantos otros, se disputaban –crisis del petróleo mediante– los excedentes del crecimiento industrial de posguerra, el mayor acopio de riqueza, hasta entonces, de la Historia de la Humanidad.

Hoy también hay, en líneas generales, dos contendientes: una vez más, el poder financiero internacional de un lado. Del otro, la cooperación Sur-Sur,

los intentos de consolidar modelos de desarrollo autónomos en Medio Oriente, África, Asia y América Latina.

A diferencia del proceso anterior, en que el poder financiero resultó claramente victorioso e implantó tres décadas de ajuste neoliberal, hoy el contexto es distinto. Las instituciones financieras están en crisis, han aparecido nuevos actores mundiales, y América del Sur está más organizada.

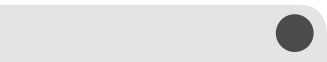
La sintonía entre los gobiernos populares presentes en la mayoría de nuestros países abre paso a una injerencia en agenda mundial sin precedentes. Otra arquitectura financiera, el calentamiento global, la defensa de los recursos, la justicia social, la paz, la salida de la unipolaridad hacia una nueva dialéctica entre diferentes centros de poder, son temas que encaminarían a un mundo más justo, y en los que América del Sur tiene gran espacio para un protagonismo responsable.

Por todo esto vale festejar el triunfo de Correa, y seguir estableciendo mecanismos de coordinación que den a todos los procesos populares de esta extraordinaria etapa política de la región, la continuidad que necesitan.

Capítulo III

REPORTAJE RADIAL DE HEBE DE BONAFINI A CARLOS RAIMUNDI .

(AM 530 Radio la Voz de las Madres 5-4-12)



Hebe de Bonafini: -Carlos, gracias por venir, contanos un poquito tu historia...

Carlos Raimundi: -Hebe, gracias a vos por permitirme este honor de acompañarte y acompañar a las Madres en este lugar que traspasa dignidad. Antes de responderte, quiero decir a los presentes que tengo una sensación corporal que es sentirme pequeño ante tanta grandeza.

- Yo estuve en el partido radical, pero nunca me sentí radical. En plena militancia universitaria, en La Plata, reabrimos el Centro de Estudiantes de Derecho, que fue el primero que se recuperó durante la dictadura, y nos sentíamos atraídos por la figura de Alfonsín, abogado de derechos humanos, etc., frente a un PJ que terminó aceptando la autoamnistía de Bignone.

Durante mi primer mandato como Diputado, firmé muchos más proyectos con el Grupo de los Ocho, que integraban Chacho Álvarez y Germán Abdala, que con el bloque radical. Así fue que en 1994 me integré al Frepaso, como una alternativa a la izquierda de los partidos tradicionales. Al poco tiempo, pese a que el Frepaso había crecido desde la fuerte crítica al bipartidismo anacrónico, luego de una dura discusión interna termina asociándose a uno de aquellos partidos tradicionales y formando la Alianza.

El primer año de la Alianza es aquello de lo cual yo me autocritico. Porque apoyé un par de leyes sin leer correctamente que se trataba de un gobierno entregado desde su inicio. Digo esto porque, si bien es cierto que salir correctamente de la convertibilidad no era simple, sí lo era tomar la decisión política de relevar de sus cargos a personajes como Silvani, al frente de la DGI; Pou, al frente del Banco Central; Nazareno, al frente de la Corte, o Barra, al frente de

la Auditoría. Y no se hizo. No se hizo porque habían negociado la continuidad con el menemismo, por lo tanto, todas las medidas que tomara iban en la dirección contraria al compromiso electoral asumido con el Pueblo. Cuando Cavallo propone el “déficit cero”, rompimos con la Alianza desde un grupo de diputados del Frepaso, y pasamos a integrar un interbloque con el ARI, en un momento en que Elisa Carrió aparecía como la emergente más clara de la crisis.

Hebe: -¿En aquel momento, dejaste de hacer política por algún tiempo?

Carlos: -No, desde mis comienzos, en otras palabras, desde que tengo memoria de mí mismo, nunca dejé la política. Además, tenía mandato hasta el año 2003, por lo cual me tocó vivir aquellos días de diciembre de 2001 como diputado nacional. La noche del 19 de diciembre estuve en la Plaza, en esa doble condición: la de un político a quien la gente criticaba severamente, y con razón, pero al mismo tiempo sin perder nunca mi condición de un ciudadano común que compartía lo que el Pueblo estaba criticando. Se trata de situaciones ante las cuales nos pone la vida, que no planificamos...

Luego, en ese año 2001 surge aquel ARI que fue una suerte de continuidad de lo que había despertado el Frepaso en su nacimiento. Desde aquel interbloque no votamos ninguna de las leyes del duhaldismo para consolidar el statu quo en favor de los poderosos que se habían aprovechado de los sectores medios y de los más humildes. Me refiero a la llamada ley de bienes culturales para licuar la deuda de Clarín, la pesificación asimétrica que licuaba los pasivos empresarios, la derogación de la ley de subversión económica para que no fuesen sancionados.

Y en ese marco aparece Kirchner. Yo no lo voté, esencialmente porque venía elegido por Duhalde. Pero siempre fui muy respetuoso de su decisión de recuperar la capacidad de la política para interpelar al poder, de aquel “no me van a llevar por delante”, de aquella rebeldía, de aquel corte histórico respecto lo serviles que habían sido los gobiernos anteriores.

El gran eje cultural que cambia -o uno de los grandes ejes- es que se empieza a

discutir sobre el poder. Estos tipos –perdón, ‘estos tipos’ son Néstor y Cristina- diferenciaron gobierno de poder, y comenzaron a mostrar al poder en toda su brutalidad. Porque hasta entonces el poder actuaba por detrás. Gobernaba, pero nos hacía creer que quien gobernaba era la política. Entonces, apostaban al fracaso de la política para romper la credibilidad del Pueblo en lo que es su herramienta más poderosa, en un sentido amplio, la única herramienta de que dispone para interpelar al poder. Y ese es un cambio fundamental para la Argentina, por cuanto a partir de allí se instalan nuevos paradigmas.

Hebe: -¿Qué tipo de relación tuviste con Néstor Kirchner?

Carlos: -No lo conocí personalmente, salvo una vez por teléfono, en una nota radial, nunca tuve contacto directo con él, me refiero a un diálogo personal. Sí traté a Cristina, porque tuvimos períodos legislativos en común.

Otro gran mérito de Kirchner es que recupera los símbolos. Lo explico demostrando lo contrario. Pero antes te digo, Hebe, ya que me das la oportunidad, que esto tiene que ver con mi propio proceso personal. No vengo del peronismo, pero desde 1994, en los inicios del Frepaso, convivo con el peronismo, y comienzo a entenderlo, seguramente mucho más tarde de lo que hubiera querido...

Vuelvo a los símbolos. Para hacer lo que hizo, Menem arrasó con los símbolos de la memoria histórica del peronismo. Entregó el manejo de la economía a una multinacional, nombró a la familia Alsogaray y a otros dirigentes del neoliberalismo como funcionarios de su gobierno, y se abrazó con el almirante que había sido el inspirador del golpe de Estado de 1955. Al destruir los símbolos, intenta borrar la memoria histórica, y el sujeto histórico del cambio y protagonista del movimiento nacional y popular se debilita. Kirchner viene a recuperar aquellos símbolos, y con ello, a reconstruir el sujeto del cambio. Es decir, conecta al sujeto revolucionario con un sistema de ideas de izquierda. No es el primero que enarbola esas ideas, pero sí, después de Perón –y con mucha mayor debilidad el breve período de Cámpora- es el primero que las conecta con las masas populares, con los trabajadores, con los más débiles.

Cuando dice: “procedan”, por ejemplo, allí convoca, también, a los jóvenes. ¿Cómo se sentiría convocado un joven para indultar a un genocida, para mantener ‘relaciones carnales’ con los EE.UU. o para cerrar fábricas? Los jóvenes se sintieron convocados a partir de todo lo contrario, cuando se les propuso reconstruir la justicia y la dignidad. Y así se va reconciliando el Pueblo con la política, porque el nudo central a partir del cual se desmanteló el país desde la dictadura en adelante, era despolitizar a la sociedad, mostrarle sólo lo peor de la política para que desconfiara de ella. Y esto de la recuperación de los símbolos y la recuperación de la política, quedan en la memoria, reconstruyen la memoria histórica y colectiva del movimiento nacional, de modo que las conquistas no terminen con el gobierno que las dispuso, sino que se sostengan en el tiempo por estar internalizadas y defendidas por el Pueblo. Y es, especialmente, en esa memoria de los jóvenes, donde esa semilla perdura, donde los derechos siguen siendo derechos a través del tiempo, y el proceso se va tornando irreversible.

Siempre creímos en la agenda de este presente. Desde el primer día de nuestra militancia luchamos por más Estado, por el mercado interno, por la inclusión social, por la independencia financiera, por América Latina unida. Nunca cambiamos, los que cambiaron fueron otros.

Hebe: -Vos hiciste un libro donde proponés una moneda única para el Mercosur...

Carlos: -Sí, en ese libro hablamos de lo que se está haciendo hoy, con la creación del Banco del Sur, de una moneda regional que nos independice del dólar, con la coordinación de políticas macroeconómicas en la mayor parte de la región, con una relación muy fluida entre sus líderes populares.

Volviendo a la pregunta inicial, mi conclusión es que yo nunca cambié. Fueron las estructuras de los partidos tradicionales, fue la corporación política quien claudicó, quien fue cambiando de posiciones. Siempre sostuvimos el carácter público de los aportes previsionales o de Aerolíneas, y jamás habríamos de

votar en contra. Siempre apoyamos la ley de medios, desde que presentamos un proyecto en 1990 con el diputado Álvarez Guerrero... ¿Quién guarda la coherencia? ¿El que sigue en un sello aunque cambie de posiciones, o el que se mantiene dentro de una misma línea de pensamiento, y afronta los pasos que sea necesario dar con tal de sostener esos pensamientos?

Hebe: -¿por qué ahora Nuevo Encuentro?

Carlos: -Significa sentirnos parte de este proceso político desde un lugar diferente de la estructura del partido justicialista. Y nos sentimos ante un interrogante, que es a su vez un gran desafío, y es si la etapa que vivimos es un eslabón más en la cadena de gobiernos justicialistas, o si es fundante de una nueva categoría política, hija directa del peronismo, de los mejor del peronismo, cuyo eje vertebrador es, sin duda, el peronismo, pero superadora de la estructura del PJ. Es decir, si el PJ como estructura termina perdiendo centralidad, a favor de las nuevas expresiones que están naciendo, con protagonistas muy jóvenes, que no llegan a la política a partir del romance entre Evita, Perón y el Pueblo –más allá de la memoria histórica que atesoren de ello-, sino de un nuevo romance, que es entre Néstor Kirchner, Cristina y el Pueblo.

Ahora bien, no tenemos diferencias sustanciales con numerosas vertientes del Frente Para la Victoria, como La Campora, Kolina, la Corriente de la Mlitancia, y muchos integrantes del Movimiento Evita. Y nos consideramos una vertiente mas de esta construccion. Lo central es para nosotros la agenda transformadora, y no los matices que puedan existir entre estas agrupaciones. Con ellas debemos construir ese nuevo sujeto polıtico, independientemente de su denominacion.

Hebe: -Sos, ademas, docente universitario, y te has ocupado de las relaciones internacionales y de la integracion latinoamericana...

Carlos: -Sı, soy y he sido docente de grado y de posgrado en varias Universidades, como la de Buenos Aires, Tres de Febrero, San Martın, y especialmente

en La Plata. Hace pocos días me hice cargo de un Instituto de Política Exterior de la Universidad de Lomas de Zamora, desde donde vamos a conectar mucho las decisiones nacionales y soberanas que se están tomando en nuestro país y América Latina con el contexto internacional.

Hebe: -Hablamos un poco de este presente de América Latina, y de esa decisión histórica de rechazar la integración al ALCA.

Carlos: -Esa decisión, realmente histórica, se da en un momento en que converge el hartazgo de los pueblos respecto de la pobreza y los ajustes, con la presencia de líderes populares muy fuertes que interpretan eso y deciden dar pasos audaces, por primera vez en muchas décadas. Los pueblos, al elegir en Chile a una mujer agnóstica, madre soltera e hija de un militar asesinado, o en Brasil a un obrero al que le faltaba un dedo y no había completado el secundario, o en Bolivia a un indígena, o en Paraguay a un ex obispo ajeno a la estructura del Partido Colorado, están emitiendo el mensaje de que están dispuestos a bancar un cambio. Ahora bien, también tiene que suceder que el líder elegido no traicione y esté decidido a dar esos saltos, y en este caso fue así. Veamos que en 2005, cuando se dijo No al Alca, los EE.UU. tenían un presupuesto militar superior a la suma de los presupuestos militares de los siguientes treinta y cinco países del mundo. Y sin embargo se les dijo “No”. Y se trató de un paso trascendental, porque de no haberse dado, nuestras economías hubieran sido arrastradas a la crisis internacional. A veces escucho a compañeros, o ex compañeros con quienes estuvimos juntos en etapas de resistencia a la dictadura o al neoliberalismo, que no se bancan ciertas contradicciones de los procesos de construcción, que parece que no saben vivir en otro lugar político que no sea el de la resistencia, y que, por ponerse enfrente del gobierno nacional, han terminado por ser funcionales a los intereses de la derecha destituyente. Estos compañeros suelen dar por sentado ese No al Alca, o la recuperación de los recursos del ANSES, como si fueran pequeños detalles, y ponen en el centro todo lo que falta o todo lo que ellos harían desde una perspectiva maximalista,

sin valorar la importancia tremenda que ha tenido ese tipo de decisiones. Haber dicho que NO al Alca es un hecho histórico, junto a otros cambios de paradigma como el desendeudamiento y la mayor autonomía financiera, o la recuperación del control político de la economía. ¿Con qué autoridad podríamos reclamar hoy Malvinas, si tuviéramos una misión del Fondo Monetario Internacional todas las semanas monitoreando nuestra economía? ¿Se acuerdan ustedes del nombre del Ministro de Economía de los años de mayor crecimiento durante la Presidencia de Néstor Kirchner? Se llamaba Carlos Fernández, pero no nos acordamos porque en esta nueva etapa es la política la que gobierna a la economía.

Luego vino el conflicto por la resolución 125, que a mi juicio no estuvo bien administrado. Es decir, se trataba de una muy buena medida pero mal administrada políticamente. Es cierto que surgieron en toda su intensidad la voracidad y el salvajismo mediáticos, lo que complejizó aún más el escenario político. Y todo eso llevó, en parte, a la derrota electoral de 2009, sumado a un mal mensaje que fue el repliegue hacia el PJ y las listas testimoniales. A partir de allí, se intensifica la agenda de transformaciones: ANSES, Aerolíneas, Asignación Universal, Ley de Medios, Matrimonio Igualitario, es decir, la recuperación de la iniciativa política por parte del gobierno, como demostración de la importancia y la fuerza política y social que tiene el hecho de tomar grandes decisiones con sentido popular, y como causa del gran triunfo electoral de Cristina en 2011.

Hebe: -¿Qué opinás de la situación que se ha planteado con Moyano?

Carlos: -Moyano no es el dirigente 'de mis sueños', yo imagino a otro tipo de dirigente sindical, en término de prácticas cotidianas. No obstante, respeto mucho las posiciones político-ideológicas que ha tenido históricamente, por ejemplo, cuando en los años 90 se separa de los 'gordos', forma el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, y desde allí enfrenta al neoliberalismo de Menem. Pero, en estos momentos, veo como un error llevar una serie de reclamos salariales muy atendibles, al plano de la confrontación política con el gobierno.

Lo veo como un error por varias razones. Primero, porque se refiere al sector de trabajadores formales y con sueldos relativamente mayores a los de los trabajadores de sueldos más bajos o con trabajo no regularizado. Entiéndase que jamás diría que lo que gana un trabajador es mucho (siempre hay que ir por más sueldos, uno lo que quiere es que no haya burguesía), sólo lo comparo con las escalas salariales más bajas. Ahora bien, si eso se traslada al plano político, quiere decir que lo que se reclama no es dinero, sino poder. O tal vez, el eje del conflicto sea el manejo de las obras sociales, y entonces, hay que plantearlo de esa manera, y, a mi juicio, de esa discusión se sale con un Sistema Único de Salud Pública. Un sistema que ponga a todos los efectores de salud a disposición de toda la población, es decir, que si por un lado, tenemos un tomógrafo que se financia con un par de consultas de una prepaga muy cara y por otra parte tenemos un aparato que se descompone por sobreuso en un hospital público, lo que tenemos que hacer es poner ambos a disposición de toda la demanda en forma igualitaria. Además, cuando el mayor volumen del presupuesto en salud se destina a medicamentos y alta complejidad, quiere decir que el negocio de esa política no es que el pueblo esté sano, sino que esté enfermo. Es decir, debemos revertir eso en favor de políticas preventivas. Todo esto lleva a una síntesis de las políticas públicas de salud que comprenda las cuatro grandes áreas de prestadores: el hospital público, el PAMI, las obras sociales sindicales y las prepagas. Ese es el nivel, el de las altas políticas públicas, en el que debe situarse la Presidenta en este conflicto con Moyano, cosa que estoy seguro que la Presidenta está haciendo y que seguirá en ese mismo camino, y jamás ponerse a la misma altura.

Otro error de Moyano es decir “la mitad de los votos de Cristina vienen de los ‘niños bien’ y la otra mitad de los trabajadores”, como lo hizo en el acto de Huracán. Me parece que en estos momentos, la Argentina tiene desafíos tan ambiciosos y apasionantes por delante, que lo que hay que hacer es juntar cada vez más, y generar una sinergia entre jóvenes y trabajadores, para no repetir la división de otras etapas históricas, y porque, además, los jóvenes son trabajadores, y el campo popular necesita más y más unión entre juventud y trabajo.

Hebe: -Hablemos ahora de la ley de medios...

Carlos: -A los medios hegemónicos les han cortado algunos negocios muy grandes, y eso les duele. Pero lo que les duele más es que está duramente cuestionado ese lugar donde siempre se pararon y es el monopolio de la formación y de la modelación del pensamiento. En la calle Santiago del Estero al 1000 está la nueva sede de la Facultad de Comunicación Social de la UBA. En uno de sus pasillos hay una especie de mural, con la reproducción de las tapas de Clarín de los principales hitos políticos de las últimas décadas. La primera vez que me paré frente a ellas pensé: ‘claro, con razón una parte de la sociedad argentina piensa lo que piensa...’ Porque la manera de interpretar esos hechos de un sector muy grande, muy dinámico, muy formador de opinión, muy formador de poder, como es cierto sector de la clase media argentina, habla por boca de esas tapas. Según ellas, la dictadura era ‘nuevo gobierno’; al día siguiente: ‘muchos países del mundo han reconocido al nuevo gobierno’; y al tercer día: ‘los EE.UU. le han otorgado un crédito para financiarlo’. Esa es la forma que tuvo ese sector de la sociedad de interpretar la realidad. De allí que la rebaja de jubilaciones de De la Rúa haya sido ‘un acto de coraje del presidente’, y no un ajuste brutal; no fue un salvajismo, sino un acto de coraje. Todo esto que ellos fueron modelando sutilmente, imperceptiblemente para muchos, impunemente, eso es lo que se puso en cuestión.

A ver: en números muy gruesos, el planeta tiene hoy alrededor de 7 mil millones de habitantes. De ellos, unas 4.200 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Pensemos en el grueso de la población de China, de la India, en el continente africano y en nuestra América Latina. Y 1.200 millones de Seres Humanos tienen hambre. Cuando menciono esta cifra, uno tiene la tentación de pensar en un gráfico, pero debemos pensar en chicos, que, el día que nacieron, eran ontológicamente iguales a mis hijos. Eran iguales. A partir de ese día, fue la política lo que a mí me permitió vacunarlos y alimentarlos, y a otros no. Y es por la política que nuestros hijos tienen dientes y otros no. Sin embargo, ¿desde cuándo asumimos la crisis internacional? Des-

de que el lunes 15 de septiembre de 2008, cuando cae Lehman Brothers. Es decir, una sola persona con hambre no es una crisis, pero sí lo es la caída de un fondo de inversión. Hasta ahí llega nuestro estado de colonización cultural. Y frente a ello, la pregunta: ¿las cadenas de medios de comunicación, son ‘independientes’, de esta manera de interpretar, de resignificar la realidad, de que nos movamos con esta escala de valores?

Bueno, eso mismo hay que trasladarlo a la Argentina. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de contar con un instrumento como la Ley de Medios, cuyo texto establece una porción de licencias para el sector público y otro para la llamada sociedad civil, eso implica un corte histórico que no nos perdonarán. Y es justamente porque no nos lo perdonarán, que esta batalla no tiene empate posible, esta batalla hay que ganarla definitivamente.

Hebe: -Sin embargo, dicen que la Ley está un poco parada...

Carlos: -Sí, ahí está parado en la Corte el artículo 161. Hay que seguir haciendo mucha presión social sobre la Corte. Yo no manejo información calificada, pero tengo la intuición y el temor de que algunos de sus miembros tengan la intención de compensar esa parálisis de la Ley de Medios con algunos fallos, digamos, ‘populares’, como el del aborto. Tenemos que estar alerta y trabajar muy fuerte sobre eso.

También me he enterado de que hay algunos problemas de gestión en la autoridad federal, por el alejamiento de Mariotto a partir de su cargo en la Provincia, y por el tiempo que se demoró nombrar a su sucesor. Bueno, ahora el sucesor está nombrado, y debe concretarse todo lo que falta.

Hebe: -Vos te acordás lo que yo le dije a la Corte...

Carlos: -Si, me acuerdo perfectamente. Dijiste sin filtro lo que muchos pensamos. Yo sé lo que costó armar esa marcha, y llegamos a la puerta de tribunales, mejor dicho, a la vereda de enfrente. Pero esa misma semana, a Magnetto lo

sorprendieron en una reunión en el mismísimo despacho del Presidente de la Corte. Vos denunciaste eso, en tus propias palabras...

Además de todo esto, yo veo una proliferación muy grande de medios alternativos. Esto expresa una militancia no partidaria, que configuró ese 54 % de votos que obtuvo Cristina, a pesar de que en todas las estaciones de servicio del país, en todos los restaurantes y en los bares de los principales centros urbanos y en todas las salas de espera de las clínicas privadas del país, teníamos un zócalo con un único mensaje, separado en distintas noticias: “la Argentina es una porquería”. Y sin embargo, el Pueblo, el país real, le ganó a ese mensaje virtual.

Hebe: -¿Cómo se puede revertir eso?

Carlos: -Habría que darse una política de delivery: distribuir los medios contrahegemónicos en los bares no creo que cueste tanto. Pero el mejor contrapeso es el mensaje que viene desde abajo, de las organizaciones sociales. Es desde allí desde donde se devuelve el mensaje de que no es tan feo vivir en la Argentina como nos dicen los medios más poderosos.

Hebe: -Podemos hablar un poco de la soja...

Carlos: -Mirá, Hebe, un poco por mi forma de ser y otro poco por la experiencia acumulada, me siento lejos de los discursos fundamentalistas. De un lado y del otro. Es decir, no creo que los nuevos métodos de siembra sean infalibles y no traigan ninguna consecuencia, y tampoco creo que nos vayamos a morir de cáncer mañana. Detrás de ambas cosas hay intereses. Opino que tenemos que darnos un proceso de mucha información e investigación, como ocurre con la minería y otras materias pasibles de gran incorporación de nuevas tecnologías. La salida es avanzar hacia la rotación de cultivos, la diversificación de la producción primaria, la apertura hacia las múltiples oportunidades que brinda la ganadería. Es decir, superar el monocultivo. Pero sepamos que esto no vamos a poder lograrlo de hoy para mañana, sino que habrá que trabajar

en la interface hacia esa diversificación gradualmente, por la sencilla razón de que muchas de las políticas que defendemos, como la asignación universal, los incentivos fiscales a la producción, los créditos del bicentenario, entre otras, se financian con las retenciones a la soja y los altos rendimientos que proceden de la siembra directa. A esto me refería cuando hablaba de lo inconveniente de plantear posiciones extremas.

Otro punto que me parece importante mencionar con relación a este tema, es la aparición de un nuevo sujeto rural, conformado por los movimientos campesinos de base, los sectores de la economía familiar, los productores frutihortícolas, los quinteros, las cooperativas de trabajo rural de base, que son quienes efectivamente 'ponen los alimentos en la mesa de los argentinos'. Mientras que aquellos actores representados por las entidades tradicionales, que durante el proceso de la resolución 125 conformaron la mesa de enlace, representan a aquellos propietarios cuya ganancia se vincula con el aspecto financiero de la producción rural, y no solamente con lo estrictamente productivo.

Y, si me permitís, un punto más, ahora referido a los nuevos sujetos que se están incorporando a través de este proceso político. Me refiero a las nuevas generaciones de universitarios que se incorporan a partir de las nuevas Universidades Nacionales y populares del conurbano, que imparten, además, nuevas carreras vinculadas con el mundo productivo de cada una de sus áreas de influencia. Por ejemplo, deberían incrementarse los centros de producción pública de medicamentos, y antígenos, de modo de reducir fuertemente sus precios, tanto en el mercado privado como en los planes de salud y en la provisión a los hospitales públicos. Con los agroquímicos, debería pasar lo mismo, en la medida que incentiváramos los aportes de los Institutos de transferencia de tecnología como el INTA, el INTI, etc.

En todo esto también hay de por medio una gran batalla cultural, donde, Tecnópolis constituye un ejemplo, al conectar una iniciativa como el acelerador de partículas con el sujeto social más necesitado, pero que a partir de este tipo de actividades entra en contacto con la ciencia y la tecnología. O cuando mi hija Valentina, estando en 6to. grado de la escuela primaria, en un establecimiento

público de La Plata, visitó la exposición de 200 años de economía argentina en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en Av. Córdoba y Uruburu, de Buenos Aires. Allí se se los pone al tanto, con ejemplos simples, de nuestra historia de dependencia económica y financiera, y del valor de tener una política industrial propia y autónoma, de lo cual muy difícilmente se olviden.

Un último ejemplo: habitualmente, son los sectores más acomodados de la sociedad los primeros beneficiarios de los saltos de tecnología como fueron el micromponente, el vhs, los celulares, el DVD o el blackberry. En el caso de la TV Digital, sus primeros beneficiarios son los sectores más vulnerables, como los jubilados, o quienes reciben la asignación universal. En lugar del aprovechamiento de la elite del salto tecnológico, la apropiación social. En fin, son pequeñas grandes batallas, en pos de la ampliación de derechos y la democratización social, cuyo valor a veces no percibimos por ser contemporáneos de ellos.

Hebe, te estaré eternamente agradecido, al igual que a Pedro Lanteri, por la oportunidad que me han dado en La Voz de las Madres, y por este encuentro de esta noche, tan importante para mí. Muchas gracias.-

Este libro se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2013,
en los Talleres de Simagraf de Silvio M. De Marco
Virrey Cevallos 1955 - CABA - Telefax: (5411) 4305 - 2004

